



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION
P R E S I D E N C I A

OF.

TEPJF-P-71/09

ASUNTO:

Opinión relativa a la acción
de inconstitucionalidad
33/2009 y sus acumuladas
34/2009 y 35/2009.

México, D. F., a 20 de marzo de 2009.

Partido Pol. Nal. Convergencia

LIC. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

En respuesta a la petición formulada en proveído de diez de marzo del año en curso, dictado en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009, promovidas respectivamente por los partidos políticos nacionales Convergencia, del Trabajo y de la Revolución Democrática, notificado mediante oficio 1588, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el trece de marzo del año que transcurre, anexo le envío la opinión emitida por este órgano jurisdiccional, en el expediente **SUP-OP-7/2009**.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

DERAZ
LA NACIÓN
CUERPO
JEF
D

A T E N T A M E N T E
MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

c.c.p. Expediente.

jijh

Recibo en un momento posterior, siendo en el momento
 con treinta minutos del veinte de marzo de dos mil
 nueve, el oficio original TEPJF-P-71/09, con la opinión
 relativa a la acción de inconstitucionalidad 33/2009 y
 acumuladas 34/2009 y 35/2009 que se anexa con el
 documento constante de ~~cuatro~~ cinco folios y
 noventa y cuatro folios útiles en original. Conste. La
 manz Osuebe Kiri munda, autorizada para recibir notifica-
 ciones de término fuera del horario de labores de la
 Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del
 artículo 7 de la ley reglamentaria. Conste. *[Firma]*
 Lo testado es válido. - Conste.

2009 MZO 23 AM 9 12
 011845

OFICINA DE CERTIFICACION
 JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

2009 MZO 23 AM 9 12

OFICINA DE CERTIFICACION
 JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
 SECCION DE TRAMITE DE CONTROMVERSAS C.O.P. Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONAL

2009 MZO 23 AM 9 45

SECCION DE TRAMITE DE CONTROMVERSAS C.O.P. Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION		SECRETARIA
Recibido por correo	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	de un enviado
por mensajería	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	con _____ copias
y _____ anexos en	(187)	fojas.
Se agrega sobre	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Observaciones: _____		

[Firma]
 SECRETARIA GENERAL
 SECCION DE TRAMITE DE CONTROMVERSAS C.O.P. Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONAL

VERA



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0717

EXPEDIENTE: SUP-OP-7/2009.

ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD: 33/2009
Y SUS ACUMULADOS 34/2009 Y
35/2009.

PROMOVENTES: PARTIDOS
CONVERGENCIA, DEL TRABAJO Y
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL
MINISTRO INSTRUCTOR JOSÉ FERNANDO FRANCO
GONZÁLEZ SALAS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 68, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY
REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL
ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DERACIÓN
E LA NACION
ACUERDO
ROVERSI
IONES DE
AR

Los Partidos Convergencia, del Trabajo y de la Revolución Democrática promovieron acciones de inconstitucionalidad, en las que reclaman la invalidez de diversos preceptos de la Constitución Política y Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en los Decretos 5 y 6 del Congreso del Estado, respectivamente, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el seis de febrero de dos mil nueve, cuya emisión, promulgación y publicación se atribuyen al Congreso Local, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial de dicha entidad.

En atención a la solicitud formula por el Ministro instructor, mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil nueve, en términos del artículo 68, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictado en el expediente de la acción de inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite la opinión respectiva.

En principio, es conveniente precisar que algunos de los conceptos de anulación contenidos en las demandas, son formulados de manera idéntica por los tres partidos políticos denunciante; otros son propuestos por dos institutos políticos; y otros más, sólo por el Partido de la Revolución Democrática, por lo cual serán analizados de manera conjunta, atendiendo al tema correspondiente, y en el orden antes mencionado.



A. Los siguientes conceptos de invalidez fueron propuestos, casi de manera idéntica, por los Partidos del Trabajo, Convergencia y de la Revolución Democrática.

PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS, FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO OFICIAL.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0716

3

SUP-OP-7/2009.

Aducen los partidos actores que el artículo 5, fracción IV, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional, al permitir participar a los servidores públicos, con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo oficial, en mítines o actos de apoyo a los partidos, precandidatos o candidatos.

Lo anterior, porque según su dicho, atenta contra la libertad de voto contenido en el artículo 41 de la Constitución Federal, y vulnera lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de ese ordenamiento constitucional, en relación con el 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que con esa participación se incumple el principio de imparcialidad, y por tanto, se afecta la equidad en la contienda.



FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
EAGUEROO
TROVERS
CIONES D.
DAD

El artículo impugnado prevé lo siguiente.

Artículo 5.- Son derechos político-electorales de los ciudadanos coahuilenses:

...

*IV. Participar en las precampañas y campañas, apoyando a los candidatos de su simpatía y a su partido, cuando se trate de funcionario público **deberá participar con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo oficial**, el ejercicio de este derecho no puede generar violación a ninguno de los principios en materia electoral, ni mucho menos puede ser causa de nulidad de la elección, ni la afectación del sufragio.*

...".

Del contenido de la norma impugnada, se destaca que los funcionarios públicos pueden participar en actos de proselitismo sólo con recursos propios y fuera de trabajo oficial, lo cual, en opinión de esta Sala Superior, no resulta inconstitucional, habida cuenta que ni la Constitución ni la ley prohíben la participación de los funcionarios públicos, en esas condiciones, en los actos del partido en el cual militan, derivada del ejercicio del derecho de afiliación a ese instituto político.

De la interpretación de los artículos 39, 40, 41 y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la libertad de sufragio, tiene como principal componente la vigencia de las libertades políticas y se traduce en que el voto no debe estar sujeto a error, presión, intimidación o coacción alguna. Es decir, no deben existir obstáculos para que su ejercicio sea pleno, sin interferencias o impedimentos de cualquier índole que impliquen la posibilidad de que su efectividad se menosprecie o se vulnere.

En el caso, si bien es cierto que la norma permite la participación de los servidores públicos en las precampañas y campañas, apoyando a los candidatos de su simpatía, sólo lo pueden hacer fuera del horario de trabajo oficial y con sus recursos propios, lo cual no implica, como lo aducen los partidos actores, que se atente en contra de la libertad del voto, pues aun reconociendo lo que representa la investidura



del cargo de los servidores públicos, debe ponderarse que esa participación no entraña, por sí misma, influencia, intimidación o coacción alguna en el electorado, y menos puede afirmarse que afecte la equidad en la contienda.

El acervo constitucional de los ciudadanos está conformado con el derecho al voto, el derecho a las libertades de expresión y de asociación en materia política y a realizar todos los actos inherentes a dichas libertades, entre otros acudir e intervenir en las asambleas, convenciones o mítines de los partidos, y a expresar dentro de los márgenes legales su inclinación hacia un partido o candidato.

Por ello, no resulta factible prohibir la participación de funcionarios públicos, con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo oficial, a eventos proselitistas para apoyar a un candidato o precandidato, debido a que estas actividades se pueden ejecutar en ejercicio del derecho de afiliación política, máxime que no hay restricción constitucional al respecto.

En este sentido, todo ciudadano en ejercicio de sus libertades de expresión y asociación en materia política, tiene derecho a pertenecer a determinado instituto político y a hacer patente su inclinación o preferencia, sin que los funcionarios públicos por el hecho de serlo queden excluidos del ejercicio de tales derechos fundamentales.

Por otra parte, contrario a lo expuesto por los actores, la participación de los funcionarios públicos en actos de proselitismo, no implica que puedan hacer promoción de un determinado partido político, ya que ésta no comprende la posibilidad de aplicar recursos públicos a favor de cualquiera de los contendientes.

En efecto, en relación con el desempeño de los funcionarios públicos durante la contienda comicial, cabe mencionar que el artículo 134, párrafo sexto, de la carta magna dispone textualmente.

"Artículo 134....

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos..."



SECRETARÍA DE LA
FEDERACIÓN DE JUECES
FEDERALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA
FEDERACIÓN DE JUECES
FEDERALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Como puede verse, dicho precepto regula los principios básicos que deben observarse en la administración de los recursos económicos de que dispongan los servidores públicos de los órganos de gobierno federal, estatal y municipal, así como del distrito federal y sus delegaciones, de tal suerte que establece el deber de todos los servidores públicos de la federación (tanto de la administración pública centralizada como de la paraestatal) a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, para aquellos rubros que hayan sido



destinados, sin ninguna desviación que pueda repercutir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Por su parte, el legislador ordinario federal reguló esta disposición al configurar el artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece lo siguiente:

"Art. 347.

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

...

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

..."

ED
IE
AL
PROVINCIAL
NO

De manera que, las disposiciones constitucional y legal en comento en modo alguno tienen como objetivo de tutela prohibir que los funcionarios públicos participen con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo oficial a eventos políticos para apoyar a un precandidato o candidato, en ejercicio de su derecho de afiliación partidista, sino que la hipótesis normativa que prevén se dirige a evitar que tales servidores públicos den un destino incorrecto al patrimonio de las entidades u órganos de gobierno que representan, en otras palabras, que desvíen los recursos públicos que con motivo del ejercicio de sus funciones disponen, para

favorecer a determinado contendiente en el proceso electoral.

Por ello, la participación de los funcionarios públicos, fuera del horario de trabajo oficial y con sus recursos propios, en eventos políticos para apoyar al precandidato o candidato de su preferencia, queda fuera del marco normativo de restricción contemplado en los preceptos constitucional y legal en cita, consecuentemente, dicho postulado normativo no puede servir de base jurídica para declarar inconstitucional ese precepto legal local.

Una cuestión muy diferente consiste en la posibilidad fáctica de distinguir con plenitud los bienes propios de los públicos, y a la posibilidad real de que esos bienes se fusionen o se enmascare su uso; empero, esta clase de situaciones de hecho no son suficientes para restringir los derechos constitucionales a ocupar un cargo público y a continuar en el ejercicio del derecho de afiliación partidista, pues el principio son compatibles y solamente en casos concretos podría demostrarse una irregularidad de este tipo, para lo cual existen otros mecanismos idóneos como la rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad en ámbitos administrativos, civiles y penales.

En las relatadas circunstancias, esta Sala Superior opina que el artículo 5, fracción IV, es constitucional.

REQUISITO DE ELEGIBILIDAD (TRANSFUGUISMO POLÍTICO).

Los actores aducen que la fracción XII del artículo 10 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional, porque establece una cuestión de inelegibilidad que afecta el contenido esencial del derecho fundamental de ser votado, puesto que regula un obstáculo para que una persona pueda ser postulada por un partido político si durante el proceso electoral participó en la precampaña de otro.

Sobre el particular, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 58/2008 y acumuladas, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 222, fracción IV, del Código Electoral para el Distrito Federal, que dispone:

"Artículo 222. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los señalados por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los siguientes:

[...]

*IV. Los partidos políticos **procuraran** (sic) no registrar candidatos, que habiendo participado en una precampaña por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo proceso electoral."*

Al respecto, la Corte determinó que la norma tildada de inconstitucional no establece una obligación a cargo de los

partidos políticos, sino únicamente una mera recomendación, cuya inobservancia no trae aparejada sanción alguna.

Esa recomendación consiste en no postular a personas que, habiendo perdido las elecciones internas de otro partido, decidan abandonarlo y contender por uno diverso en el mismo proceso electoral, lo cual, de llegar a verificarse, tampoco constituye una taxativa para que puedan registrarlo como candidato, ya que la norma en cuestión no establece tal medida.

Al considerar que la disposición legal impugnada contiene una norma calificada por la doctrina como imperfecta, porque su infracción no conlleva inexorablemente alguna afectación coactiva a sus destinatarios, se reconoció la validez de la misma, tomando en cuenta que a ningún resultado práctico conduciría su expulsión del orden jurídico, ya que los partidos políticos pueden desatender su contenido sin sufrir algún menoscabo en su derecho a registrar a los candidatos que cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley.

Ahora bien, el artículo materia de esta impugnación establece:

Artículo 10. *Para desempeñar un cargo de elección popular, además de lo previsto en la Constitución Política del Estado, se deberán cumplir los requisitos siguientes:*


...

XII. Los partidos políticos procurarán no registrar candidatos que, habiendo participado en una precampaña por un partido para una elección federal o local, pretendan ser registrados por otro partido en el mismo año electoral. De igual forma procurarán no registrar como candidatos a los militantes de un partido que violen sus estatutos por pretender ser candidato de otro partido en un mismo año electoral.

...".

Al respecto, esta Sala Superior estima que no debe emitir opinión en relación con el planteamiento sobre el que versan los conceptos de invalidez, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el tema de que se trata, pues al resolver las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y acumuladas, consideró que el artículo 222, fracción IV, del Código Electoral del Distrito Federal, que establece que los partidos políticos "procurarán" no registrar candidatos, que habiendo participado en una precampaña por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo proceso electoral, no establece una obligación a cargo de los partidos políticos, sino únicamente una mera recomendación, cuya inobservancia no trae aparejada sanción alguna.

En este sentido, al existir pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del tema en cuestión, es evidente que resulta innecesario que esta Sala Superior emita opinión alguna en ese sentido.



El mismo criterio debe prevalecer en relación con el concepto de invalidez en el cual los partidos actores aducen que la fracción IV, incisos a) y b) del artículo 11, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional, por lo siguiente.

La porción normativa materia de impugnación, establece:

"Artículo 11.

[...]

*IV. En todo caso, los partidos **procurarán** excluir de las candidaturas o cargos partidistas a personas que:*

a) Habiendo pertenecido a un partido, se cambien a otro para obtener un provecho económico;

b) Habiendo participado en un proceso interno de un partido pretendan participar en otro;"

El criterio sostenido por el Máximo Tribunal es aplicable al precepto impugnado, porque en este caso tampoco se establece una obligación a cargo de los partidos políticos sino únicamente una mera recomendación, cuya inobservancia no trae aparejada sanción alguna al igual.

Por tanto, siguiendo el mismo criterio, se considera que resulta innecesario que esta Sala Superior emita opinión alguna en ese sentido.

REQUISITOS DE SELECTIVIDAD CONFORME AL PERFIL IDÓNEO





Los partidos políticos señalan que la fracción I del artículo 11, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional, porque viola los artículos 1 y 35 constitucionales, ya que es limitativa de los derechos políticos electorales del ciudadano, discriminatoria y contraria a la libertad de asociación.

La norma impugnada establece:

"Artículo 11. Los partidos políticos nacionales y estatales, en el ámbito de su autonomía partidista, son libres para seleccionar y elegir a sus candidatos y dirigentes partidistas, conforme a las bases siguientes:

I. En las convocatorias de los partidos nacionales y estatales para seleccionar candidatos y dirigencias partidistas en el Estado, las dirigencias estatales de dichos partidos podrán establecer requisitos de selectividad conforme al perfil idóneo de los precandidatos o candidatos según los méritos y deméritos personales, partidistas y profesionales, en relación, al cargo a aspirar y de acuerdo a la ideología, programas y plataformas electorales de cada partido."

SECRETARÍA
DE LA
ACUERDO
TRONERO
CIGARRA
AD

Como puede observarse, la porción normativa impugnada tampoco establece una obligación a cargo de los partidos políticos, sino únicamente una facultad potestativa que puede o no ejercerse.

Esto es, el vocablo "podrá" que regula la posibilidad de que los partidos puedan establecer las bases para seleccionar a candidatos y dirigencias partidistas, es futuro del verbo poder, que según el Diccionario de la Lengua Española,

significa "tener expedita la facultad o potencia de hacer algo".

El significado que se cita, evidencia que se refiere a la facultad que tiene una persona o ente, pero no da lugar a considerar que se trata de una obligación.

Lo anterior, aplicado a la disposición transcrita, pone de relieve, por una parte, que los partidos políticos tienen como facultad potestativa, establecer requisitos de selectividad conforme al perfil idóneo para seleccionar candidatos y dirigencias partidistas, más no la obligación de hacerlo de esa manera o siguiendo las bases que se mencionan en la propia disposición impugnada.

Lo anterior, se corrobora con el contenido de las fracciones II y III del propio artículo 11 analizado, que al efecto señalan:

*"II. El perfil idóneo **podrá** basarse en seleccionar la candidatura o cargo directivo partidista, de acuerdo con:*

a) Métodos demoscópicos objetivos e imparciales que permitan determinar el mayor nivel de aceptación de los aspirantes;

b) La ponderación de las cualidades personales y profesionales que los hagan más aptos para el cargo de que se trate; y

c) La ponderación de los méritos partidistas.

*III. La selección del perfil idóneo **podrá** basarse en uno o más métodos, según lo acuerde la dirigencia estatal del partido de que se trate.*

SECRETARÍA DE
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE Y
CONSTITUCIONALES Y DE
INSTITUCION



De las previsiones transcritas, se desprende también que los partidos políticos tienen la facultad potestativa de observar o no los métodos propuestos por el legislador local para seleccionar las candidaturas o cargos partidistas, pero al igual que la porción normativa impugnada, carece de coercitividad hacia sus destinatarios.

Por tanto, al considerar que el incumplimiento de esta parte de la normatividad impugnada, no conlleva, en principio, alguna afectación coactiva a sus destinatarios, se considera que la misma es constitucional, tomando en cuenta que los partidos políticos pueden desatender su contenido sin sufrir algún menoscabo en su derecho a registrar a los candidatos que cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley.



FEJ
A DISTRIBUCION
DE ACUERDOS
INTERVENIENTES
AL COMISIONADO DE
LUDAD

Sin embargo, resulta pertinente señalar que si los partidos políticos deciden ejercer la facultad potestativa que les otorga la norma y establecer criterios para seleccionar candidatos y dirigentes partidistas, sustentados en perfiles idóneos, sobre las bases metodológicas que la propia norma autoriza, dichos criterios, para ser considerados constitucionales, deberán ajustarse al principio de racionalidad, con el objeto no sólo de hacer efectivo los derechos político-electorales de los militantes o aspirantes a una candidatura o cargo partidista, sino también para evitar que se restrinja de manera indebida y arbitraria tales derechos por la imposibilidad o dificultad de su ejercicio.

[Firma manuscrita]

Ello, porque mediante la aplicación del principio antes mencionado, el ejercicio de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho y la correlativa obligación de los órganos para satisfacerlos, concilia de mejor manera con la necesidad de salvaguardar otros principios, fines y valores que se encuentren involucrados en cada caso.

Así, un sistema normativo convencional, será racional, cuando sea acorde con los principios y directrices que se desprenden de la Constitución, los Tratados Internacionales, leyes que emanen del Congreso de la Unión, y cualquier disposición de carácter general.

En ese orden de ideas, el ejercicio justo y sensato del principio de racionalidad, permitirá que no se impongan más cargas o restricciones que las indispensables para el funcionamiento y permanencia del sistema de selección de candidatos y cargos partidistas.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
CORTES DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE TRABAJO Y CO
MUNICACIONES Y DE A
SISTENCIA CONSTITUCIONAL

INATACABILIDAD DE LA DECISIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PONDERE EL PERFIL IDÓNEO.

Los tres partidos manifiestan que la fracción V del artículo 11, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional, porque viola los artículos 1 y 35 constitucionales, ya que es limitativa de los derechos políticos electorales del ciudadano, discriminatoria y contraria a la libertad de asociación.



Al respecto, el artículo 11, fracción V establece:

"Artículo 11.

[...]

V. La selección con base en el perfil idóneo es un asunto de la vida interna de los partidos. Ninguna autoridad administrativa o judicial, podrá revocar o modificar la decisión política mediante la cual se pondera el perfil idóneo."

Es sustancialmente fundado, el concepto de invalidez.

En efecto, la porción normativa impugnada es inconstitucional, toda vez que la previsión de que ninguna autoridad administrativa o judicial pueda revocar o modificar la decisión del partido político que pondere el perfil idóneo, entraña una prohibición para sus militantes de impugnar dicha decisión, a pesar de que implique la vulneración irreparable de sus derechos político-electorales.

DERACCIÓN
E LA MADRE
ACUERDOS
REVISIÓN
JONES D

Esto, porque dicha prohibición no sólo elimina la posibilidad de impugnar la decisión del partido político que pondere el perfil idóneo, sino que también hace nugatorio el derecho de sus militantes o afiliados para obtener la restitución oportuna, directa y completa de sus derechos político-electorales vulnerados, lo cual implica una transgresión directa al derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, así como violación al derecho político-electoral a ser votado, tutelado por el numeral 35, fracción II de la Ley Suprema.

Es así, porque el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como obligación del Estado, dar protección a los derechos del individuo, de manera pronta, completa e imparcial, sin que en dicho artículo o en cualquier otra disposición se establezca excepción alguna cuando el reclamo se aduzca en razón de que la afectación a un determinado derecho provenga de un partido político.

Por el contrario, el propio texto constitucional establece que el acceso a la jurisdicción debe ser completo, y de la única manera que se puede lograr una protección completa a los derechos político-electorales del ciudadano es que, independientemente del agente que los vulnere, tal situación anómala y apartada del estado de derecho pueda ser corregida por la jurisdicción estatal, porque sólo de esta forma se puede lograr una justicia integral.

Del mismo modo, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, establecido a nivel constitucional en el artículo 41, fracción VI, además de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, incluye expresamente otra finalidad, consistente en proteger los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votado, en términos del artículo 99 de la propia constitución, sin limitar esa protección respecto de los actos de los partidos políticos, con lo cual se

revela el interés directo de la Constitución por asegurar la protección completa, eficaz y efectiva de los mencionados derechos, por constituir un elemento indispensable del Estado de derecho y del desarrollo de la vida democrática en el país.

Por su parte, el artículo 99 constitucional, al especificar las hipótesis de procedencia de los medios de impugnación que corresponde resolver al Tribunal Electoral, en forma definitiva e inatacable, se establece:

"Artículo 99.

[...]

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

[...]

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas ...;"

Como se advierte, la fracción VI hace referencia expresa a las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos e, incluso, los

presupuestos procesales para impugnar las violaciones de los partidos políticos.

Lo anterior permite establecer, que el poder revisor de la Constitución determinó que los medios de impugnación destinados para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, comprenden cualquier acto o resolución susceptible de violarlos, incluyendo los actos y resoluciones de los partidos políticos.

Del mismo modo, el poder reformador estableció que deben agotarse las instancias internas de los partidos políticos antes de acudir a la jurisdicción del Tribunal para impugnar violaciones a los derechos político-electorales, lo cual permite arribar a la conclusión de que si se mantuviera la prohibición de impugnar las decisiones de los partidos políticos sobre la ponderación de los requisitos idóneos, se elevaría a dichas resoluciones a la calidad de definitivas e inatacables, que en materia electoral únicamente corresponden a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De la misma manera, el artículo 80, apartado 1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece expresamente la facultad de impugnar, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, los actos o resoluciones de los partidos políticos que violen alguno de los derechos político-electorales de sus afiliados.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0727

21

SUP-OP-7/2009.

Aunado a lo anterior, el sistema de partidos previsto constitucionalmente, establece como uno de sus principios que la asociación de los ciudadanos a los partidos políticos tiene la finalidad de optimizar y potenciar el ejercicio de sus derechos fundamentales, sin escatimar ninguna de las partes de su contenido, y estos derechos nunca se separan de sus titulares, sino por el contrario, la entrada al partido los dimensiona a su mayor magnitud posible, pues se incrementan y robustecen con los que se adquieren al interior de los partidos, que se hacen constar en los estatutos y demás disposiciones internas.

En la relación jurídica originada por los derechos político-electorales del ciudadano vinculado a un partido político, éste contrae el deber jurídico de respetarlos, y los términos de esa relación deben estar tutelados por la jurisdicción, porque de otra forma se crearía una laguna, dejando impune su violación.

Esto, porque los partidos políticos son entidades de interés público que intervienen corresponsablemente con las autoridades en la celebración y vigilancia de los procesos electorales y participan de manera relevante en todos los actos mediante los cuales los ciudadanos ejercen sus derechos político electorales, por lo cual se encuentran en condiciones de incurrir en vulneración de esos derechos en perjuicio de los ciudadanos que forman su membresía, y tales

infracciones pueden requerir de la intervención de los órganos jurisdiccionales, aunque sea en última instancia, para restituir a los afectados en el goce de tales derechos.

En tales condiciones, se concluye que la porción normativa impugnada es inconstitucional, porque como se ha visto, transgrede el principio constitucional de una tutela judicial efectiva, completa e integral de los derechos político-electorales del ciudadano.

Es aplicable, por la similitud de razones que la sustentan, la jurisprudencia de la Sala Superior, de rubro: **"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS."**¹

B. En este apartado se analizarán los conceptos de anulación propuestos, casi idénticos, por dos de los tres institutos políticos impugnantes, por lo que su estudio se realizará de manera conjunta.

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LEGISLATURA A PARTIR DE 2012.

¹ Publicada en las páginas 161 a 163 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Jurisprudencia.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0728

23

SUP-OP-7/2009.

Los Partidos Políticos del Trabajo y Convergencia aducen que los artículos 33 de la Constitución Política del Estado de Coahuila y 13 y 16 del Código Electoral de ese Estado, vulneran el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, porque dejan de observar el mandato constitucional de que el número de representantes en las legislaturas de los Estados debe ser proporcional al de habitantes de cada uno, al disminuir la representación popular sin considerar el crecimiento poblacional del Estado de Coahuila.

Esto, en razón de que el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de dos mil cinco arrojó una población de 2,495,200 habitantes y, para el dos mil ocho de 2,601,884 pobladores, de ahí que si la población aumentó no debe disminuirse el número de diputados, al contrario, deben aumentarse en proporción con el crecimiento poblacional.

Se opina que los conceptos de invalidez son infundados.

Los partidos políticos accionantes parten de la premisa inexacta de que si la población aumentó no debe disminuirse el número de diputados, al contrario, deben aumentarse en proporción con el crecimiento poblacional, según el mandato

constitucional previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, lo incorrecto de esta premisa deriva de que la interpretación gramatical y sistemática del mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo invocado, permite advertir que sólo exige que el número de representantes en las legislaturas de los Estados sea proporcional al de habitantes de cada uno, esto es, que cada diputado represente a la misma proporción de ciudadanos, de ahí que la disminución de integrantes de la legislatura no puede considerarse contraria a la Carta Magna si cumple con el mandato constitucional de que la representación poblacional sea igualitaria.

En efecto, el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:

“Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población



exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;...”

Del análisis gramatical y sistemático de esta fracción, se aprecia que dicho precepto prevé dos directrices para los estados respecto del número de integrantes de los congresos locales, las cuales son:

a) El número de representantes de las legislaturas estatales, será proporcional al de los habitantes del mismo y sus topes mínimos son siete, nueve y once, dependiendo de su conformación poblacional.

b) No se establece un número predeterminado de distritos electorales que deben pertenecer, en forma definitiva, a cada entidad federativa.

La primera directriz establece de manera clara y contundente que el número de representantes, esto es, el de personas

electas para desempeñar un cargo público, debe ser proporcional al de habitantes de la entidad.

Lo anterior permite dos intelecciones posibles:

La primera relativa a que entre mayor número de población en un Estado, mayor debe ser el número de representantes populares.

La segunda, en el sentido de que los ciudadanos electos para integrar una legislatura local, deben representar al mismo número de habitantes.

En opinión de esta Sala Superior, la segunda de las formas de entender la norma constitucional es la que debe prevalecer, por lo siguiente.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión 2002, la palabra proporcional tiene el siguiente significado:

"Adj. Perteneciente o relativo a la proporción."

Por su parte, la palabra proporción es entendida como:

"Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí."



JUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0730

27

SUP-OP-7/2009.

El significado de la palabra proporción permite advertir que cuando el constituyente ordenó que el número de representantes en las legislaturas de los Estados debe ser proporcional al de habitantes de cada uno, se refiere a la correspondencia de las partes (número de representantes populares) con el todo (número total de población de una entidad federativa), es decir, que a número igual de representados debe corresponder el mismo número de representantes.

Esto es congruente con uno de los propósitos que persigue la distribución territorial en distritos electorales, a saber el valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo de 'un ciudadano un voto'. Este propósito consiste en vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma que, cada cargo represente, **en la medida de lo posible**, la misma cantidad de habitantes. De esta manera, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto.

Además, el criterio de proporcionalidad apuntado se contempla en la legislación de Coahuila, al establecer el artículo 16 del Código Electoral lo siguiente:

"Artículo 16. Para fines del cumplimiento del artículo 13 de este Código, la demarcación territorial de los distritos uninominales se establecerá mediante acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto a más tardar diez meses antes a la elección de que se trate, conforme a las bases siguientes:

I. El número de electores, no deberá diferir del veinte por ciento en más o en menos, del cociente que resulte de dividir la lista nominal de electores del Estado con corte al mes primero del año anterior al de la elección de que se trate, entre el número de distritos electorales uninominales.

II. Deberá tener continuidad geográfica.

III. Incluir íntegro, sin fraccionarse, el territorio de cada uno de los Municipios que comprendan. Se exceptúan de este requisito, los Municipios con población superior al cociente al que se refiere la fracción I de este artículo. En todo caso, un mismo Municipio se dividirá en tantos distritos electorales como número de veces comprenda su población electoral en el mencionado cociente.

IV. Tener como cabecera al Municipio que cuente con mejor infraestructura de comunicación en la demarcación de que se trate."



En esta disposición se acoge el criterio poblacional descrito

en el artículo 116 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se prevé que el número

de electores, no deberá diferir del veinte por ciento en más o en menos, del cociente que resulte de dividir la lista nominal de electores del Estado con corte al mes primero del año anterior al de la elección de que se trate, entre el número de distritos electorales uninominales, es decir, se prevé una formula para garantizar la correspondencia entre el número de electores y el número de representantes a elegir, con lo cual se satisface la exigencia constitucional ya apuntada.

SECRETARÍA DE LA
FEDERACIÓN DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE OC
CONSTITUCIONALES Y DE A
INSTITUCIONA



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0731

29

SUP-OP-7/2009.

Esta situación es congruente con la segunda de las directrices señaladas, relativa a que no se establece desde la Constitución General de la República un número determinado de distritos electorales para las entidades federativas, ya que con base en la fórmula indicada se llevará a cabo la distritación correspondiente en busca de la proporcionalidad poblacional exigida por la constitución.

De otro modo se podría llegar al absurdo de que el aumento indefinido de la población determinará que los órganos legislativos realizarán ajustes anuales del número de representantes de deben conformarlos, a fin de lograr un cumplimiento de la proporcionalidad aducida por los partidos actores, lo cual evidentemente, haría disfuncional el desempeño de estos órganos.

EDERAC
E LA NACIÓN
ACUERDO
REGISTRO
IONES
NO

Además, si la integración de los órganos de gobierno de los estados está sujeta a las directrices previstas en la Constitución Federal, es evidente que el artículo 116 fracción II constitucional, al señalar que el número mínimo de integrantes de un congreso debe ser de siete, nueve y once dependiendo de su conformación poblacional, deja a las legislaturas la determinación del número necesario de integrantes de sus congresos de acuerdo a sus condiciones y necesidades sociales, siempre y cuando se apeguen a los mínimos señalados, de ahí que la disminución de sus integrantes, por sí misma, no es contraria a la constitución,

pues como se señaló, la ley fundamental no prevé un número determinado de distritos para cada entidad federativa.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA.

Los Partidos del Trabajo y Convergencia reclaman la invalidez del artículo 27, fracción III, párrafo 9, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al considerar, en esencia, que la facultad de verificación de los compromisos de campaña de los partidos políticos, por parte de la autoridad electoral local, sobrepasa los límites que la Constitución General establece en su artículo 41.

El artículo impugnado dispone lo siguiente:

Art. 27...

III. La organización de las elecciones locales y de los procedimientos del plebiscito y del referendo es una función estatal, que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

...

9. Tendrá a su cargo, además de las atribuciones que le confiera la ley, la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez del proceso electoral, de los procedimientos del plebiscito y referendo, la verificación de los compromisos de campaña de los partidos políticos y la salvaguarda del sistema de partidos políticos, en los términos de las disposiciones aplicables.

..."



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0732

31

SUP-OP-7/2009.

En concepto de esta Sala Superior, este precepto resulta inconstitucional, por lo siguiente.

En lo que interesa, el artículo 41, base V, Constitucional, establece que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

También se prevé que el Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Asimismo, se prevé una Contraloría General, con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.

Por su parte, la fracción IV del artículo 116 del mismo ordenamiento constitucional, contempla las garantías que los Estados deben respetar en sus leyes electorales, retomando diversos principios y lineamientos generales que rigen el

sistema federal, como los previstos en el artículo 41 constitucional, tocante a la organización de las elecciones y a la función de las autoridades electorales, las cuales con independencia de que se denominen Institutos o Consejos Electorales o de cualquier otra forma, son órganos autónomos, especializados y profesionales cuyas funciones giran en torno a la organización de las elecciones en cada entidad federativa.

De igual manera, la fracción IV, inciso c), de dicho precepto, determina que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Como se aprecia, la función principal tanto del Instituto Federal Electoral como de los institutos electorales locales, es la organización de las elecciones, sustentada en los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y para ello la propia constitución y el código electoral, ya sean federales o estatales, los dotan de un conjunto de facultades y atribuciones que a la vez son instrumentos para que cumplan su encomienda.



SECRETARÍA DE JUSTICIA
PREMIER COORDINADOR DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0733

33

SUP-OP-7/2009.

En la Constitución Federal no se otorgan facultades a dichos institutos relacionados con verificar el cumplimiento de las promesas de campañas de los partidos políticos, lo que significa que el constituyente consideró que no forma parte de la organización de las elecciones.

Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 217 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, los compromisos de campaña son aquellos que el candidato ofrece frente al electorado, y son objeto del plan de trabajo de los ciudadanos elegidos, esto es, los compromisos de campaña son las propuestas de soluciones políticas a un género de problemas sociales, económicas, etcétera, que realizan los candidatos a ocupar algún cargo de elección popular a los ciudadanos, durante la etapa correspondiente del proceso, para captar su voto.

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE LA JEFATURA DEL PODER JUDICIAL
TR. JURISDICC. ELECTORAL
COAHUILA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 178 y 180 del mencionado código electoral local, el proceso electoral ordinario se inicia con la primera sesión que celebre el Consejo del Instituto, dentro de la primera semana de octubre del año previo al que deban realizarse las elecciones, y concluye una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso, haya resuelto el último de los medios de impugnación interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Las etapas del proceso electoral ordinario son: preparación de la

elección; jornada electoral; resultados de la elección; y calificación y declaración de validez de las elecciones.

De lo anterior, claramente se desprende que el cumplimiento de los actos de campaña son actos que se realizan fuera del proceso electoral y, por tanto fuera del alcance de las facultades de los órganos electorales encargados de organizar las elecciones.

En efecto, una vez que el candidato ha sido declarado electo y, además ha ocupado su cargo, los actos que realiza ya no son de campaña sino actos de gobierno respecto de los cuales resulta inválido que una autoridad electoral que, como ha quedado precisado, tiene como función primordial la de organizar las elecciones, verifique que un gobernante cumpla con aquellas promesas que el partido le hizo al electorado.

Considerar lo contrario, sería tanto como permitir al Instituto Electoral del Estado, que revise actos de los servidores públicos en ejercicio del poder, una vez concluido el proceso electoral, lo cual no está contemplado en la constitución como una función administrativa de los órganos electorales, pues en todo caso, serán los gobernados quienes exijan a los gobernantes a quines les otorgaron su voto, el cumplimiento puntal de sus promesas y compromisos de campaña.

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
CONTENIDO Y VALORES DE CONT
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE
CONSTITUCIONAL

Lo anterior permite concluir que el hecho de que en la constitución del estado se otorgue la facultad al Instituto Electoral local de verificar que los partidos cumplan sus compromisos de campaña y, como ha quedado precisado, esa atribución está fuera de sus facultades de organización de las elecciones, contraviene los principios rectores de la función administrativa electoral.

En razón de lo anterior, esta Sala Superior opina que el párrafo 9, fracción III, del artículo 27, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es inconstitucional.

PLAZO EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y MIEMBROS DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, QUE DESEEN OCUPAR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, SE DEBEN SEPARAR DEL CARGO.

Respecto de la inconstitucionalidad de las fracciones V y VI del artículo 10, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, los partidos del Trabajo y Convergencia aducen que contraviene lo dispuesto en el artículo 55, fracción IV, de la Constitución Federal, al prever que los servidores públicos que quieran ser diputados, deben separarse del cargo noventa días antes de la elección.

Lo anterior, dicen los actores, porque el precepto impugnado dispone que los servidores públicos o miembros

del instituto que quieran ocupar un cargo de elección popular, deberán separarse del cargo en un plazo mínimo de sesenta y ocho y sesenta días, respectivamente, lo cual es contrario a la constitución federal.

Al respecto, a efecto de emitir la opinión correspondiente, se debe tener en cuenta lo siguiente.

El artículo 55, fracciones IV y V, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

...

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.



V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario O Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

PODER JUDICIAL DE LA F
PRIMA CORTE DE JUSTICIA D
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
CCIÓN DE TRÁMITE DE CONT
CONSTITUCIONALES Y DE AC
RECONSTITUCIONAL

..."

Por su parte, el artículo 10, fracciones V y VI del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, prevé:

"Artículo 10. Para desempeñar un cargo de elección popular, además de lo previsto en la Constitución Política del Estado, se deberán cumplir los requisitos siguientes:



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0735

37

SUP-OP-7/2009.

...

V. No ser servidor público, a menos que se haya separado en un plazo mínimo de sesenta y ocho días previos al día de la elección.

VI. Los miembros del Instituto, así como los integrantes de los comités distritales y municipales electorales, que deseen participar como candidatos a un puesto de elección popular, deberán separarse del cargo en un plazo mínimo de sesenta días antes del inicio del proceso electoral del que se trate.

...".

Del contenido de dichos preceptos legal y constitucional, se advierte que efectivamente difieren en cuanto al plazo en que deben separarse del cargo, quienes pretendan ocupar un cargo de elección popular.

En opinión de esta Sala Superior, el citado artículo del código electoral de Coahuila, es conforme con el artículo 55, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien difiere en su texto respecto del plazo de separación del cargo, no vulnera la finalidad de la separación del cargo público, pues la diferencia en cuestión atiende a los tiempos del proceso electoral relativo a esta entidad federativa.

Esta Sala superior ha considerado que la finalidad de las normas que establecen la separación de cargos públicos para contender en un proceso electoral, consisten en la preservación de condiciones que garanticen la realización de

elecciones en que prevalezca la igualdad de oportunidades en la contienda electoral (especialmente, en las campañas electorales), así como la neutralidad de los servidores públicos que aspiren a un cargo público de elección popular, ya sea que hubieren sido designados o electos, y a fin de que no se prevalezcan o beneficien de las facultades o ascendencia que deriva del cargo, empleo o comisión, en la contienda con quebranto de los principios que deben primar en todo proceso electoral.

De esta manera, la exigencia de la norma que ahora se controvierte no atenta contra esa finalidad, al prever que los servidores públicos se separen del cargo sesenta y ocho días antes de la elección, porque dichos plazos resultan razonables atendiendo a la fecha en que inicia el período de campaña en el Estado de Coahuila.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del Código Electoral del Estado de Coahuila, la campaña electoral para Gobernador inicia cuarenta y ocho días antes de la jornada electoral; la de diputados locales, 35 días antes de la jornada; y respecto de los procesos en que se renueven los Ayuntamientos, varía entre diez y treinta días, según los ciudadanos que se encuentren registrados en la lista nominal.

Por su parte, también es razonable el plazo de sesenta días para que las autoridades electorales se separen del cargo,



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0736

39

SUP-OP-7/2009.

cuando pretenden ocupar un cargo de elección popular, pues en términos del artículo 178 del mencionado ordenamiento electoral local, el proceso ordinario se inicia con la primera sesión que celebre el Consejo del Instituto, dentro de la primera semana de octubre del año previo al que deban realizarse las elecciones de Gobernador, y de Diputados locales e integrantes de Ayuntamientos, cuando estas concurren con la elección de Gobernador; tratándose únicamente de elecciones de Diputados y/o de integrantes de Ayuntamientos se inicia dentro de la segunda semana de mayo del año en que deban realizarse las elecciones.

Por tanto, la exigencia de los plazos de separación del cargo prevista en el precepto local cuya constitucionalidad se analiza, resulta acorde con la finalidad del principio de separación del cargo, pues además de que se garantiza la equidad en la contienda electoral en la entidad, al mismo tiempo, permite que los funcionarios públicos y autoridades electorales cumplan con su responsabilidad política por el tiempo para el cual fueron electos o designados, pues se les permite separarse del encargo con un plazo razonable para ejercer su derecho al voto pasivo.

La conclusión precedente se robustece, si se atiende a los plazos en que deberán separarse de su cargo los funcionarios públicos y las autoridades electorales de algunas de las entidades federativas, en las que también difiere del plazo previsto en el artículo 55 de la Constitución Federal.

Lo expuesto se esquematiza en el cuadro siguiente:

No	Entidad Federativa	Plazo en que se deben separar los funcionarios públicos	Plazo en que se deben separar las autoridades electorales	Fundamento
1	Baja California Sur	Para diputado 60 días antes de la elección.	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamiento, 6 meses antes del día de la elección.	45 Const. 15 Ley Elect.
2	Campeche	45 días antes de la elección para gobernador.	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamiento 1 año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.	62 Const. 22 Cód. de inst. y Proc. Elect.
3	Coahuila	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamiento, 68 días previos a la elección.	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamiento integrantes de los comités distritales y municipales, 60 días antes del inicio del proceso electoral, 2 años previos a la fecha de inicio del proceso electoral, los Consejeros Electorales, los miembros de los órganos directivos y técnicos, e integrantes del cuerpo del servicio profesional electoral del Instituto, que se separen del cargo.	10 Cód. Elect.
4	Colima	Para Gobernador y Diputado 1 día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamientos, 3 años antes de la elección.	16 Cód. Elect 18 Cód. Elect. 21 Cód. Elect
5	Guanajuato	Para gobernador, 6 meses antes de la fecha de la elección. Para Presidentes Municipales, Síndicos o Regidores, 60 días de anticipación al de la elección.	Para Diputados, Gobernador o miembro de un Ayuntamiento, 48 meses antes del día de la elección.	69 Const. 111 Const. 9 Cód. de Inst. y Proc. Elect.
6	Guerrero	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamiento, 60 días antes de la jornada electoral.	Para Gobernador, Diputado y Ayuntamiento, 1 año antes de la fecha de inicio del proceso electoral.	10 Ley de Inst. y Proc. Elect.
7	Nuevo León	Para gobernador, diputados, 100 días naturales antes de la fecha en que deba celebrarse la elección.		48 Const. 82 Const.



PODER JUDICIAL DE LA FE
PRIMA CORTE DE JUSTICIA DI
JESUS MARIA GONZALEZ DE A
CIÓN DE TRABAJO DE CONTF
CONSTITUCIONALES Y LEACCI
INSTITUCIONALDA



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0737

41

SUP-OP-7/2009.

Por tanto, esta Sala Superior concluye que el artículo 10, en sus fracciones V y VI, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, es conforme con lo dispuesto en el artículo 55, fracciones IV y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al conseguir la finalidad perseguida por la norma, pues se garantiza que en las elecciones prevalezca la igualdad de oportunidades, así como la neutralidad de los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular.

REGULACIÓN DE MENSAJES ELECTORALES POR RADIO Y TELEVISIÓN A CARGO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los Partidos del Trabajo y Convergencia reclaman la inconstitucionalidad del artículo 73 del Código Electoral de Coahuila, bajo el argumento central de que el órgano electoral local se encuentra impedido para vigilar y sancionar el contenido de los mensajes en materia de radio y televisión.

Agrega que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que la única autoridad facultada para conocer del asunto en cuestión es el Instituto Federal Electoral.

Sobre el tema, conviene tener presente el contenido del artículo impugnado.

Artículo 73: *"Corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila vigilar que el contenido de los mensajes con fines electorales relacionados con los comicios locales, transmitidos por radio y televisión en el territorio estatal, se ajusten a los establecido en el Código y sancionar su incumplimiento..."*

Como se observa, el artículo transcrito, en lo que interesa, otorga al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, facultades en materia de control, vigilancia y sanción respecto de los mensajes que en proceso electoral local los partidos políticos difundan en radio y televisión.

Al respecto, resulta improcedente emitir la opinión solicitada en razón de que, como lo aduce el propio enjuiciante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el tema de que se trata, a saber: a qué autoridad compete regular los tiempos oficiales en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos, tanto en el orden federal como estatal, tal como se advierte a continuación:

El dieciocho de agosto de dos mil ocho, el Pleno del Alto Tribunal emitió la tesis P./J. 100/2008 cuyo rubro es **"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISIÓN A QUE TENDRÁN ACCESO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSO TRATÁNDOSE DE ELECCIONES ESTATALES"**.

Dicho criterio, en esencia, establece que la administración de tiempos oficiales de radio y televisión para fines electorales es una atribución privativa a nivel nacional que sólo corresponde al Instituto Federal Electoral, incluso, tratándose de elecciones locales, por tanto, sus autoridades electorales no pueden ser investidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y televisión, pues su función en este aspecto se limita a servir de conducto a las determinaciones que en la materia disponga legalmente el Instituto Federal Electoral.

PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE DOS PROCESOS INTERNOS O PRECAMPAÑAS.

DEFACIO
E LA NACION
ACUERDOS
PROCESOS
IONES DE
AD

Los Partidos Convergencia y de la Revolución Democrática aducen que el segundo párrafo del artículo 190, del Código Electoral de Coahuila, que establece que aquellos que participen en procesos internos o precampañas no podrán participar en otro proceso de esa misma naturaleza en el mismo año electoral, resulta contrario a la libertad que debe prevalecer en el ejercicio de los derechos político electorales del ciudadano.

Al respecto, este órgano jurisdiccional opina que esa porción normativa sí puede contrariar el orden constitucional al

atentar contra el derecho de asociarse y ser votado de los ciudadanos.

De conformidad con el artículo 35 constitucional son prerrogativas de los ciudadanos, el poder ser votado para cargos de elección popular y asociarse libre e individualmente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y, en términos de la propia Constitución.

La forma directa y más eficaz para tomar parte en los asuntos del país, incluso para acceder a cargos del gobierno, es precisamente a través de los partidos políticos, los cuales estatuyen como derechos de sus militantes, el relativo a participar como precandidatos de sus procesos internos, bien, como candidatos de un cargo de elección popular en determinado proceso electivo.

Estos derechos de ser votado y de asociación constituyen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, aunque, como todo derecho, no son absolutos e ilimitados.

Ahora bien, atendiendo al carácter fundamental de dichos derechos, las limitaciones que al respecto imponga el legislador secundario deben ser excepcionales, razonables y proporcionales con el interés general.

En otras palabras, los derechos fundamentales solamente pueden restringirse por el legislador secundario, cuando la



JUDICIAL DE LA I
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE
REGISTRACIÓN DE TRÁMITE DE CON
STITUCIONALES Y DE AC
NACIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0739

45

SUP-OP-7/2009.

regla general permite el ejercicio de la mayoría de titulares del derecho, excluyendo de su goce un mínimo de casos y siempre que se trate de una limitación razonable y necesaria para asegurar los derechos de una mayoría o cuando sea la única manera o la menos nociva, de salvaguardar y maximizar los bienes protegidos por el derecho en cuestión.

En el caso, la porción normativa que prohíbe a precandidatos o candidatos, participar en dos o más procesos internos o precampañas en un mismo proceso electoral resulta excesiva y restringe los citados derechos fundamentales.

En principio, porque el hecho de que un ciudadano se ubique en el citado supuesto normativo, no ocasiona, por sí, alguna afectación jurídica al derecho de las mayorías, pues en todo caso, los militantes o los órganos del partido que intervienen en los procesos internos son quienes respaldan, a través de su voto, la nominación o postulación a un cargo de elección popular.

Además, la propia Constitución Federal en su artículo 125, establece que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la federación y otro de un estado, que sean también de elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

Dicho numeral contiene un enunciado prohibitivo que complementa otro enunciado permisivo y facultativo; de tal modo que empieza por prohibir que una persona ejerza dos cargos de elección popular; pero autoriza al nombrado a elegir uno de ellos para ocuparlo.

Como se observa, la propia norma constitucional, al establecer la frase *"el nombrado puede elegir uno de ellos"* permite inferir que el ciudadano que se encuentre en la hipótesis de haber sido electo para más de un cargo de elección popular, tenga la opción de decidir cual de los dos va a desempeñar.

De esta forma, el derecho de elección del cargo se encuentra debidamente salvaguardado por la propia constitución. En el mismo sentido debe otorgarse protección a la decisión de los ciudadanos, de participar como precandidatos o candidatos de un proceso interno o precampaña, en más de una ocasión y siempre que no participe de manera simultánea. La existencia de una disposición en contrario, restringe ineludiblemente su derecho de ser votado.

De ahí que si en el caso, el párrafo segundo del artículo 190 del Código Electoral de Coahuila excluye la posibilidad de que los militantes de los partidos políticos ejerzan sus derechos constitucionales de participar como precandidatos o candidatos en dos o más procesos internos durante un mismo año electoral, resulta evidente que trastoca su

derecho de ser votado y de asociación. Por ende, sí resulta inconstitucional.

C. Los siguientes conceptos de impugnación son propuestos sólo por el Partido Convergencia.

FALTA DE UNIFORMIDAD EN LOS PLAZOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES.

El enjuiciante sostiene que los artículos 188, 190 y 213 del Código Electoral del Estado de Coahuila son inconstitucionales porque fija plazos de precampañas y campañas distintos, en atención al número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate.

Agrega que, la falta de uniformidad en la duración de los plazos de precampaña y campaña produce confusión en el electorado, en contravención al principio de certeza.

Al respecto, esta Sala Superior opina que no resultan inconstitucionales los preceptos legales reclamados.

Conviene tener presente que los artículos tildados de inconstitucionales establecen lo siguiente:

"Artículo 188. Hasta treinta y cinco días antes de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate, los partidos políticos deben informar al Instituto, el

procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

Los partidos políticos deberán informar el método o métodos que serán utilizados, la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, la fecha de la realización de la asamblea estatal, distrital o municipal o en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:

*I. Durante los procesos en que se renueve Gobernador, las precampañas darán inicio veintiséis días antes de la apertura de registro de candidatos. **No podrán durar más de veintitrés días.***

*II. Respecto de los procesos en que se renueve el Congreso del Estado, las precampañas darán inicio veinte días antes de la apertura de registro de candidatos. **No podrán durar más de diecisiete días.***

III. En los procesos en que se renueven Ayuntamientos, se regirán por lo siguiente:

*a) En los municipios cuyo número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, no exceda de veinte mil, las precampañas políticas iniciarán ocho días antes del día de apertura el registro de candidatos y **no podrán durar más de cinco días;***

*b) En los municipios cuyo número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, sea superior a veinte mil pero no exceda de ciento veinte mil, las precampañas políticas iniciarán trece días antes del día de apertura el registro de candidatos y **no podrán durar mas de diez días;***

*c) En los municipios cuyo número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, exceda de ciento veinte mil, iniciarán dieciocho días antes del día de apertura el registro de candidatos, **no podrán durar más de quince días;***

d) Para todos los supuestos de las fracciones que anteceden, la lista nominal electoral que se tomará en cuenta será la del corte al mes de enero del año que corresponda.



PODER JUDICIAL DE LA FE
PRIMA CORTE DE JUSTICIA DI
SECRETARÍA GENERAL DE
CIÓN DE NOMINACIÓN DE
CONSTITUCIONALES Y DE ACC
INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0741

49

SUP-OP-7/2009.

Artículo 190.- En materia de precampañas se aplicarán las disposiciones establecidas en este código para las campañas políticas y la difusión de propaganda tanto electoral como oficial.

En los procesos internos o precampañas para cargos de elección popular local o federal, no podrán participar como precandidatos o candidatos aquellos ciudadanos que participen en dos o más procesos internos o precampañas durante un mismo año electoral.

Artículo 213.- Las campañas electorales para Gobernador tendrán una duración de cuarenta y cinco días, mismas que iniciarán cuarenta y ocho días antes de la jornada electoral, y por lo que hace a las de Diputados Locales tendrán una duración de treinta y cinco días, las cuales darán inicio treinta y ocho días antes del día de la jornada electoral. Durante los procesos en que se renueven Ayuntamientos, se regirán por lo siguiente:

I. En los municipios cuyo número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, no exceda de veinte mil, las campañas políticas tendrán una duración de diez días, iniciando trece días antes del día de la jornada electoral.

II. En los municipios cuyo número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, sea superior a veinte mil pero no exceda de ciento veinte mil, las campañas políticas tendrán una duración de veinte días, mismas que iniciarán veintitrés días antes del día de la jornada electoral correspondiente.

III. En los municipios cuyo número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, exceda de ciento veinte mil, tendrán una duración de treinta días, las cuales iniciarán treinta y tres días antes del día de la jornada electoral.

IV. Para todos los supuestos de las fracciones que anteceden, la lista nominal electoral que se tomará en cuenta será la que el Instituto utilice para el proceso electoral del año que corresponda".

Como se advierte, los artículos impugnados establecen las fechas en que deben dar inicio las precampañas y campañas, así como el monto máximo de días que pueden durar.

Asimismo, los numerales destacan que los periodos de precampaña y campaña son diversos, en proporción al tipo de elección de que se trate y según el número de ciudadanos que participa en la misma.

En primer término, debe destacarse que no existe disposición en la Constitución Federal que obligue a las legislaturas de los Estados a establecer en sus ordenamientos de carácter electoral, alguna norma tendiente a regular que todas las precampañas o campañas electorales en la entidad tengan una misma duración, por lo que las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal, al ser libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pueden válidamente determinar los plazos para el registro de candidatos a los cargos de elección popular, así como el inicio de las campañas electorales respectivas.

Además, deber tenerse en cuenta que la diferencia de días en la duración de las precampañas y campañas electorales está relacionada, entre otros aspectos, con el cargo de elección popular para el que se está contendiendo.

Así las cosas, al fijar los plazos de precampaña y campaña de los partidos políticos, el legislador local previó un sistema

donde, a mayor número de ciudadanos involucre una elección, más lapso de tiempo será el necesario para su realización.

Ello se clarifica con el hecho de que, cuando en el proceso electoral respectivo se renueve además, al Gobernador del Estado, el plazo máximo de precampaña o campaña electoral, será el de veintitrés días y cuarenta y cinco días, según sea el caso, contra diecisiete y treinta y cinco, para aquellos casos donde sólo se elija al Congreso del Estado, respectivamente.

Los panoramas electorales de una y otra elección son disímiles, pues es evidente que en la de Gobernador convergen factores que la tornan más compleja que aquéllas donde sólo se renueva al congreso local, pues entre otras cosas, los electores deciden sobre la titularidad de dos poderes del estado: ejecutivo y legislativo, además, quien funja como precandidato o candidato a Gobernador realiza su precampaña o campaña en todo el Estado y no en un distrito electoral determinado.

Lo anterior guarda ilación con el sistema electoral federal que en materia de campañas, establece un periodo más amplio cuando además de renovar el Congreso de la Unión, se elige al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el artículo 211, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que cuando se renueven las dos cámaras y se elija al presidente de la república, las precampañas no podrán durar más de sesenta días, en tanto que el inciso b) del mismo artículo señala que si sólo se renueva la cámara de diputados, el plazo será de no más de cuarenta días.

Por su parte, el artículo 41, fracción IV, constitucional establece que la duración de las campañas, cuando se elija al Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales será de noventa días, contra sesenta días en aquellos casos donde sólo se renuevan los integrantes de la cámara de diputados.

El mismo orden de proporcionalidad pretendió fijar el constituyente permanente de Coahuila de Zaragoza, al establecer lapsos máximos de precampaña y duración de campaña, en los municipios de mayor entidad poblacional o donde la lista nominal de electores es de mayor envergadura, tal y como se demuestra con la siguiente tabla:

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS (AYUNTAMIENTOS)

Número máximo de habitantes inscrito en la lista nominal	Tiempo máximo para precampañas	Duración de campañas
20,000	Cinco días	Diez días
Superior a 20,000 sin exceder de 120,000	Diez días	Veinte días
Superior a 120,000	Quince días	Treinta días



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0743

53

SUP-OP-7/2009.

De esta manera, la circunstancia de que no exista uniformidad en los plazos de precampaña y campaña para cada elección, obedece a la intención de seguir un esquema de proporcionalidad descendente que establece mayor periodo de tiempo de precampañas y campañas, donde mayor sea el número de electores.

Visto de esta forma, el hecho de que los plazos para cada tipo de elección resulten diversos, no produce confusión en el electorado pues como se dijo, no se trata de la fijación de lapsos máximos o periodos fijos, sin razón aparente que omitan distinguir el tipo de elección de que se trata, sino a un orden de proporcionalidad acorde con el tipo de elección que corresponda. De ahí que en opinión de este órgano especializado, la vulneración al principio de certeza y la posible inconstitucionalidad de las normas impugnadas resulte inexistente.

COMPETENCIA DE LOS COMITÉS MUNICIPALES PARA REGISTRAR A LOS CANDIDATOS A INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS.

El enjuiciante aduce que el artículo 197, fracción III, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional porque al otorgar facultades a los comités municipales para registrar candidatos a integrantes de ayuntamientos se vulnera el régimen de fortalecimiento y

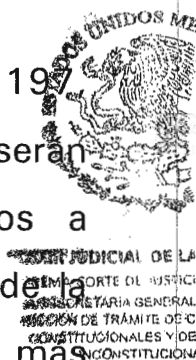
libertad de auto organización de los partidos políticos, previsto por el artículo 41 constitucional.

A su juicio, dicha facultad se traduce en una intromisión en la vida interna de los partidos políticos, dado que la postulación y registro de candidatos se debe realizar con base en su normatividad interna.

Al respecto, esta Sala Superior opina que la inconstitucionalidad aducida es inexistente, porque el promovente parte de la premisa incorrecta de que la fracción legal impugnada, otorga a un órgano específico del partido, la facultad de solicitar el registro a los candidatos a integrantes del Ayuntamiento.

Sin embargo, lo incorrecto deriva de que el artículo 197 fracción III, al establecer que los comités municipales serán los competentes para el registro de los candidatos a integrantes del Ayuntamiento, se refirió a los órganos de la autoridad electoral local ante quién se debe presentar, más no que determinada instancia directiva del Partido Político resulte facultada para solicitar el registro.

En efecto, si bien la norma establece que los "*comités municipales correspondientes*" serán los facultados para registrar candidaturas a integrantes del Ayuntamiento, en modo alguno estableció que se tratara de los comités municipales del partido, sino a los comités municipales de la autoridad electoral, que resultan los competentes para recibir





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0744

55

SUP-OP-7/2009.

las solicitudes de registro que al efecto presenten los partidos políticos.

Para clarificar lo anterior, conviene analizar el contenido integral del artículo 197 del Código Electoral de Coahuila, que establece:

Artículo 197.- Los órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes:

I. Los candidatos a Diputados de mayoría relativa, por los comités distritales.

II. Los candidatos a Diputados electos por el principio de representación proporcional, por el Consejo General del Instituto.

III. Los candidatos a integrantes de Ayuntamientos por los comités municipales correspondientes.

IV. Los candidatos a Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, por el Consejo General del Instituto.

Como se advierte, las fracciones II y IV, establecen de manera expresa, que en tratándose de candidatos a diputados y a gobernador, el registro deberá realizarse ante el órgano electoral local.

En el mismo sentido, aun cuando la fracción III no haga alusión al comité municipal electoral del Instituto, debe entenderse de manera implícita, que se trata de dicho órgano y no al del partido.

Además, el propio artículo 194 de dicho ordenamiento, establece que el derecho para solicitar el registro

corresponde exclusivamente al partido, lo cual evidencia que no existe controversia en cuanto a este punto.

De esta forma, no existe intromisión a la vida interna de los partidos políticos, porque la norma controvertida, solamente precisa ante *quién se registra* y no *quién lo solicita*, lo cual, es acorde con el sistema de registro de candidatos establecido en la ley, y por tanto, no constituye una intromisión a la vida interna del partido, como lo adujo el enjuiciante.

DEMANDA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

En seguida se dará respuesta a los conceptos de invalidez que de manera individual formula el Partido de la Revolución Democrática. Por tal razón, no obstante que en la demanda se advierten doce apartados, en esta parte del estudio ~~no se~~ ^{se} verá reflejado el análisis de los siguientes conceptos de invalidez, porque ya fueron estudiados.

El segundo concepto de invalidez, sólo por cuanto hace al tema del artículo 190 del código electoral local, relacionado con precampañas, ya fue analizado conjuntamente con el del Partido del Trabajo.

La totalidad del tercer concepto de invalidez referente al tema de participación de funcionarios públicos fuera del



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0745

57

SUP-OP-7/2009.

horario oficial, ya fue abordado en forma conjunta con el
propuesto por el Partido del Trabajo y Convergencia.

El cuarto concepto de invalidez, sólo por cuanto hace a la
impugnación de los artículos 10, fracción XII,
(transfuguismo político) y 11, fracciones, I, IV y V, (perfil de
precandidatos) del código electoral local, ya fueron objeto de
estudio conjunto también.

Una vez aclarado lo anterior, se procederá al estudio de los
conceptos de invalidez, en el orden propuesto en la
demanda, identificándolos con un título que corresponde al
tema que de manera general contiene cada apartado.

PRIMERO. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES.

EDERAC
DE LA JAC
EAGUEHOB
TROVEPS
CIONE
DAD

Dentro del primer concepto de invalidez que formula el
Partido de la Revolución Democrática, se advierten tres
temas, a saber:

- a) Procedimiento de selección de consejeros
- b) Elección de Consejero Presidente y voto de calidad; y
- c) Omisión de incluir el principio de certeza entre los que
regirán la función de los consejeros electorales.

Procedimiento de selección de consejeros. El partido de la Revolución Democrática impugna la constitucionalidad del segundo artículo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila y del artículo 98 del Código Electoral de dicha entidad. Tales preceptos disponen:

"Segundo. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán estar designados dos consejeros electorales propietarios y dos suplentes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, bajo las siguientes consideraciones:

Para ser designado consejero electoral, propietario o suplente, se deberán cumplir los requisitos siguientes:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y coahuilense, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, mayor de 27 años de edad el día de su designación;*
- II. Estar inscrito en el registro federal de electores y contar con credencial para votar;*
- III. Poseer al día del registro de aspirantes a ocupar el cargo, título profesional o de formación equivalente y tener conocimientos en la materia político-electoral;*
- IV. No haber desempeñado en ningún caso, un cargo de elección popular federal, estatal o municipal;*
- V. No desempeñar un cargo o comisión en cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral u otro órgano electoral de entidades federativas, diferente al Instituto;*
- VI. No haber sido en ningún momento, dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni representante del mismo ante ningún organismo electoral en el país;*
- VII. No tener antecedentes, en ningún caso de una militancia activa, pública y notoria en algún partido político;*
- VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;*
- IX. Tener residencia en el Estado durante los últimos tres*



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE CO
NSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCION

años, salvo el caso de ausencia por desempeño de cargo público al servicio de la federación, del estado o del municipio;

X. No haber sido Secretario o Subsecretario en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, ni Procurador General de Justicia del Estado.

Los aspirantes que hayan acreditado los requisitos legales, deberán sujetarse a una comparecencia en los días y horas señalados por el Congreso del Estado, que en todo momento coordinará y vigilará lo relativo al procedimiento.

Concluido el período de audiencias, los grupos parlamentarios de los diferentes partidos representados en el Congreso del Estado, podrán formular sus propuestas del listado de aquellos aspirantes que hayan cumplido con cada uno de los requisitos establecidos en las fracciones anteriores, o, en su caso, las presentarán ante una Comisión plural del Congreso del Estado.

La Comisión plural realizará el dictamen correspondiente y lo presentará al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso aprobación.

Las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, aprobarán o rechazarán las designaciones de los consejeros electorales.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila expedirá convocatoria para que los ciudadanos interesados presenten sus solicitudes en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Una vez terminado el plazo, remitirá los expedientes de los aspirantes al Congreso del Estado, para que determine cuales de los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes ocuparán los cargos de Consejeros Electorales.

De la Designación de los Consejeros Electorales

Artículo 98. *La designación de los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, se sujetará al procedimiento siguiente:*

I. El Consejo General del Instituto, a más tardar noventa días naturales antes de concluir el periodo constitucional

del cargo de Consejero Electoral, emitirá una convocatoria pública, para que cualquier ciudadano coahuilense pueda inscribirse dentro del plazo de diez días naturales, a fin de que el Instituto examine el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Código.

II. Concluido el plazo para el registro de los aspirantes al cargo de Consejero Electoral, el Instituto emitirá un dictamen, dentro de los siguientes diez días naturales, que deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General, en el que señale el número de aspirantes registrados y establezca quienes cumplieron con los requisitos exigidos en este Código, mismos que continuarán con el procedimiento de selección.

III. Los aspirantes que hayan acreditado los requisitos legales, se sujetarán a un examen teórico y práctico por escrito, en materia electoral, dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del dictamen elaborado por el Instituto. Este examen se aplicará conjuntamente por dos instituciones de educación superior del Estado, una pública y otra privada, en los días y horas señalados por el Consejo General del Instituto, el cual coordinará y vigilará el procedimiento de aplicación de dicho examen.

IV. Una vez obtenidos los resultados, el Instituto remitirá al Congreso del Estado los expedientes de quienes acreditaron los exámenes referidos en la fracción anterior, a fin de que este órgano legislativo convoque a los aspirantes, dentro de los veinte días naturales siguientes a que reciba los expedientes, a comparecer ante el Pleno del propio Congreso o ante la Comisión que designe para tal efecto.

V. Concluido el período de comparecencias, los diferentes partidos representados en el Congreso del Estado formularán, ante una Comisión plural del propio Congreso, sus propuestas del listado de los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en el presente Código para ser Consejero Electoral o, en su caso, propondrán la ratificación de alguno de los Consejeros Electorales que terminan su período.

VI. La Comisión plural realizará el dictamen correspondiente y lo presentará al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación.

VII. La aprobación o rechazo de la designación de los Consejeros Electorales se realizará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. En el caso de los Consejeros Electorales no aprobados por la mayoría calificada, se seguirá el procedimiento señalado en este artículo."



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODERA JUDICIAL DE LA
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE O
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES

El partido impugnante afirma que los referidos artículos son violatorios del 41 y 116, fracción IV, de la Carta Magna porque otorgan al instituto electoral del Estado de Coahuila una competencia que no le corresponde, pues el mencionado órgano electoral deberá realizar los procedimientos de elección de los consejeros electorales locales y, después, los grupos parlamentarios podrán formular sus propuestas de listados de aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos legales, por lo que el Congreso del Estado tendrá la oportunidad de elegir y decidir de manera parcial quiénes serán los consejeros que conformarán el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, con lo que se afectan los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que deben regir la materia electoral.

EDIFICIO
DE LA
FACULTAD
DE DERECHO
CIVIL
CALLE
DE LA
UNIVERSIDAD

Opinión: en concepto de esta Sala Superior los preceptos referidos no son contrarios a la Constitución General de la República, porque no otorgan una competencia indebida ni conculcan los principios rectores de la materia electoral.

En primer lugar, es inexacto que en los preceptos cuestionados se prevea que la autoridad electoral local *"deberá realizar los procedimientos de elección de los consejeros locales"*, porque la elección de los consejeros está a cargo del Congreso del Estado, mientras que la participación de la autoridad electoral se da en una fase previa, consistente exclusivamente en convocar a los

interesados, verificar que acrediten los requisitos previstos en la ley y coordinar la aplicación de un examen, con todo lo cual se integraran los expedientes correspondientes que se remitirán al legislativo local para la elaboración de listas de aspirantes y la elección de quienes habrán de ocupar los cargos de consejeros electorales.

Por tanto, la autoridad electoral coadyuva en el procedimiento de selección, pero no tiene a su cargo la elección de los consejeros.

Ahora bien, al preverse esa participación de la autoridad electoral no se conculca lo previsto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el primero de esos preceptos se refiere exclusivamente al procedimiento de conformación del órgano electoral federal, mientras que en el artículo 116, fracción IV, sí se aborda lo relativo a la integración y funcionamiento de los órganos electorales estatales, pero no figura alguna prohibición que vede la posibilidad de que la autoridad electoral participe en el procedimiento de su renovación y tampoco aparece algún mandato que establezca que el procedimiento será competencia exclusiva de una autoridad distinta de la electoral.

No pasa inadvertido para esta Sala Superior que el modelo de elección de los consejeros electorales federales podría ser reproducido por las legislaturas de los Estados, pero en caso



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0748

63

SUP-OP-7/2009.

de que se decida no hacerlo, en sí mismo, no se trataría de una violación a la Ley Suprema ni a la Supremacía de la Constitución, porque de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución General de la República, todo aquello que no está expresamente concedido por dicha Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, por lo que al no condicionarse el procedimiento de selección de Consejeros Electorales Estatales, es claro que la facultad para definirlo radica en la soberanía de los estados.

Lo anterior no significa que las entidades puedan establecer arbitrariamente los procedimientos para renovar a las autoridades electorales locales, porque de acuerdo con el artículo 116 fracción IV incisos b) y c) las autoridades de los Estados están constreñidas a que la función electoral se rijan por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, y a que las autoridades gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, por lo que ningún procedimiento cuya configuración sea contraria a las mencionadas directrices podría considerarse acorde al texto constitucional.

Sin embargo, en el caso, el Partido de la Revolución Democrática no menciona ni esta Sala Superior advierte de qué forma podrían verse afectados los principios referidos con la participación de la autoridad electoral local en el procedimiento de elección de consejeros electorales, sobre todo porque, como se dijo, la participación de la autoridad

electoral es accesoria al no contar con facultades de decisión.

Esto, porque la expedición de la convocatoria y la satisfacción de los requisitos legales dependen exclusivamente de las previsiones legales y no de una decisión de la autoridad electoral sobre el particular, mientras que en la aplicación del examen, la autoridad electoral sólo tiene funciones de vigilancia y coordinación, pues el examen estará a cargo de dos instituciones de educación superior, una privada y una pública.

De acuerdo con lo anterior, no aparecen motivos para suponer que la intervención de dicha autoridad electoral podría poner en duda la legalidad e imparcialidad del procedimiento de selección y la certeza de los resultados.

Máxime, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad 158/2007, analizó la intervención que el instituto electoral de Coahuila tiene en la elección de consejeros y concluyó que no era violatorio de los principios rectores de la materia electoral.

El referido examen se llevó a cabo respecto del artículo 34 de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, la cual fue abrogada por el decreto aquí impugnado, pero el contenido de la norma es



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0749

65

SUP-OP-7/2009.

prácticamente idéntico, como se advierte de lo considerado por ese Alto Tribunal que, en lo que interesa, fue lo siguiente:

"De la lectura al artículo 34 cuya invalidez se plantea, conviene describir el procedimiento de designación de los consejeros electorales, a fin de advertir la participación que en dicho procedimiento tiene el Congreso del Estado de Coahuila y el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese Estado; dicho procedimiento se integra por las siguientes etapas:

a) El consejo general del instituto a más tardar noventa días naturales antes de concluir el periodo constitucional del cargo de consejero electoral, emitirá una convocatoria pública para que cualquier ciudadano coahuilense pueda inscribirse a fin de que se examine si cubre los requisitos para ocupar el cargo de consejero electoral.

b) Concluido el plazo para el registro de los aspirantes, el instituto dentro de los diez días naturales siguientes, emitirá un dictamen en el que señale el número de aspirantes registrados, así como quienes cumplieron con los requisitos exigidos en la ley para continuar participando en el procedimiento de selección, dicho dictamen deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del consejo general.

c) También se establece que los aspirantes deberán sujetarse a un examen escrito, teórico y práctico de conocimientos en materia electoral, el cual será aplicado conjuntamente por dos instituciones de educación superior del Estado, una pública y otra privada, lo que tendrá lugar en los días y horas señalados por el consejo general del instituto, quien coordinará y vigilará lo relativo al procedimiento de aplicación de dicho examen.

d) Posteriormente, y conocidos los resultados del examen referido, el instituto deberá remitir al Congreso del Estado los expedientes de los aspirantes que hubieren acreditado los exámenes, a fin de que convoque a los aspirantes a comparecer en audiencia pública ante el Pleno del propio Congreso o ante la comisión que éste designe para tal efecto.

DEFACIO
LA ACION
CUEXDOO
ROVERSA
IONES DE

e) Concluido el periodo de audiencias, los grupos parlamentarios de los diferentes partidos representados en el Congreso del Estado, podrán formular sus propuestas del listado de aquellos aspirantes que hayan cumplido con cada uno de los requisitos fijados para tal efecto o, en su caso, propondrán la ratificación de alguno de los consejeros electorales que termina su periodo, ante una comisión plural de dicho Congreso.

f) Finalmente la comisión plural elaborará el dictamen correspondiente y lo presentará al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación, supuesto en el cual se requerirán las dos terceras partes de los miembros de dicho Congreso.

Con base en lo antedicho, debe decirse que el concepto de invalidez de que se trata es infundado, ya que si bien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, a través de su Consejo General, participa en el procedimiento de designación de los consejeros electorales, propietarios y suplentes, también lo es que esa intervención puede calificarse como instrumental.

En efecto, la participación del instituto sólo consiste en la realización de los siguientes actos: a) Convoca a los interesados para que participen en dicho procedimiento de selección; b) Dictamina el número de aspirantes registrados y quiénes cumplieron con los requisitos exigidos en la ley para ocupar ese cargo; c) Señala los días y horas en que tendrá verificativo el examen que se aplicará a los aspirantes, coordinando y vigilando en todo momento lo relativo al procedimiento de aplicación de ese examen; y d) Remite al Congreso del Estado los expedientes de los aspirantes que hubieren acreditado los exámenes; de donde es claro que su participación se limita a convocar y revisar que los interesados cumplan los requisitos que establece la ley para ser consejeros, a fin de entregar al Congreso del Estado los expedientes respectivos, para que en ejercicio de su facultad soberana, éste designe a los consejeros electorales, lo que implica que el instituto a través de su consejo general no decide quiénes serán consejeros electorales, sino que sólo proporciona la lista de las personas que cubrieron los requisitos necesarios para ello, de ahí que no pueda afirmarse como lo aducen los accionantes, que el instituto se convierte en Juez y en parte, pues el órgano en el que recae la designación de los consejeros electorales es el Congreso del Estado.



PODER JUDICIAL DE LA
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL D.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CON
CONSTITUCIONALES Y DE AC
INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0750

67

SUP-OP-7/2009.

Lo anterior también implica que no se afecten los principios de imparcialidad, independencia y legalidad en materia electoral, ya que si bien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es el responsable de preparar, organizar y vigilar los procesos electorales de la entidad, ello no se ve afectado por el hecho de que ese instituto participe en el procedimiento de designación de sus consejeros electorales, en virtud de que no decide quiénes serán consejeros, pues se reitera, quien tiene la decisión para la designación es el Congreso del Estado; pero además, las actuaciones del instituto se encuentran fijadas en la ley que se controvierte, lo que significa que al estar reguladas no pueden provocar abuso o arbitrariedad en esa participación.

En consecuencia, se respetan los principios rectores de la materia electoral, porque a través del procedimiento descrito se advierte que su objetivo es el de designar a aquellas personas que cubran los requisitos que exigen la Constitución Federal y la legislación del Estado para la designación de consejeros electorales; además de que la intervención del instituto se explica por el hecho de que es el órgano administrativo especializado en materia electoral, de ahí que sea lógico que se le otorgue participación en el procedimiento, porque como especialista, conoce el perfil que deben tener los aspirantes a consejero electoral..."

DERACIÓN
E LA NACIÓN
ACUERDO
ROVER
SIONES DE
AQ

Elección de Consejero Presidente y Voto de Calidad. Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática impugna la constitucionalidad de los artículos 103 y 114 del Código Electoral del Estado de Coahuila, que establecen:

"Artículo 103. Las sesiones del Consejo General se sujetarán a las reglas siguientes:

- I. Serán válidas cuando se integren con la mitad más uno del total de los Consejeros Electorales, siempre que esté presente su Presidente o quien legalmente deba suplirlo.*
- II. Podrán concurrir con voz pero sin voto, los consejeros representantes de los partidos políticos.*
- III. De toda sesión se levantará el acta respectiva a través del Consejero Electoral Secretario. Las actas deberán contener una síntesis del asunto a tratar y el punto*

acordado. Las actas se resguardarán en el archivo del Instituto por conducto de la Secretaría Técnica.

IV. El Secretario Técnico, al inicio de cada sesión, leerá el acta de la sesión anterior para su aprobación, pudiendo ser dispensada la lectura, en caso de que lo acuerde el Consejo General. La misma deberá ser autorizada con las firmas del Consejero Presidente o de quien legalmente deba suplirlo y del propio Secretario Técnico.

V. Se dará curso a los asuntos listados en el orden del día o de aquellos que requieran la intervención del Consejo General.

VI. El Consejero Presidente o quien legalmente deba suplirlo, presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo estime y, finalmente, someterá a votación los asuntos correspondientes.

VII. Las votaciones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Consejero Presidente o quien legalmente deba suplirlo, tendrá voto de calidad.

VIII. El Consejero Presidente del Consejo General por sí o a través del Secretario Técnico, deberá ejecutar los acuerdos sin demora. El Consejo General podrá corregir, subsanar o modificar el acuerdo ejecutado cuando advierta un error esencial en el acta que se somete a su aprobación.

Artículo 114. Los Consejeros Electorales propietarios nombrarán, por voto secreto y mayoría de votos, al Presidente del Consejo General que lo será también del Instituto durante todo el tiempo que dure su encargo como Consejero Electoral. Sólo en el caso de ausencia definitiva del Presidente, los Consejeros Electorales nombrarán de nueva cuenta y de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo. En este último caso, el Consejero Presidente designado durará en su encargo el tiempo que reste de su período como Consejero Electoral.

La designación del Consejero Presidente se comunicará de inmediato al Congreso del Estado para su conocimiento."

El partido actor sostiene que se violan los principios rectores de la materia electoral porque una vez electos los consejeros electorales, entre ellos deberán elegir a su Presidente y además "se da el lujo" de disponer que en caso de que el Consejero Presidente no se encuentre deberá señalar a la



JUDICIAL DE
PRIMA CORTES DE JUST
SECRETARÍA GENE
NACIONAL DE TRABAJO DE
INSTITUCIÓN JALISCO
INSTITUCIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0751

69

SUP-OP-7/2009.

persona que lo supla y, peor aún, la ley establece que en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad, luego entonces la persona que realice la suplencia tendrá voto de calidad, situación que a todas luces es ilegal.

Opini3n: No asiste la raz3n al Partido de la Revoluci3n Democrática porque la elecci3n del Presidente por parte de los consejeros electorales y la previsi3n de voto de calidad, y el r3gimen de suplencia para el Consejero Presidente, resultan apegados a la Constituci3n.

Tocante a la elecci3n del Consejero Presidente, el hecho de que se lleve a cabo por los propios consejeros que integran el consejo general, es una garantía de la autonomía e independencia de dicho 3rgano, pues la decisi3n se queda exclusivamente en el r3gimen interno de ese cuerpo colegiado, lo cual es acorde con las directrices previstas en los incisos b) y c) de la fracci3n IV del artícu1o 116 Constitucional.

Asimismo, con dicha decisi3n se evita que 3rganos ajenos al Consejo General y, consecuentemente, con intereses distintos a los del funcionamiento de dicho cuerpo colegiado, impongan una determinaci3n de capital trascendencia para el desarrollo de las funciones que corresponden al máximu 3rgano administrativo electoral en el Estado de Coahuila, con lo que la autonomía del 3rgano y la independencia de sus determinaciones, aparecerían mermadas de origen.

Por lo que se refiere a que el Consejero Presidente cuente con voto de calidad, esa circunstancia, por sí misma, no evidencia ilegalidad alguna, sino que es una atribución que garantiza que el órgano podrá cumplir con sus funciones, pues para la toma de decisiones requiere que exista mayoría, lo que no podría alcanzarse en todas aquellas sesiones en las que existiera un empate en la votación por funcionar el órgano con una integración completa, de ahí la justificación y la importancia de dicha atribución, la cual no es inherente a la persona del Consejero Presidente sino al cargo mismo, por lo que se contará con la facultad de ese voto de calidad para resolver cualquier situación de votación empatada en toda sesión del Consejo General que así lo requiera.

En cuanto a la posibilidad de que el Consejero Presidente señale a la "persona" que habrá de suplirlo, el partido actor parte de la premisa inexacta de que el Consejero Presidente podría designar como suplente a cualquier persona, lo que no es así porque, de acuerdo con el artículo 111 del Código Electoral del Estado de Coahuila, las ausencias del Consejero Presidente serán suplidas por el consejero electoral propietario que designe el propio presidente, de modo que tal suplencia recaerá necesariamente en uno de los integrantes permanentes del Consejo General, circunstancia que reafirma la autonomía e independencia del referido órgano colegiado, lo cual es acorde con el texto constitucional.



SECRETARÍA DE LA
JEFATURA DE LA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0752

71

SUP-OP-7/2009.

Omisión de prever el principio de certeza. El partido actor impugna el contenido del artículo 107 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, que prevé:

"Artículo 107. Los Consejeros Electorales desempeñan una función de carácter público, la cual se sujetará a los principios de autonomía, independencia, legalidad, excelencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, probidad y honestidad."

En contra de dicha disposición, el Partido de la Revolución Democrática asevera que es contrario a la Constitución porque no toma en cuenta el principio de certeza que se prevé en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General de la República.

Opinión: Esta Sala Superior opina que el referido precepto legal no es contrario a la Constitución, porque la falta de mención expresa del principio de certeza no significa que pueda dejar de observarse.

Ciertamente la certeza es uno de los principios rectores de la materia electoral y del funcionamiento de las autoridades en dicha materia que se prevé tanto en el artículo 41 como en el 116 de la Constitución General de la República. Incluso, en la tesis de jurisprudencia 144/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prevé como uno de los principios que deben regir el ejercicio de la función electoral a

cargo de las autoridades electorales. Dicha tesis es del siguiente tenor:

"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural."



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TRÁMITE DE CC
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES

Sin embargo, en el precepto cuestionado no se contiene un mandato o autorización para que los funcionarios electorales del Estado de Coahuila puedan dejar de observar el referido principio de certeza, por lo que debe entenderse que se trató de un *lapsus calami* del legislador, que al redactar tal precepto y listar los diversos principios rectores de la materia electoral omitió incluir el de certeza.

De hecho, la consideración anterior se corrobora con una lectura sistemática del propio ordenamiento, porque si bien el legislador "olvidó" el principio de certeza al mencionar los que deben regir la función de los consejeros electorales, lo cierto es que antes, cuando se refirió a los principios que deben regir la función del Instituto Electoral, cuyo máximo órgano de dirigencia es el Consejo General del que son integrantes los consejeros electorales, asentó lo siguiente:

"Artículo 75. El Instituto es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, el presente Código y demás disposiciones aplicables.

*La autonomía, las funciones y actividades del Instituto se regirán por los principios de legalidad, **certeza**, independencia, imparcialidad y objetividad."*

Como se ve, el principio de certeza, junto con los otros cuatro principios que se prevén en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí se tomó en cuenta para regir en la

función de la autoridad electoral administrativa del Estado de Coahuila, de ahí que no exista la inconstitucionalidad pretendida por el partido impugnante.

En este orden de cosas, se concluye que con relación al primer concepto de invalidez expuesto por el Partido de la Revolución Democrática, los artículos segundo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila, así como 98, 103, 107 y 114 del Código electoral de la propia entidad, en opinión de esta Sala Superior son Constitucionales.

SEGUNDO. VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y CERTEZA.

En el segundo concepto de invalidez se advierte que el Partido de la Revolución Democrática formula **varios** argumentos relacionados con la vulneración de los principios de autonomía, independencia y certeza. Para su mejor análisis se han dividido en los siguientes subtemas:

I. Patrimonio del Instituto Electoral Local y su forma de administrarlo.

El partido accionante menciona que los artículos 82 y 85, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Coahuila vulneran los principios de autonomía e independencia,



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0754

75

SUP-OP-7/2009.

previstos en los numerales 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sostiene, en relación con el artículo 82 del citado ordenamiento, que en el patrimonio del instituto, como ente autónomo, además del dinero público que por ley le corresponde de las partidas presupuestales, se le da capacidad de autofinanciamiento como si fuese una empresa privada con fines de lucro, pues puede obtener financiamiento por los servicios que preste; así como recibir recursos, entre otros de órganos federales (bienes muebles e inmuebles); subsidios y dinero de cualquier otro medio, lo que no va con su naturaleza de órgano estatal y funciones, además que no tiene facultades para ello.



FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
E/ACUSADOR
VIRRO/ERAM
CRIONES DE
L-3

Por lo que hace al artículo 85, fracción V, referente a la administración del patrimonio del instituto, el partido accionante aduce que se rompe con su independencia, pues la sujeta al poder ejecutivo.

Opinión. Se considera que son **fundados** los conceptos de invalidez.

En el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal se establece que:

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

Del precepto se desprende el imperativo para que las Constituciones y leyes de los Estados, en materia electoral, garanticen que las autoridades administrativas electorales encargadas de organizar las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Esta Sala Superior ha sostenido, que en materia administrativa, la autonomía es la potestad de los órganos del Estado —dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales— para dotarse a sí mismos de normas propias, regir su vida interior y gestionar intereses atinentes a los fines para los que fueron creados, sin la intervención o interferencia de otros órganos del Estado que incidan en sus decisiones ni en los actos que realicen.



SECRETARÍA DE LA
FISCALÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTL
CONSTITUCIONALES Y DE ACC
INCONSTITUCIONALID

Por otra parte, también se ha establecido que la independencia en el ejercicio de las funciones de los órganos del Estado supone un aspecto negativo, consistente en la ausencia de sometimiento a otros poderes, ya que la imparcialidad remite a la idea de actuar de manera neutra, sin favorecer deliberadamente a alguna de las partes involucradas en una relación jurídica y tomar las decisiones atinentes con el sometimiento exclusivo a la norma aplicable.

En el contexto planteado, es posible sostener que la autonomía con la que se dota a organismos, como son los encargados de la función estatal electoral, permite que su actuación se cumpla de manera independiente, desde el punto de vista de la administración de recursos, regulación interna y definición de programas de trabajo, por ejemplo, frente a otros poderes y entidades.

Así, ante la ausencia de presiones externas de orden jerárquico o autoritario, se genera mayor posibilidad de que las decisiones y los actos que realicen los organismos autónomos, en el cumplimiento de su función, estarán imbuidas de imparcialidad, con el solo compromiso de aplicar la ley, sin intención de beneficiar o perjudicar deliberadamente a algún sujeto específico.

IERACU
LA NAC
CUERPO
OVE
ONG

En el caso, de los artículos 82 y 85, fracción V, del Código Electoral de Coahuila se establece lo siguiente:

Artículo 82.- *El patrimonio del Instituto estará constituido por:*

*I. Los ingresos que perciba, conforme a la partida que establezca su presupuesto anual de egresos, **así como los que perciba por los servicios que preste, en cumplimiento de su objeto** o que le correspondan por cualquier otro título legal.*

II. Los bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le aporten para la realización de su objeto.

III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los gobiernos federal, estatal y

municipal y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares.

IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor.

V. Todos los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal.

Artículo 85.- *El Instituto administrará su patrimonio conforme a las bases siguientes:*

...

*V. El Instituto podrá celebrar **acuerdos con la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado** que corresponda, para que ésta coadyuve, total o parcialmente, en las funciones relacionadas con la administración, control y fiscalización de su patrimonio.*

...

De los artículos se observa, que el patrimonio del instituto estatal electoral no sólo está conformado por los ingresos que perciba conforme a la partida presupuestaria, sino que además, lo integran: los ingresos que reciba por los servicios que preste; los bienes muebles e inmuebles y demás ingresos, subsidios, aportaciones que perciba de los gobiernos en el ámbito federal, estatal y municipal; así como donaciones, herencias y legados y todos los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio. Así mismo, que el instituto puede celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste coadyuve en la administración, control y fiscalización de tal patrimonio.

En tales circunstancias, la permisión que se hace para que en el patrimonio del instituto electoral puedan estar involucrados los poderes públicos o bien, personas físicas o morales, a través de donaciones, subsidios o aportaciones que den al



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0756

79

SUP-OP-7/2009.

órgano administrativo electoral, es una clara vulneración a los principios de autonomía e independencia, pues implica subordinar a la autoridad electoral a presiones externas por parte de entes que, por contribuir a su patrimonio, quieran verse favorecidos en las decisiones que tome.

Lo que se denota todavía más con la intervención del poder ejecutivo en ámbitos tan delicados como la administración, control y fiscalización de su patrimonio.

Lo anterior, porque el instituto electoral, como órgano autónomo, tiene entre sus características esenciales² la de contar con autonomía e independencia funcional y financiera que implica que, el mismo, decida en los términos de ley, cómo utiliza y administra los recursos que tiene destinados para el logro de sus objetivos, precisamente para evitar que cualquier agente externo y ajeno a la institución se entrometa en labores tan delicadas como la organización, desarrollo y vigilancia de una elección

Aunado a que con tales funciones y atribuciones definidas constitucional y legalmente, por las cuales, precisamente se le otorga un presupuesto para que las realice, no puede estar recibiendo además otros ingresos sobre los mismos servicios que son propios de la finalidad para la que fue creado y por las que precisamente recibe una partida del erario público.

Por ello, es opinión de esta Sala Superior que los artículos 82 y 85, fracción V, del Código Electoral de Coahuila son inconstitucionales.

II. Sujeción del instituto a medios de control indirectos para su funcionamiento.

El actor plantea que el artículo 87 del código electoral estatal es contrario es contrario a lo previsto en el dispositivo 116, fracción IV, inciso c), así como al principio de legalidad electoral, pues constituye una limitación e interferencia a las decisiones autónomas del Instituto Estatal Electoral.

El mencionado artículo 87 establece:

Artículo 87.- *El Instituto se sujetará a los medios de control siguientes:*

I. La controversia constitucional local que ejerza el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

II. El control constitucional y legal que ejerza el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.

III. El control de revisión y fiscalización que ejerza el Congreso del Estado de Coahuila, a través de la Auditoría Superior del Estado.

Opinión. Es infundado el agravio, porque si bien el instituto electoral es un organismo autónomo, ello no implica que puede realizar todo tipo de actividad sin ningún control.

Esto es así, porque como ya se refirió, este tipo de órganos, tiene como una de sus características esenciales la autonomía, es decir, la potestad para dotarse a sí mismos de



SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y DE ASUNTOS EXTERIORES
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE CULTURA



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0757

81

SUP-OP-7/2009.

normas propias, regir su vida interior y gestionar intereses atinentes a sus fines; pero ello, no implica que no esté sujeto a la constitución y la ley.

Por ello, en el inciso b), de la fracción IV, del artículo 116, de la Constitución Federal, se prevé que las Constituciones y leyes de los estados deben garantizar que la autoridad electoral en el ejercicio de su función se sujete, entre otros, al principio de legalidad³ que es una limitante a la autonomía, porque todos los actos y resoluciones de la autoridad deben estar acordes con la ley.

Lo anterior, porque como entes integrantes del Estado que coadyuvan en el desarrollo de actividades públicas, deben regular su actuar con base en los principios de constitucionalidad y legalidad (aunado a los de certeza, transparencia, etc.) y, por ello, en caso de vulnerar estos principios, están sujetos a controles.

Así, tanto en la Constitución Política Local como en el impugnado artículo 87 del Código electoral local se

³ Al respecto esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios tales como: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996", S3EL 034/97; y "PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL" S3ELJ 21/2001. Consultables en la *Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 798-799 y 234-235 respectivamente.

establecen controles a que está sujeto el actuar el instituto electoral del estado en caso de vulnerar los principios que lo rigen en el desarrollo de sus actividades.

Los controles son: las controversias constitucionales, que se generen entre el instituto y cualquier otro ente de gobierno en el Estado, respecto de las que se surte la competencia del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de tribunal constitucional (artículo 158, base I, de la Constitución Local); el sistema de medios de impugnación en materia electoral, del conocimiento tribunal electoral estatal (artículo 158, base IV, de la constitución local en relación con el diverso 2, de la ley de medios de impugnación local); y, la revisión y fiscalización de los recursos que realiza el poder legislativo estatal a través de la Auditoría Superior del Estado (artículo 67, fracción XXXIV, de la Constitución local).

Lo anterior a fin de mantener la legalidad y constitucionalidad de todos los actos y resoluciones que realice esa autoridad administrativa electoral; además que los medios de control, como ya se mencionó, hacen efectivo el principio de legalidad en sentido amplio.

Por tanto es constitucional el artículo impugnado.

III. Facultades del Presidente y del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.



El partido accionante menciona que los artículos 104; 111; 115, fracción XVI; y, 160, fracción XXII, del Código Electoral de Coahuila son contrarios a lo establecido en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, porque con las facultades que se confieren al Consejo General y a su Presidente se pretende crear un sistema autocrático, se regula de manera confusa la división de atribuciones de los órganos y se concentran en el Consejo General.

Refiere también que al establecerse en el código electoral que las facultades originarias del Instituto residen en el Consejo General, y que corresponden a los órganos cuando la ley lo diga expresamente o cuando se deleguen por los consejeros; se autoriza el funcionamiento discrecional de éstos últimos y se provoca que la ley no tenga la característica de seguridad jurídica pues se deja que un grupo de personas la interprete de forma espontánea.

Por último, argumenta que se dan facultades metalegales al presidente del consejo en situaciones como: determinar quién lo suplirá (artículo 111); nombrar y remover al personal base y de confianza del instituto a pesar que se remita al estatuto del servicio profesional electoral (artículo 115, fracción XVI) - lo que, a su vez, vulnera principios laborales-; y la atribución de la comisión de contraloría y fiscalización de presentar informes trimestrales de su actuación sólo al presidente, a pesar de ser una comisión del Consejo General (artículo 160,

fracción XXII). En vez de determinarse colegiadamente o respetando el correcto funcionamiento de cada área.

Opinión. Esta Sala Superior considera que de manera general son constitucionales los artículos impugnados, con la aclaración que más adelante se hará respecto de la fracción XVI, del artículo 115, del código estatal electoral.

En primer término debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 104 del código electoral, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 104.- *Las atribuciones concedidas al Instituto en el presente Código o en otras leyes residen originalmente en el Consejo General. Los demás órganos del Instituto creados por este Código, podrán ejercer sus facultades en los casos siguientes:*

I. Cuando este Código u otras disposiciones les otorguen expresamente las atribuciones.

II. Cuando por acuerdo del Consejo General se deleguen las atribuciones para el mejor funcionamiento del Instituto.



Ahora bien, el hecho de que el artículo hable de facultades originarias y derivadas, no implica que se deje al arbitrio del Consejo General el funcionamiento del instituto.

Esto, porque el artículo hay que leerlo en el contexto de todo el libro tercero del código electoral, que abarca los artículos 74 a 168 y en donde se regula toda la estructura, funcionamiento y atribuciones del instituto estatal electoral.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0759

85

SUP-OP-7/2009.

Así, a lo largo de los artículos citados se especifica la estructura del instituto conformado por órganos directivos: Consejo General y presidencia; órganos ejecutivos: junta general, secretaría ejecutiva, comités distritales, municipales y mesas directivas de casilla; órganos técnicos: secretaría técnica, dirección de administración, asuntos jurídicos, organización y capacitación, de participación ciudadana; y órganos de vigilancia: como la comisión de legalidad, la de contraloría y fiscalización, acceso a medios, etcétera (artículos 90-93); de cada órgano se precisan sus atribuciones (artículos 104, 104, 115, 117-132, 136, 141; 148-164), etcétera; por tanto, no queda a la libre interpretación o discrecionalidad de los consejeros el funcionamiento del instituto ni tampoco hay confusión de las facultades de cada órgano que lo conforma ya que están claramente definidas en ley.

DERACIÓN
LA NACIÓN
ACUERDO
ROVER
JONES DE
10

Por otro lado, por lo que refiere el promovente en cuanto a que se le otorgan facultades metalegales al Presidente del Consejo General, para demostrarlo cita el texto de los artículos 111; 115, fracción XVI; y, 160, fracción XXII, cuyo texto es el siguiente.

Artículo 111.- *En caso de ausencia temporal o definitiva de algún Consejero Electoral propietario, el Consejero Presidente llamará al Consejero Electoral suplente que corresponda, según el orden de prelación en que fueron designados por el Congreso del Estado, para que desempeñe la función en forma temporal o definitiva, según se trate.*

Las ausencias temporales del Consejero Presidente las suplirá el Consejero Electoral propietario que designe el propio Presidente.

Artículo 115.- *La Presidencia del Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:*

...

XVI. Nombrar y remover libremente a los titulares de las direcciones del Consejo General y a todo personal de confianza y de base del Instituto, **en los términos del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.**

...

Artículo 160.- *La Comisión de Contraloría y de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones:*

...

XXII. Presentar al Consejero Presidente un informe trimestral de su actuación.

...

En los artículos de referencia además del sistema para suplir las ausencias temporales o definitivas de los consejeros, sólo se señala alguna de las atribuciones y funciones del Presidente del Consejo General; sin embargo, en el mismo sentido que lo ya aducido, las facultades del presidente, no deben analizarse mediante la lectura aislada de fracciones o porciones normativas, sino que hay que estudiarlas de manera sistemática con el resto del artículo o artículos relacionados.

De esa manera puede observarse que en el régimen de ausencias del Consejo General, si bien el presidente llama al consejero suplente que corresponda, ello es bajo el sistema de prelación en que fueron designados por el Congreso del Estado, y sólo cuando se trata de sus ausencias temporales del propio presidente, él designa libremente a quien lo supla;



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0760

87

SUP-OP-7/2009.

lo que es entendible dada la dinámica de la actividad, lo corto de los períodos y las múltiples actividades que se deben resolver, y de las cuales, dadas sus facultades (artículo 115 del propio código electoral) tiene mejor conocimiento.

Por su parte, la presentación al Presidente del Consejo de los informes trimestrales de la comisión de contraloría y fiscalización (artículo 160, fracción XXII, del multicitado código electoral) no implica que éste decida personalmente cuestiones atinentes a la comisión, pues conforme al código y contrario a lo manifestado por el promovente, es el Consejo General quien emite la última palabra respecto de las actividades de la comisión.

Es al Consejo General a quien debe informar la comisión de fiscalización, por ejemplo, de las irregularidades en que incurran los partidos en el manejo de los recursos; el máximo órgano de dirección del instituto electoral, también es quien toma los acuerdos para la práctica de auditorías; emite las resoluciones respecto de los dictámenes que se le presentan; etcétera (fracciones VIII, VI, XXIII, del mencionado artículo 160, del código).

Aunado a lo anterior, la propia comisión está integrada por tres consejeros electorales propietarios designados por el consejero presidente, de entre los cuales se elige al presidente de la comisión, quien coordinará los trabajos; a su

vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto es quien realiza las actividades operativas relacionadas con las tareas de la comisión (artículo 159 párrafos 2 y 3).

Por tanto, ni el artículo 111 ni el 160, fracción XXII son inconstitucionales.

Ahora bien, respecto del artículo 115, fracción XVI, del código electoral en donde se establece la atribución del presidente del Consejo General para que puede nombrar y remover al personal del instituto en términos del estatuto del servicio profesional electoral, cabe decir que sólo se advierte una incongruencia en el texto, que podría generar confusión en su lectura.

Esto es así, porque de la transcripción ya realizada del precepto se advierte que primeramente, se dice que el Presidente puede nombrar y remover **libremente** a los titulares de las direcciones del Consejo General y a todo personal de confianza y de base del Instituto. Posteriormente, se establece que en los términos del **Estatuto del Servicio Profesional Electoral**.

Esto es, se entiende que los actos descritos debe llevarlos acabo el Presidente, de acuerdo a lo que establezca el estatuto.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CO
NSTITUCIONALES Y DE A
CTOS CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0761

89

SUP-OP-7/2009.

Por tanto, en principio el problema de la fracción impugnada, estaría en el término libremente, pues éste puede provocar confusión, al entenderse que el Presidente puede actuar sin estar sujeto a condicionantes, limitantes o al cumplimiento de ciertos deberes al nombrar o remover personal del Instituto Electoral; esto a pesar de que posteriormente, en el mismo texto, se indique que para ello el Presidente debe seguir los lineamientos del estatuto.

Es decir, de entrada, el proyecto parece dejar al libre arbitrio del multicitado funcionario la decisión sobre quién labora o no en el órgano administrativo electoral, sin que tenga que llevar a cabo mayor consulta o referencia alguna, sólo buscar una adecuación para su actor en el estatuto y no al revés, es decir, primero realizar los procedimientos o trámites que se indican en el referido ordenamiento, para posteriormente tomar una decisión fundada sobre la remoción o nombramiento de funcionarios.

Por tanto, se considera que el texto puede ser congruente si se omite la palabra libremente, para dejar claro que los nombramientos y remociones son siguiendo lineamientos, procedimientos, etcétera, que se recogen en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, el cual obviamente debe ajustarse a lo que se establece en la constitución federal, en la local, en el propio código electoral y demás ordenamientos legales como los laborales, precisamente para no vulnerar ningún principio en este ámbito.

Lo que se corrobora con lo previsto en las fracciones II y VII del artículo 167 del código electoral local, que indica la obligación de que en el estatuto se establezcan una serie de lineamientos como: determinar las bases para el reclutamiento y la selección de funcionarios y técnicos que accederán a las áreas, así como los mecanismos para las remociones.

Además, que acorde con lo previsto en el artículo 119, fracción XII, del citado ordenamiento, el estatuto debe ser formulado y presentarse, previo acuerdo con el consejero presidente, a la aprobación del Consejo General.

En esta tesitura, con la supresión sugerida se vería que el procedimiento de nombramiento o remoción del personal del instituto sigue determinados lineamientos y no queda al simple arbitrio del presidente.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA F
REMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CON
CONSTITUCIONALES Y DE AC
INCONSTITUCIONALES

IV. Facultad del instituto estatal electoral para anular una elección.

El actor impugna el artículo 173 del código electoral local porque considera que permite **anular la elección** a la autoridad administrativa electoral y que ello desfasa el sistema de instancias, definitividad y jurisdicción que marcan la constitución federal y local.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0762

91

SUP-OP-7/2009.

El texto del artículo 173 es el siguiente:

Artículo 173.- *Cuando las autoridades administrativas y/o jurisdiccionales declaren nula una elección, se procederá a una elección extraordinaria, que se sujetará a las disposiciones de este Código y a las que disponga la nueva convocatoria que expida el Instituto, dentro de los noventa días siguientes a la declaratoria de nulidad correspondiente.*

Las convocatorias que expida el Instituto para la celebración de elecciones extraordinarias, deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las cuales contendrán el calendario electoral respectivo y no podrán restringir los derechos que este Código otorga a los ciudadanos y a los partidos políticos, ni alterar los procedimientos y formalidades que la misma establece.

Opinión. Se considera que es constitucional la norma impugnada, porque declarar la nulidad de la elección, es un acto propio de las actividades o facultades que tiene el instituto electoral.

DERACIÓN
E LA NACIÓN
ACUERDO
REVERSA
IONES DE
AD

En la constitución política local, artículo 27, base III, se establece que la organización de las elecciones locales y de los procedimientos del plebiscito y del referendo es una función estatal, que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

En el párrafo 9, de la mencionada base III, se precisa que el instituto tendrá a su cargo la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y **validez** del proceso electoral, de los

procedimientos del plebiscito y referendo, la verificación de los compromisos de campaña de los partidos políticos y la salvaguarda del sistema de partidos políticos, en los términos de las disposiciones aplicables.

El instituto convocará a elecciones cuando fuere necesario y calificará, en los términos de ley, las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos, y emitirá las declaratorias de validez de las elecciones correspondientes y las comunicará a los poderes públicos del estado, para los efectos correspondientes.

Una vez que se emitan las declaraciones de validez o cuando fueren resueltas, en su caso, las impugnaciones que hubieren interpuesto sobre la elección de que se trate el instituto declarará formalmente electos al gobernador, a los diputados y a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta función sólo tendrá efectos declarativos y podrá ejercerse a través de los órganos del instituto conforme lo establezca la ley.

Lo anterior, se confirma en los artículo 78, 105, fracciones XXXVI; 126, fracción VI; 131, fracción IX; y 181 párrafo 4, del código estatal electoral, que establecen respectivamente que el instituto es el responsable de preparar, organizar, desarrollar, vigilar y **validar** los procesos electorales.



TRIBUNAL ELECTORAL
Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0763

93

SUP-OP-7/2009.

A su vez que se especifica, en los referidos artículos, que el Consejo General declara la validez de la elección de gobernador; los comités distritales la de las elecciones de diputados; y los comités municipales las de los ayuntamientos.

Por otra parte, puede observarse que la cuarta etapa del proceso electoral local se denomina de calificación y declaraciones de validez de la elección, que inicia cuando el instituto realiza los cómputos distritales y califica la elección, declarando la validez de la misma, concluyendo con la constancia de que no se presentó ninguna impugnación o con las resoluciones del tribunal electoral del poder judicial de la federación sobre los medios de impugnación interpuestos.

VERACRUZ
LA NACION
CIVIL
IC-PRST
ONES-336
D

Es decir, al instituto estatal electoral es a quien corresponde de manera originaria y ordinaria, a través de sus diversos órganos, calificar la elección correspondiente, lo que implica que así como puede validarla (a contrario *sensu*) puede declarar su nulidad.

Por tanto, se considera constitucional el artículo 173 del código estatal electoral.

Ahora bien, el hecho de que en el ámbito jurisdiccional, el tribunal estatal electoral en primera instancia y, según corresponda, las salas del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, puedan declarar, en su caso, la nulidad de una elección; no implica que esta facultad, que es extraordinaria, sea propia del sistema jurisdiccional electoral, como tampoco implica que si no declaran la nulidad de una elección, cuando se acrediten los elementos atinentes, los tribunales electorales con ello se afecta el principio de definitividad.

Lo anterior, porque se reitera que tal atribución de ser necesaria, es facultad originaria y propia de la autoridad administrativa electoral, y en caso de que por cualquier circunstancia ésta no la haya declarado, a pesar de que se configuren los elementos para ello, existe la opción legal de acudir a la instancia jurisdiccional, como un segundo momento, para hacer valer tal situación.

V. Artículo relacionado con invasión de competencias.

Por otro lado, en cuanto al artículo 217 del ordenamiento electoral local, el actor transcribe el primero y segundo párrafos, así como la fracción III; menciona que se invaden competencias de otros órganos de gobierno estatales y que además, otras autoridades invaden la autonomía del instituto.

El texto del artículo es el siguiente:

Artículo 217.- Los órganos electorales y las autoridades en general, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiese lugar con el fin de garantizar a los



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0764

95

SUP-OP-7/2009.

partidos y sus candidatos el ejercicio de sus derechos en la materia.

Los compromisos de campaña que cada candidato ofrezca ante el electorado se sujetará a lo siguiente:

...

III. El candidato electo deberá entregar de manera anual una copia del informe de labores que rinda en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes de la materia.

Por tanto se considera, que como el tema lo restringe a una cuestión de invasión de competencia, no se requiere de opinión especializada de la Sala Superior, en razón de que no es un tema exclusivo del derecho electoral.

VI. Artículo en que no se emite concepto de invalidez.

Por lo que hace al artículo 324 del código electoral local, cabe señalar que el actor no aduce en realidad concepto de invalidez y esta Sala no advierte la infracción aducida.

En efecto, si bien el accionante lo transcribe y de manera general enumera trece artículos de la Carta Magna, encabezados por un título "Preceptos constitucionales violados"; lo cierto, es que no emite motivo de inconformidad alguno que haga notar la contradicción entre el referido dispositivo del código electoral local y la constitución federal y no se advierte de manera manifiesta la infracción a algún principio o artículo de la Constitución.

Analizados los temas anteriores, es opinión de esta Sala Superior que en relación con el segundo concepto de invalidez, los artículos 82 y 85, fracción V, del Código

Electoral de Coahuila son inconstitucionales; por su parte, son constitucionales los artículos 87; 104; 111; 115, fracción XVI; 160, fracción XXII; 173 y 324; y no es opinable el artículo 217 del mencionado código.

CUARTO. OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

El Partido de la Revolución Democrática, en su cuarto concepto de invalidez de su escrito de demanda, señala que impugna los artículos 10, fracción XII; 11, fracción I a V; 28; 49, fracción II y VII; 60, 105, fracciones XXIII y XLIII, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Como ya se anunció, los argumentos expresados respecto de los artículos 10 y 11 del citado código electoral fueron abordados al realizar el estudio de los conceptos de invalidez del Partido del Trabajo.

En el referido concepto de invalidez, el actor hace los siguientes planteamientos.

El partido político actor sostiene que los artículos antes precisados provocan la intervención de la autoridad electoral en la vida interna de los partidos, vulnerando su autonomía y los principios rectores de la materia electoral.





JEBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0765

97

SUP-OP-7/2009.

Asimismo, sostiene, que los referidos preceptos establecen requisitos irracionales o desproporcionados para que los partidos políticos obtengan la inscripción de su registro en esa entidad federativa.

En este sentido, el Partido de la Revolución Democrática alega que se interviene indebidamente en la auto organización de los partidos políticos nacionales, al exigirles el establecimiento de una determinada organización de sus oficinas en el Estado de Coahuila, concretamente la necesidad de que cuenten, por lo menos con diecinueve representaciones, en igual número de municipios del Estado, debiendo acreditar además la designación de los titulares de esos órganos, con las copias certificadas correspondientes.

Asimismo, el partido impetrante considera que indebidamente se limita la entrega de recursos de los partidos políticos nacionales hacia su organización estatal, restringiendo su libertad de organización y vulnerando la libre competencia entre las distintas fuerzas políticas, al no permitir que sea decisión del propio instituto político la aportación de determinada cantidad de recursos a sus órganos estatales.

Finalmente, el partido político también estima inconstitucional el que la autoridad electoral local, pueda organizar las elecciones internas de los partidos políticos.

Por otra parte, el partido político también estima que se establece indebidamente una prohibición para acceder a los medios de impugnación de carácter electoral, tanto local como federal, violentando con ello la garantía de acceso a la justicia de los militantes. De igual forma, el impetrante sostiene que también se restringe la capacidad de los ciudadanos de ser postulados a cargos de elección popular, por el partido político de su preferencia, en el momento que así lo decidan.

Sin embargo, respecto de los argumentos precisados en el párrafo que antecede, cabe hacer la aclaración de que los mismos se relacionan con los artículos 10 y 11 del código electoral local, que como ya se precisó, son abordados en un diverso apartado de ésta opinión.

Opinión. En primer término, esta Sala Superior estima necesario referir que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar sentencia en las acciones de inconstitucionalidad 88/2008 y sus acumuladas 90/2008 y 91/2008, ha abordado ampliamente lo relativo a que los Estados tienen plena libertad para establecer las formas específicas para la intervención en los procesos electorales locales, de los partidos políticos nacionales.

En esa ocasión, esa Suprema Corte precisó que los Estados tienen la libertad de establecer cuáles serán las modalidades y formas de participación de los partidos políticos nacionales



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0766

99

SUP-OP-7/2009.

en las elecciones locales, ponderando sus necesidades propias y circunstancias políticas. Asimismo, ese alto tribunal estableció que esa libertad está condicionada a que se respeten los principios establecidos en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de la República, y a que se regulen conforme a criterios de razonabilidad guiados por el propósito de que los partidos políticos, como entidades de interés público, cumplan con las finalidades constitucionales que tienen encomendadas.

Sin embargo, y atendiendo al concepto de invalidez expresado por el Partido de la Revolución Democrática, se estima necesario precisar algunos aspectos en torno al contenido de las normas cuestionadas, siendo relevante para ello, transcribir el contenido de las mismas.

SE DE ACORDA
DE LA HACER
ACUERDOS
PROVERSA
CIONES DE
VO

"Artículo 28.- Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro ante el Instituto Federal Electoral conforme a la ley aplicable, podrán participar en las elecciones de Diputados, Gobernador y miembros de los Ayuntamientos, así como recibir el financiamiento público que establece este Código, inscribiendo su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, acreditando lo siguiente:

I. La vigencia de su registro como partido político nacional, debiendo exhibir para tal efecto.

a) Un ejemplar de sus estatutos, de su programa de acción y de su declaración de principios; y

b) Copia certificada del documento que acredite su registro nacional.

II. Que tiene domicilio en el Estado.

IV. Los demás que exija la ley aplicable.

$$[\dots]$$

[...]

a) [...]

b) [...]

TRIBUNAL JUDICIAL DE LA
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 SECRETARIA GENERAL
 SECCION DE TRABAJO Y CO
 INSTITUCIONAL
 INSTITUCIONAL

[...]

[...]



TRIBUNAL ELECTORAL
Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0767

101

SUP-OP-7/2009.

Artículo 60.- Un partido político, previa resolución del Instituto, perderá su registro o la inscripción de su registro por cualquiera de las causas siguientes:

I.- No participar en un proceso electoral local ordinario.

II.- No cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 40 de este Código, o incumplir de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General del Instituto las obligaciones previstas en la Constitución General de la República, la Constitución del Estado, de este ordenamiento y demás aplicables.

III. Haber dejado de satisfacer los requisitos necesarios para obtener el registro.

IV. No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la totalidad del Estado, en cualquiera de las elecciones para la cual se haya registrado.

V. Aceptar tácita o expresamente propaganda o recursos provenientes de partidos o entidades del extranjero o de instituciones o ministros de cualquier culto o religión.

VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme a lo que establezcan sus estatutos.

VII. No acatar las resoluciones definitivas y firmes que pronuncie el Tribunal Electoral; o

VIII. Haberse fusionado con otro partido político.

Los partidos políticos nacionales, con registro inscrito ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en este artículo, perderán la inscripción de su registro, así como el goce de los derechos y prerrogativas que este Código les concede.

[...]

Artículo 105.- El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

[...]

XXII. Verificar, en su caso, aprobar la aplicación que del financiamiento otorgado realicen los partidos políticos.

[...]

XLIII. Preparar, organizar o validar las elecciones internas de los partidos políticos, a solicitud, por cuenta y a costo de éstos y conforme a sus estatutos, siempre y cuando el Instituto considere que cuenta con la capacidad y condiciones para acceder a tal solicitud.

[...]”

En primer término, tal y como lo alega el actor, está previsto por el legislador local, en el artículo 28, fracción III, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, como requisito para que los partidos políticos nacionales puedan solicitar la inscripción de su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el acreditar, entre otros requisitos, la integración de su comité directivo u órgano equivalente en el Estado, en los distritos y en los municipios en donde se encuentre organizado, precisando que debe mantener representantes y oficinas, en cuando **menos** diecinueve municipios del Estado.

En concepto de esta Sala Superior, la disposición del artículo 28, fracción III, del Código Electoral del Estado de Coahuila es contraria al derecho de los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones estatales y al principio de autoorganización partidaria, previstos en el artículo 41, base I, de la Constitución.

Esta opinión se sustenta en los siguientes razonamientos.



TRIBUNAL ELECTORAL
Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0768

103

SUP-OP-7/2009.

En torno al tema de la inscripción de los partidos políticos nacionales ante la autoridad electoral local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas, mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil siete, estimó que la inscripción equivale a la mera anotación ante la autoridad administrativa electoral del registro del que ya gozan los partidos políticos nacionales. Desde la perspectiva de ese Alto Tribunal no se trata de la obtención de un registro emitido por la autoridad electoral local, pues esa facultad corresponde al Instituto Federal Electoral.

De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió claramente entre registro e inscripción, precisamente al estudiar la legislación del Estado de Coahuila: el registro se predica respecto de los partidos políticos locales en tanto que la inscripción se refiere a los partidos nacionales.

De acuerdo con lo anterior, la autoridad electoral local en Coahuila debe proceder a la inscripción de un partido político nacional como una suerte de anotación o toma de nota.

Ahora bien, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución establece el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, y dispone asimismo, que la

ley determinará las normas y requisitos para el registro legal de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Conforme con este precepto, los partidos políticos nacionales se encuentran sujetos tanto a normas de carácter federal, como a normas de índole local, según los comicios en que participen, pues de acuerdo con la distribución de competencias prevista en los artículos 40, 41 y 116, fracción VI, de la Constitución, las elecciones de los poderes de los estados se rigen por las normas emitidas por la legislatura local respectiva, en tanto que en la renovación de los poderes federales se aplican las disposiciones emanadas del Congreso de la Unión.

Ahora bien, el régimen jurídico creado para regular de modo prioritario y preponderante, los actos y hechos jurídicos relacionados con la formación, **registro, estructura y** extinción de los partidos políticos nacionales, se encuentra previsto directamente en las disposiciones de la Constitución General de la República y en la legislación federal contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no en las legislaciones locales, pues en aquella se prevé la existencia de los partidos políticos nacionales y se fijan ciertas bases sobre éstos, mientras que en el segundo se desarrollan las normas constitucionales, con lo cual se establece un sistema integral para la regulación de esos institutos.



JUDICIAL DE LA R
FEDERAL DE LA R
GENERAL DE
DE TRÁFICO DE
CONSTITUCIONALES Y DE
CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL ELECTORAL
Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0769

105

SUP-OP-7/2009.

Por su parte, las legislaciones de las entidades federativas deben contener las reglas necesarias para dar cauce y orden a las relaciones que necesariamente se entablan entre las autoridades locales y los partidos políticos nacionales, con la intervención de éstos en las actividades y órganos electorales de tales entidades y, en general, las reglas para normar la actuación de esos partidos en los procesos locales, sin interferir con la normativa federal que contiene el estatuto jurídico integral de los partidos políticos nacionales.

Este criterio se encuentra recogido en la tesis relevante de esta Sala Superior, identificada con la clave, S3EL 032/2001, cuyo rubro es: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SE RIGEN PREPONDERANTEMENTE POR LA CONSTITUCIÓN Y LEYES FEDERALES"⁴

Sobre esta base, se estima que las reglas en torno a la organización territorial de los partidos políticos nacionales han de estar previstas primordialmente en la legislación federal y no en las legislaciones locales, pues la estructura partidaria comprende todo el territorio nacional y no sólo una porción de éste; de ahí que sea competencia del orden aplicable en todo ese territorio, es decir, del orden federal, con el fin de que exista uniformidad normativa.

⁴ Consultable en las páginas 751 y 752 de la *Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*.

De lo contrario, los partidos políticos nacionales se encontrarían sujetos a treinta y tres órdenes jurídicos diferentes (treinta y dos locales y uno federal) en cuanto a las exigencias mínimas de organización territorial, de modo que podría llegarse a la situación de que en un estado estuvieran obligados a contar con órganos partidarios en todos los distritos, en tanto que en otra entidad se les obligara a tener órganos en todos o algunos municipios, lo cual complicaría en forma innecesaria el cumplimiento de las tareas partidarias.

Respecto a la organización territorial de los partidos políticos nacionales, el artículo 27, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone:

"Artículo 27.

1. Los Estatutos establecerán:

...

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. **Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:**

I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido, con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas; y

IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña a que se refiere este Código;

..."



TRIBUNAL JUDICIAL DE LA
PRIMA CORTA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE PRESENTE DE C
CONSTITUCIONALES Y DE
INSTITUCION



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0770

107

SUP-OP-7/2009.

El uso de la locución adverbial "cuando menos", equivalente a la expresión "al menos", según el *Diccionario de la Lengua Española*, patentiza que la ley electoral federal establece requisitos mínimos para la organización territorial de los partidos políticos nacionales, que constituyen la estructura básica del partido, y no un desarrollo entero y acabado del aspecto orgánico de un partido político nacional.

La estructura partidaria exigida por la ley comprende exclusivamente dos ámbitos: nacional y estatal. El primero se integra por tres órganos: una asamblea, un comité o sus equivalentes, y un órgano de administración. El segundo se compone sólo de los comités de las entidades federativas o sus equivalentes. Con ello, se garantiza que el partido tenga presencia efectiva en las treinta y dos entidades de la República, a fin de que pueda ser considerado como un partido político de carácter nacional.

SECRETARÍA
DE LA FISCALÍA
DE ACUSACIÓN
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Una vez satisfechos estos requisitos mínimos, en ejercicio de la libertad que les confiere el artículo 22, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos nacionales están en aptitud de establecer en su normativa interna el tipo de organización territorial que prefieran, siempre que ésta se apegue a elementos democráticos, de modo que los miembros del partido tengan posibilidad de participar en la formación de la voluntad partidaria.

En suma, en conformidad con el principio de autoorganización partidaria, establecido en el artículo 41, base I, párrafo tercero, de la Constitución, la ley electoral federal establece una organización partidaria básica, la cual admite ser desarrollada por cada partido político nacional en su respectiva normativa, de acuerdo con las funciones y objetivos que persiga. Este desarrollo es pues, un asunto inherente a la vida interna del partido político.

Así, por ejemplo, es factible que los estatutos de los partidos políticos prevean la existencia de órganos distritales u órganos municipales, o bien, que decidan establecer órganos sólo en los municipios con mayor densidad de población, o contar únicamente con órganos estatales, siempre que esa estructura respete el principio democrático, pues con ello cumplen con la exigencia del artículo 27, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SECRETARÍA DE LA
PRIMA CORTE CONSTITUCIONAL
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE C
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES

Este criterio coincide con lo sostenido por un sector de la doctrina⁵, en el sentido de que es factible que la organización territorial del Estado influya decisivamente en la estructuración de los partidos, y en la articulación de las competencias de los distintos niveles que en ellos se establecen; pero no existe base para exigir a los partidos políticos que su estructura se adapte en forma exacta a la

⁵ Flores Giménez Fernando, *La democracia interna de los partidos*, Congreso de los Diputados, Madrid, 1998, páginas 108 a 112.



De igual forma, esta Sala Superior estima que el legislador local invade el derecho de auto organización del partido político, al preverse, en el artículo 49, fracción II, inciso b), segundo párrafo, del código electoral local, que respecto al financiamiento público en año electoral, los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos nacionales, no podrán entregar de sus prerrogativas federales, a sus comités directivos estatales en el Estado, cantidad mayor a la que éstos reciben en forma habitual para gasto ordinario en los años no electorales, toda vez que está limitando la

libertad que tienen los partidos políticos nacionales para determinar el monto y destino de sus recursos, con la única limitante de que se respeten los topes relativos a las precampañas y campañas en que participen.

Esto es así, porque el hecho de que los partidos políticos nacionales tengan una organización que comprende todo el territorio nacional, en ejercicio de su libertad de organización, puede determinar la forma y monto de los recursos, que ha de destinar a esa estructura. De tal forma que, dependiendo de sus necesidades y de las decisiones que adopte respecto de cada entidad federativa, puede establecer la asignación de recursos a un determinado comité u órgano equivalente en un Estado, sin que sea válido que la legislación local lo limite.

Por otra parte, esta Sala Superior estima pertinente señalar que el Partido de la Revolución Democrática, en su escrito de demanda, y concretamente al desarrollar el cuarto concepto de invalidez transcribe el texto de una fracción VII, aludiendo que la misma corresponde al artículo 49, cuando en realidad dicha disposición corresponde al artículo 50, misma que se refiere al financiamiento por aportaciones de los organismos ejecutivos de los partidos políticos nacionales, a sus comités estatales en el sentido de que estos recursos podrán ser utilizados para sufragar las actividades ordinarias permanentes, así como los gastos de precampañas y campañas, siempre y cuando dichas asignaciones no rebasen los topes establecidos en el propio código, tal como se



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CONSTITUCIONALES Y DE
LEGISLACIÓN

advierte del contenido del mismo, que se transcribe a continuación:

"Artículo 50.- El financiamiento que no tenga el carácter de público, se sujetará a lo siguiente:

[...]

VII. El financiamiento por aportaciones de organismos ejecutivos, de los partidos políticos nacionales a sus comités estatales, podrá ser utilizado para sufragar los gastos generados por las actividades ordinarias permanentes, que realicen los partidos políticos, pudiendo aplicar estos recursos a las precampañas y campañas electorales, siempre y cuando dichas asignaciones no rebasen el tope de precampañas y campañas que se fijan en este Código.

[...]"

Al respecto, esta Sala Superior no advierte irregularidad alguna, toda vez que, dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que las erogaciones que se lleguen a realizar, en precampañas y campañas, con los recursos provenientes de los órganos nacionales de un partido político, deben respetar los topes que sobre el particular fija la legislación electoral local, de tal forma que no se advierte motivo que pudiera dar lugar a entender que existe alguna irregularidad o contravención a la Constitución General de la República.

Por lo que se refiere al artículo 60 del código electoral local, tal y como lo argumenta el Partido de la Revolución Democrática, está previsto que los partidos políticos nacionales pueden perder su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Coahuila, cuando

se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en dicho precepto.

Sin embargo, esta Sala Superior no advierte que las hipótesis establecidas por el legislador local, resulten desproporcionadas o irracionales, toda vez que se trata de sancionar el incumplimiento de los fines de un partido político, el incurrir en irregularidades que se consideran graves, o no contar con la representatividad necesaria respecto del electorado, expresada en los resultados que obtenga en un determinado proceso electoral, tal y como se puede advertir de la transcripción del referido artículo

Ahora bien, cabe precisar que tal pérdida de inscripción de su registro, y como consecuencia de ello, de los derechos y prerrogativas que se prevén en la legislación electoral local no es total, sino que debe realizarse una interpretación sistemática y funcional de los artículos 28, 29 y 60 a 63 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con lo previsto en el artículo 41, fracción I, primer párrafo, parte final, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en la Constitución General de la República se establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Ahora bien, ha sido criterio, tanto de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de este



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0773

113

SUP-OP-7/2009.

Tribunal Electoral, que la participación de los partidos políticos nacionales, en los procesos electorales que se llevan a cabo en las entidades federativas, debe sujetarse a las reglas que sobre el particular, sean fijadas por el legislador local.

Sin embargo, tales disposiciones no pueden contravenir lo previsto por el Poder Revisor de la Constitución, de tal forma que las modalidades que el legislador local prevea, respecto de la participación de los partidos políticos nacionales, en las elecciones que se realicen en las entidades federativas, no pueden traer como consecuencia que se les impida participar en dichos comicios locales.

En este sentido, cabe entender que la pérdida de inscripción del registro de un partido político nacional, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, se dará en el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales locales, pues un partido político nacional estará en aptitud de solicitar su inscripción para contender en los siguientes comicios, con independencia de que lo hubiese perdido previamente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29, del propio código electoral local, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 29.- Para poder participar en la elección local, los partidos políticos nacionales deberán obtener la inscripción de su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, acreditando los requisitos señalados en el artículo anterior, dentro de los primeros quince días del proceso electoral que corresponda."

Esto es, la pérdida de inscripción del registro de partido político nacional, no tendrá el carácter de permanente, sino que será temporal, en tanto se aproxime el inicio del siguiente proceso electoral local que, en términos del artículo 179 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurre dentro de la primera semana del mes de octubre del año previo al de la elección.

Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del código electoral local, para que un partido político nacional participe en el proceso electoral local, deberá presentar la documentación que se prevé en el artículo 28 del mismo código, a más tardar, dentro de los primeros quince días del proceso electoral que corresponda, pues, no existe razón o disposición alguna, en el sentido de que la pérdida de inscripción implique que el instituto político no pueda contender en el siguiente proceso electoral local.

Lo anterior, en razón de que la pérdida de inscripción de su registro, no significa que el partido político nacional deje de existir, o de actuar dentro del ámbito de la entidad federativa, en tanto que conserva su registro federal.

Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática controvierte lo dispuesto en el artículo 105, fracciones XXIII y XLIII, del código electoral local. En la primera de dichas fracciones se establece como atribución del Consejo General



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0774

115

SUP-OP-7/2009.

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, el verificar y, en su caso, aprobar la aplicación que del financiamiento otorgado realicen los partidos políticos, sin embargo, esta Sala Superior estima que dicha disposición debe ser interpretada junto con lo dispuesto en la fracción VI del mismo precepto, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 105.- El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

[...]

VI. Controlar, vigilar y fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y los gastos de las precampañas y campañas electorales, a través de la comisión correspondiente. "

Esto es, tanto el precepto impugnado como el previamente transcrito, se refieren a la fiscalización y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos, y no a una facultad diversa, pues ello podría contravenir la libertad de la que gozan los partidos políticos de manejar sus recursos, siempre y cuando se destinen al cumplimiento de sus fines, y se observen las reglas que sobre el particular se prevén en la normativa electoral local.

Por otra parte, en cuanto a lo dispuesto en la fracción XLIII del citado artículo 105 del código electoral local, en la que se prevé como atribución del Consejo General del instituto electoral local, el preparar, organizar o validar las elecciones internas de los partidos políticos, a solicitud, por cuenta y a

DERA
E LA
ACUER
TOMER
CIONE
AD

costo de éstos, y conforme a sus estatutos, se estima que resulta innecesario pronunciarse sobre el particular, toda vez que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado sobre el particular al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 5/99, cuando determinó que la atribución que se confería al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Electoral, de asesorar y colaborar con los partidos políticos, a petición de éstos, en el desarrollo de sus procesos internos de selección de candidatos y dirigentes, era una facultad que escapaba a los fines y funciones de dicho Instituto, además de que atentaba contra los principios de imparcialidad e independencia que lo rigen.

Como conclusión de lo anterior, esta Sala Superior estima que sí resultan contrarios a lo dispuesto en la Constitución General de la República los artículos 28, fracción III; y 49, fracción II, inciso b), párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que los artículos 50, fracción VII; 60, y 105, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo, resultan ajustados a las disposiciones constitucionales que rigen la materia electoral y el 105, fracción XLIII, del propio ordenamiento no es opinable.

QUINTO. TEMAS RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS Y REQUISITOS PARA SER CONSEJERO ELECTORAL O SECRETARIO TÉCNICO DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA.



En el referido apartado, el Partido de la Revolución Democrática formula varios conceptos de invalidez en los que aduce la inconstitucionalidad de los artículos 13, 63, 97, 99 y 135 del Código Electoral Local.

Los temas generales que se relacionan con tales preceptos no guardan una relación entre sí, razón por la que se irá dando respuesta a los conceptos de invalidez que se formulan, en el orden en que fueron señalados los preceptos impugnados.

Artículo 13 del Código Electoral del Estado de Coahuila. El precepto establece que el Poder Legislativo se deposita para su ejercicio en una asamblea que se denominará Congreso del Estado. La parte impugnada es el párrafo tercero, que prevé:

DERAC
E LA NAC
ACUERDO
TORYSIA
SIONES DA
AD

Artículo 13.

(...)

*Los partidos políticos tendrán derecho a integrar Grupos Parlamentarios en los términos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y su reglamento. Ningún **Diputado electo** podrá separarse de su fracción parlamentaria, salvo en el caso de candidaturas comunes.*

En los conceptos de agravio, el partido político actor aduce que se viola el derecho de asociación en virtud de que se establecen límites meta parlamentarios para el

funcionamiento del Congreso Estatal y de la libertad de asociación y de participación dentro del parlamento.

Opinión. La pretendida inconstitucionalidad es inexistente, toda vez que la unidad de las fracciones parlamentarias dispuesta en dicho precepto está orientada únicamente a la instalación del órgano legislativo y no al desarrollo sustancial de la actividad parlamentaria.

Lo anterior se sustenta en dos razones, a saber:

1. El concepto de **Diputado electo**, que es la persona elegida o nombrada para un cargo **mientras no toma posesión de éste**. Esto es, la propia disposición normativa impone lo que el actor denomina como "limitación", al diputado que todavía no protesta el cargo.

2. La Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza prevé los lineamientos para la instalación del Congreso, y en los que se establecen las actividades que deberán llevar a cabo los **diputados electos** para tal fin.

En lo que interesa, son de tomarse en consideración las disposiciones que siguen:

ARTICULO 10. *El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, enviará al Congreso del Estado copias certificadas de los documentos en los que se haga*



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0778

119

SUP-OP-7/2009.

constar la declaración de validez de la elección de diputados, así como la información relativa a los **diputados electos** para integrar la legislatura; acompañándose, asimismo, copias de las notificaciones de las sentencias definitivas que emita el órgano jurisdiccional electoral sobre la elección de diputados.

ARTÍCULO 11. Conforme a la información proporcionada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, se hará el registro correspondiente y se elaborará la lista de los **diputados electos** para integrar la Legislatura.

ARTÍCULO 12. Para el inicio de funciones de la nueva Legislatura, se celebrará un **período de instalación** que tendrá una duración de hasta diez días y en el cual se desahogarán específicamente los siguientes asuntos:

- I. Protesta de ley de los **diputados electos**;
- II. Declaratoria de instalación de la Legislatura que corresponda;
- III. Mandamiento para la expedición del decreto que de cuenta de la instalación, integración e inicio de funciones de la Legislatura;
- IV. Integración de los Grupos Parlamentarios;
- V. Asignación de la Presidencia de la Junta de Gobierno y declaratoria formal de la integración de dicho órgano de gobierno;
- VI. Elección de las comisiones permanentes y Comités;
- VII. Designación del Oficial Mayor y del Tesorero del Congreso; y
- VIII. Elección de la Diputación Permanente que estará en funciones durante el Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, autorizándola para conocer, además de lo señalado en la Constitución, los asuntos pendientes y todos aquellos que se presenten durante su funcionamiento, con excepción de las cuentas públicas, las iniciativas para la expedición o reforma de leyes y aquellos asuntos en los que expresa y rigurosamente la Constitución General de la República y la

Constitución Política del Estado u otros ordenamientos, dispongan la intervención del Pleno.

ARTICULO 13. Los **diputados electos de cada uno de los partidos políticos** que estarán representados en el Congreso, **designarán a uno de ellos para que participe en los trabajos previos relacionados con la instalación de la Legislatura** de la que formarán parte.

Para el desarrollo de dichos trabajos, los representantes designados por los diputados electos de cada partido político, se reunirán, al menos dentro de los tres días anteriores al inicio de su ejercicio constitucional, a fin de coordinar y organizar lo relacionado con la instalación de la nueva legislatura; para lo cual deberán ser convocados por el representante designado por los diputados electos del partido político que haya obtenido el mayor número de diputaciones.

En caso de que dos o más partidos políticos hayan obtenido igual número mayor de diputaciones, la convocatoria se hará por el representante de los diputados electos del partido que tenga más diputaciones de mayoría relativa.

Si dos o más partidos políticos tienen igual número mayor de diputaciones de mayoría relativa, la convocatoria se hará por el representante de los diputados electos del partido político que haya obtenido más votos en el Estado.

Al hacerse dicha convocatoria, se señalará la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la reunión inicial de dichos trabajos.

ARTÍCULO 14. Los representantes a que se refiere el artículo anterior, **notificarán a los diputados electos de su correspondiente partido, lo que se determine para la instalación y el inicio de las funciones de la legislatura.**

ARTICULO 15. El primero de enero del año inmediato posterior al de la elección, los **diputados electos** concurrirán al Congreso del Estado a las doce horas, a efecto de dar aviso de su asistencia al periodo de instalación de la legislatura.

ARTICULO 16. Para los efectos del artículo anterior, en la fecha en que deban concurrir al Congreso, los **diputados electos** celebrarán una **reunión preparatoria, para elegir la**



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMACÍA DE LA LEY
SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE TRÁFICO DE CO.
CONSTITUCIONALES Y DE A
INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0777

121

SUP-OP-7/2009.

mesa directiva que estará en funciones durante el período de instalación. Los trabajos de esta reunión preparatoria serán dirigidos por quien designen los diputados del partido que haya obtenido mayor número de diputaciones, y para su desarrollo el diputado designado para dirigir dicha reunión, solicitará libremente a otro diputado que lo asista en funciones de secretario.

En caso de que dos o más partidos políticos tengan igual número mayor de diputados, el que haya obtenido más diputaciones de mayoría relativa, designará al diputado que deberá dirigir la reunión preparatoria.

Si dos o más partidos políticos tienen igual número mayor de diputados de mayoría relativa, el partido político que haya obtenido más votos en el Estado, designará al diputado que deberá dirigir la reunión preparatoria.

Para la elección de la mesa directiva que estará en funciones durante el período de instalación de cada legislatura, se observará el siguiente procedimiento:

I. A las doce horas del día señalado, los diputados electos que estén presentes, se reunirán en el Salón de Sesiones para iniciar los trabajos de la reunión preparatoria, bajo la dirección de los diputados designados para este efecto en los términos del presente artículo.

II. El diputado en funciones de secretario, pasará lista de asistencia de los diputados de la nueva legislatura, conforme al registro de las copias certificadas de los documentos en los que se haga constar la declaración de validez de la elección de diputados remitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, para confirmar la existencia del quórum que prescribe el artículo 51 de la Constitución Política Local; en caso contrario, se procederá en los términos de esta misma disposición constitucional.

III. El diputado encargado de dirigir la reunión, solicitará que se formulen propuestas para elegir de entre los diputados electos asistentes, mediante votación secreta, ya sea por medio de cédulas o mediante el sistema electrónico, y por mayoría de votos, una mesa directiva integrada con un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios, que estará en funciones durante el período de instalación.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DERECHO
E LA NACION
ACORDOS
REVISAR
HONORABLE
AD

IV. El diputado en funciones de secretario dará a conocer el resultado de la votación.

V. El diputado encargado de dirigir la reunión, hará la declaratoria de la integración de la mesa directiva y solicitará a los electos que ocupen los lugares asignados a los miembros de la misma, para dar inicio a los trabajos del período de instalación, con lo cual se concluirán los trabajos de la reunión preparatoria.

ARTICULO 17. Al ocupar su lugar la nueva mesa directiva, el Presidente pedirá a los diputados y al público asistente, que se pongan de pie para hacer la declaratoria de apertura del periodo de instalación de la legislatura.

Posteriormente, reiterando la solicitud de que los diputados y el público asistente se mantengan de pie, el diputado Presidente rendirá su protesta de ley en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes emanadas o que emanen de ambas, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado; y si no lo hiciere así, que el Estado me lo demande".

A continuación, el Presidente tomará igual protesta a los demás **diputados electos**, y si la contestación fuera afirmativa, replicará las palabras siguientes: "Si no lo hiciereis así, el Estado os lo demande".

Acto seguido, el Presidente de la mesa directiva dirá en voz alta: "Se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la (No.) Legislatura".

En caso de que hubieran faltado a la sesión alguno o algunos de los diputados electos, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, la Presidencia de la mesa directiva mandará citarlos para el efecto de tomarles la protesta de ley.

Desahogados los puntos anteriores, se levantará la sesión y se convocará para la siguiente sesión.

Como se observa en los preceptos que anteceden, para llevar a cabo los actos tendentes a la instalación del Congreso del



SECRETARÍA DE LA F
PRIMA CORTES DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE
REGISTRACIÓN DE TITULOS DE CON
STITUCIONALES Y DE AC
TOS CONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0778

123

SUP-OP-7/2009.

Estado se hace necesaria la participación grupal de los **diputados electos**, como un elemento mínimo y necesario de organización legislativa.

Es decir, el término **diputado electo** previsto tanto en la norma impugnada como en los preceptos transcritos debe entenderse en el sentido de que guardan esa calidad los diputados que no han tomado posesión del cargo pero que están llevando a cabo los trabajos preparatorios para la instalación del Congreso del Estado de Coahuila.

Incluso, dicho término de **diputado electo** es acorde con la acepción mencionada en la razón 1 de este apartado.

Por tanto, al resultar evidente que la no desintegración de los grupos parlamentarios opera únicamente hasta que el legislador proteste el cargo para el cual fue elegido, es claro que con lo previsto en la norma impugnada no se produciría la supuesta violación al ejercicio de la función parlamentaria, en las modalidades de asociación y participación que hace valer el actor.

Artículo 63 del Código Electoral del Estado de Coahuila.

Dicho precepto prevé:

Artículo 63.- La pérdida del registro, o la inscripción del registro de un partido político, no tendrá efectos en relación a los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones.

Los partidos políticos que pierdan su registro o la inscripción de su registro, entregarán al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por conducto de su dirigente estatal, del representante acreditado ante el Consejo General o del responsable o responsables del órgano interno encargado de las finanzas, la totalidad de los bienes adquiridos con fondos provenientes del financiamiento público, otorgado de conformidad con este Código, acompañados de un inventario de bienes en el que se asiente la descripción, unidad, cantidad y valor de los mismos al momento de su adquisición, anexando los comprobantes fiscales respectivos, y en su caso, observando los procedimientos de disolución que desarrolle el órgano electoral correspondiente.

En la demanda no se hace valer concepto de agravio alguno, sino solamente se hace la afirmación genérica en el sentido de que se violan los artículos 1, 6, 7, 9, 14, 16, 41, fracción III, apartado B, 99, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de la ausencia de agravios es menester apuntar que resulta evidente, que el actor está inconforme con la norma atinente al procedimiento de disolución y la entrega de los bienes adquiridos con fondos provenientes de financiamiento público, cuando un partido político pierde la inscripción de su registro

Opinión. Este tema guarda similitud con la opinión **SUP-OP-6/2009** relativa a la acción de inconstitucionalidad **27/2009** y sus acumuladas **29/2009, 30/2009 Y 31/2009**.

Se estima que la ley está asimilando la pérdida de inscripción del registro a la pérdida propiamente de registro, al



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0779

125

SUP-OP-7/2009.

establecer que la primera trae como consecuencia la cancelación de los derechos y prerrogativas estatales, en cuanto a los bienes que el partido político nacional haya adquirido a través del financiamiento público.

Lo anterior, en razón de que la pérdida de la inscripción no significa que el partido político nacional deje de existir, o de actuar dentro del ámbito de la entidad federativa, en tanto que conserva su registro federal, por lo que no puede privársele de los bienes que haya obtenido, así fuese con financiamiento estatal, porque su actividad es permanente.

Por tanto, esta Sala Superior opina que el artículo 63 del código electoral local sí pudiera resultar contrario al principio de certeza y equidad.

Artículo 97 del Código Electoral del Estado de Coahuila. El precepto en comento prevé:

Artículo 97.- Cada partido político tendrá derecho a designar un representante propietario y un suplente para las sesiones del Consejo General.

En todo caso, los representantes de los partidos políticos que sean designados fungirán como consejeros representantes ante el Consejo General, así como en los comités distritales y municipales electorales, según corresponda.

Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes. Para tal efecto comunicarán, a través de su representante propietario acreditado ante el Instituto, el aviso correspondiente al Consejero Presidente;

dicho aviso será suscrito por la dirigencia estatal de cada partido.⁶

De igual manera que en diversos apartados relacionados con otros artículos, el actor no expresa conceptos de agravio, sino que realiza la mención genérica de que se infringen los artículos 1, 6, 7, 9, 14, 16, 41, fracción III, apartado B, 99, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Opinión. A diferencia del precepto examinado en el anterior apartado, en el caso no es factible advertir de manera clara la infracción a alguno de los preceptos constitucionales.

Esto es así, porque el artículo impugnado establece el derecho de los partidos políticos de designar representantes ante el Consejo General, comités distritales y municipales electorales.

La ausencia de agravios es absoluta, y el único signo que pudiera ser considerado como inconformidad es el subrayado del enunciado en la parte que dice *"dicho aviso será suscrito por la dirigencia estatal de cada partido"*; ello en relación con la facultad de los partidos políticos de sustituir en todo tiempo a sus representantes.

Es decir, si entre los derechos de los partidos políticos previstos en el artículo 38 de la ley, la fracción VII le otorga

⁶ El subrayado es puesto en el escrito de demanda.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0780

127

SUP-OP-7/2009.

la facultad de nombrar representantes ante los órganos del Instituto, en los términos de la propia ley, no es factible advertir que el ejercicio de esa atribución pueda ser contraria a algún precepto constitucional.

Por tanto, la opinión de esta Sala Superior es en el sentido de que ante la ausencia de conceptos de agravio y en virtud de que no se advierte de manera manifiesta la infracción a algún principio o artículo de la Constitución, no existen elementos para declarar que el precepto impugnado sea inconstitucional.

Artículos 99 y 135 del Código Electoral del Estado de Coahuila. Se examinarán de manera conjunta, dada la similitud del objeto de impugnación de ambos preceptos.

Los enunciados señalados en la demanda son los siguientes:

EXHIBICIÓN
DE LA MATERIA
ACUERDOS
PROCESALES
DIONES DE
AD

Artículo 99.- *Para ser designado Consejero Electoral, propietario o suplente, se deberán cumplir los requisitos siguientes:*

*I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y coahuilense, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
(...)*

VII. No haber sido en ningún momento dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni representante del mismo ante ningún organismo electoral en el país.

VIII. No tener antecedentes, en ningún caso, de una militancia activa, pública y notoria en algún partido político.

(...)

Artículo 135.- Para ser integrante de la mesa directiva de casilla se requiere:

I. Ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda la casilla, salvo el caso del secretario técnico, el cual se buscará cumpla con este requisito.

Los secretarios técnicos tendrán que ser personas que no hayan militado en un partido político ni hayan sido representantes de aquellos ante cualquier órgano electoral, salvo el caso de que resulte insaculado en los términos de la ley.

(...)

Como se puede apreciar, en ambos se establece la limitante para quienes hayan sido militantes de algún instituto político de desempeñar el cargo de Consejero Electoral y Secretario Técnico de mesa directiva de casilla.

A juicio del partido político impugnante las disposiciones transcritas violentan el derecho de asociación y vulneran el principio de funcionamiento de los órganos electorales.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE TRÁMITE DE COS
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONAL

Opinión. Esta Sala Superior opina que los artículos 99 y 135 del Código Electoral de Coahuila resultan inconstitucionales en razón de las siguientes consideraciones:

En los artículos 41, base V y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución General de la República, establecen los principios bajo los cuales se rigen la función electoral tanto a nivel federal como local, en el caso, resultan relevantes los principios de autonomía e independencia.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0781

129

SUP-OP-7/2009.

De tales principios se deriva la necesidad de que los funcionarios electorales, ejerzan su actividad ajenos a cualquier influencia o coacción externa, es decir, las decisiones que en el ejercicio del cargo electoral, tome un Consejero Electoral o funcionario de casilla, debe atender únicamente a su propio conocimiento y apreciación del asunto sujeto a su decisión, sin atender a ningún factor externo que pueda condicionar su actuación.

Por tanto, se ha considerado razonable el establecimiento de limitaciones al derecho de acceso a los cargo públicos, concretamente los electorales, mediante el establecimiento de requisitos que permitan asegurar la autonomía e independencia de los funcionarios electorales.

JERACI
LA NACION
GUERRA
TOVERSA
IONES

No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que el artículo 35, fracción II parte final, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, la de poder ser designado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.

Por su parte los artículos 9 y 35, fracción III de la Norma Fundamental, establecen como derecho de los ciudadanos mexicanos, el de asociarse, individual y libremente para tomar parte en los asuntos político del país.

Como se aprecia, no obstante la necesidad de las limitaciones apuntadas, las mismas, de ninguna forma pueden hacer nugatorios de manera permanente los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que deben estar sujetos a una condición racional.

Al respecto, los artículos 99 y 135 de la norma electoral se apartan de ese principio de racionalidad al establecer de manera absoluta una limitación al derecho de los ciudadanos desempeñar los cargos de Consejero Electoral o Secretario Técnico de mesa directiva, al establecer como requisito el de no haber militado en algún partido político.

Tal limitación resulta irracional y desproporcionada, ya que no se encuentra sujeta a criterio de temporalidad alguno, sino que de manera absoluta, limita el ejercicio de un derecho constitucional.

Máxime si tomamos en consideración, que cuando una persona ha dejado de pertenecer a un partido político, y ha transcurrido un tiempo considerable de la separación, puede validamente considerarse la desvinculación entre el ciudadano y el instituto político, y por tanto presumirse la autonomía e independencia del funcionario electoral.

SEXTO. INVASIÓN DE COMPETENCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0782

131

SUP-OP-7/2009.

COAHUILA RESPECTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

El Partido de la Revolución Democrática aduce como concepto de invalidez que los artículos 78, 81, fracciones III y IV, y 105, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Coahuila, son contrarios a los diversos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es el Instituto Federal Electoral el que puede organizar la elección local y no al revés.

A efecto de estar en aptitud de emitir opinión sobre el anterior planteamiento de invalidez, se impone hacer referencia al marco normativo constitucional aplicable.

El artículo 41, fracción V, párrafo in fine, de la Constitución Federal, *que rige en la materia electoral en el ámbito federal*, establece textualmente lo siguiente:

EL PACTO
DE LA UNIÓN
LA ACUERDO
TRONCAL
CONSTITUCIÓN
FEDERAL

"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

...

V.

...

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable."

Del precepto constitucional transcrito, se colige que el Constituyente otorgó facultad al Instituto Federal Electoral para celebrar convenios con las autoridades competentes de los Estados que lo soliciten, a efecto de hacerse cargo de la organización y desarrollo de los procesos electorales locales, remitiendo a la ley la regulación de la forma y términos de dicho acuerdo.

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución Federal, regula la organización política y estructura jurídica de las entidades federativas en nuestro país. Dicho precepto se enmarca en un contexto global del sistema federal, en términos del artículo 40 del propio ordenamiento supremo, según el cual, el Estado mexicano se compone de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental.



PODER JUDICIAL DE LA FE
PRIMA CORTE DE JUSTICIA DE
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
RECOPILACIÓN DE TRÁMITE DE CONT
CONSTITUCIONALES Y DE AC
RECONSTITUCIONALES

La fracción IV, inciso d) del invocado artículo 116, dispone:

"Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0783

133

SUP-OP-7/2009.

...
d) *Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;*
..."

Como puede observarse, el Poder Reformador de la Constitución, en consonancia con lo dispuesto para el orden federal en el artículo 41, fracción V, párrafo in fine, autoriza a las legislaturas locales garantizar en su normatividad interna que las autoridades electorales administrativas competentes puedan convenir con el Instituto Federal Electoral que éste se encargue de la organización de los procesos electorales locales.

De lo anterior, se puede concluir que a nivel constitucional sólo está reconocida la atribución de los órganos electorales de los Estados para celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones locales, pero no así que los órganos electorales de las entidades federativas puedan llevarlos a cabo para organizar la elecciones federales, ni que puedan asumir a través de esos convenios las funciones que corresponden, exclusivamente, al Instituto Federal Electoral, pues esto constituye una atribución que pretende incidir en la actividad de un órgano federal, el cual guarda autonomía e independencia respecto de la normatividad local, de conformidad con el artículo 41 Constitucional citado.

RECIBIDO
JERARQUÍA
NACIONAL
JUN 25 DE 2009

Además, de acuerdo con la interpretación a *contrario sensu* del artículo 124 de la Carta Magna, las atribuciones conferidas a los funcionarios federales (como es el caso de organizar las elecciones federales) se entienden restringidas para los Estados, de ahí que pretender regular esa materia que es competencia del Instituto Federal Electoral, excede de las facultades reservadas a los Estados.

En otro concepto de invalidez del propio apartado, el Partido de la Revolución Democrática aduce la inconstitucionalidad del artículo 80 párrafo segundo, del Código Electoral para el Estado de Coahuila, porque se faculta al Instituto local a disponer de las autoridades federales.

En opinión de esta Sala Superior es infundado lo alegado, porque el partido actor parte de la premisa inexacta de que la ley local autoriza al instituto de la entidad a disponer de las autoridades federales, cuando en realidad, del texto del precepto citado se advierte una función de coordinación entre ambas entidades.

En efecto, el artículo 80, párrafo segundo, del Código Electoral para el Estado de Coahuila establece:

"Artículo 80.- El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá una relación de respeto y colaboración mutua con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los organismos públicos autónomos, para lograr el desarrollo democrático de la Entidad.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0784

135

SUP-OP-7/2009.

Para el desempeño de sus funciones el Instituto contará con el apoyo, auxilio y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, bajo los principios de autonomía federal, estatal y municipal, conforme a la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables."

Como se aprecia, la norma cuestionada no establece una relación de subordinación entre el instituto electoral local y la autoridades federales, por el contrario, prevé una relación de apoyo, auxilio y colaboración de las autoridades federales para con dicho instituto electoral.

Por ende, al demostrarse que no se regula lo aducido por el partido actor, es inconcuso que la consecuencia de inconstitucionalidad pretendida también es inexistente.

Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática argumenta en diverso concepto de invalidez del apartado en estudio, que el artículo 318 del Código Electoral para el Estado de Coahuila pretende regular una competencia federal al prever sanciones al incumplimiento de lo previsto en el artículo 134, lo cual vulnera los artículos 123 y 124 constitucionales.

Esta Sala superior opina que es infundado el argumento, por lo siguiente.

Resulta indispensable precisar el marco normativo aplicable y, a partir de su análisis, formular las conclusiones correspondientes.

Así, conviene tener a la vista lo que disponen los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución Federal:

Artículo 134. ...

[...]

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."

De lo estatuido en los dos primeros párrafos transcritos se advierte, la previsión constitucional de la obligación de los servidores públicos de aplicar, en todo tiempo, con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad, para no afectar el principio de equidad en la competencia entre partidos políticos.

Asimismo, se establece un mandamiento y una prohibición respecto de la propaganda (bajo cualquier modalidad de comunicación social) que difundan las entidades públicas, lo primero, al señalar que dicha propaganda debe tener carácter



OFICIAL DE LA
REMA CORTE DE JUSTICIA
JEFATURA GENERAL E
SECCION DE TRAMITE DE COI
SIONALES Y DE AL
CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0785

137

SUP-OP-7/2009.

institucional y sólo fines informativos, educativos o de orientación social; en tanto que la restricción se expresa al indicar que en ningún caso dicha propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada del servidor público.

El último de los párrafos ordena que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de los mandatos señalados, debiendo incluir el régimen de sanciones correspondiente.

La anterior disposición permite afirmar, *a priori*, que las normas contenidas en estos párrafos tienen aplicación en distintos ámbitos, por ello se determina que corresponde a los distintos ordenamientos legales que conforman el sistema jurídico mexicano garantizar el cumplimiento de lo ahí dispuesto.

DERACI
ELAIN
ACUERDOS
ROYES
10-15-09
NO

Esto es, las normas constitucionales en comento tienen validez material diversa, pues rigen en distintas materias, tales como electoral, administrativa o penal, en órdenes igualmente distintos como el federal o el estatal, entre otras; por ende, la aplicación de dichos mandatos constitucionales corresponde a las autoridades federales, estatales o del Distrito Federal.

De lo anterior, es posible concluir que el artículo 134 de la ley suprema no establece una competencia exclusiva a favor de una sola autoridad u órgano federal o local para su

aplicación, ni tiene incidencia exclusiva en una sola materia, como podría ser la electoral.

Para justificar las conclusiones anunciadas, por cuanto hace a los mandatos y restricciones, así como a los principios o valores esenciales que tutela, por lo que hace al ámbito electoral, conviene realizar una interpretación de los párrafos transcritos, sobre la base de distintos criterios hermenéuticos que permitan conocer no sólo el significado de la disposición contenida, sino además los principios y valores consagrados en dichas normas, así como los propósitos o fines que se pretenden con la adición del texto de la ley suprema, todo esto para arribar a una conclusión congruente y sistemática con el propio régimen electoral implementado en la Constitución.

Tal método de interpretación ha sido expresado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVIII/98, publicada en la página 17 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1998, Novena Época, cuyo texto es:

"INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0786

139

SUP-OP-7/2009.

de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.

Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho."

En esas condiciones, para orientar el ejercicio interpretativo son útiles las argumentaciones esgrimidas por el poder reformador de la Constitución en los dictámenes y discusiones que sirvieron de base para motivar el contenido de los actuales párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Carta Magna, en los cuales se encuentra lo siguiente:

1. La iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, en la cual se lee:

"El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en

las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como **eleva a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.** Quienes suscribimos la presente iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una está el derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario **que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.**

Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para las personas, no para las autoridades; éstas no pueden invocar como justificación o defensa de sus actos tales principios. La libertad de expresión es una garantía individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la Constitución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege frente a eventuales abusos del poder público.

Es por ello que **proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política.**

La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación.

Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales, propósito que inicia por impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la Unión para recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas.

En suma, esta iniciativa postula tres propósitos:

- En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;
- En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad, y
- **En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales.** Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición,



PODER JUDICIAL DE LA FE
REMA CORTE DE JUSTICIA D
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
NACIÓN DE TRÁMITE DE CONT
CONSTITUCIONALES Y DE ACI
INSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0787

141

SUP-OP-7/2009.

establecida como norma en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones".

2. Tal propuesta de decreto se sometió, dentro del proceso reformador legislativo, a las distintas comisiones del Congreso de la Unión, las cuales emitieron el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos que contiene Proyecto de Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Electoral, de cuyo contenido y en lo que al caso interesa se destaca:

"OCTAVO

Artículo 134

*En la iniciativa bajo dictamen se propone la adición de tres párrafos al artículo 134 de la Constitución con el propósito de establecer nuevas y más duras previsiones a fin de que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y aplicación de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Se dispone además que **la propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, sin promover la imagen personal de los servidores públicos.***

Coincidiendo con los propósitos de la iniciativa bajo dictamen, las Comisiones Unidas consideran necesario precisar las redacciones propuestas a fin de evitar confusión en su interpretación y reglamentación en las leyes secundarias".

3. A su vez, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el Artículo 134; y se deroga un párrafo al

Artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte:

"Artículo 134

Los tres párrafos que la Minuta bajo dictamen propone añadir en este artículo constitucional son, a juicio de estas Comisiones Unidas, de la mayor importancia para el nuevo modelo de competencia electoral que se pretende instaurar en México.

Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá establecer en la ley más y mejores controles para tal propósito, así como las sanciones aplicables a quienes la violen.

*Por otra parte, el **segundo párrafo** tiene como propósito **poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, para la promoción personal. Para ello, se establece que esa propaganda no podrá incluir nombres, imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.***

En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las sanciones a quienes infrinjan las normas antes señaladas.

Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el sentido y propósitos de la Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en comento. La imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los partidos políticos y de sus campañas electorales debe tener el sólido fundamento de nuestra Constitución a fin de que el Congreso de la Unión determine en las Leyes las sanciones a que estarán sujetos los infractores de estas normas".



PODERA JUDICIAL DE LA
PREMIA COPIA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CC
CONSTITUCIONALES Y DE
RECONSTITUCION

Como se puede observar, al adicionar el artículo constitucional en comento, el legislador constituyente pretendió, entre otras cuestiones, establecer como norma de rango constitucional la imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de la competencia entre los partidos políticos y en las campañas electorales.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0788

143

SUP-OP-7/2009.

Con esta reforma se buscó que los servidores públicos se abstengan de utilizar la propaganda institucional como un medio para promocionar la persona e imagen de cualquier servidor público y para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral.

El valor jurídico que previo a la reforma ya se tutelaba en la norma constitucional es el relativo a la administración con eficiencia, eficacia y honradez de los recursos públicos, así como el ejercicio adecuado de los recursos en las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes o servicios, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles para acceder a ellos (precio, calidad, financiamiento, oportunidad, etcétera).



EDFEM
DE LA JUDICIA
EACUIN
ITRGE
ACIONES
DAD

Con motivo de la adición de los tres párrafos últimos, en esta disposición constitucional se incorporan en la tutela dos bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales, o en general, en la competencia entre los partidos políticos.

Acorde con estas bases, puede entenderse que lo establecido en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución es, por un lado, el mandato de aplicar los recursos públicos con imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otro, realizar propaganda

estrictamente institucional, al fijar la restricción general y absoluta para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, así como para cualquier ente de los tres órdenes de gobierno y para los servidores públicos, de realizar propaganda oficial personalizada.

Finalmente se reserva a las leyes secundarias el deber de contemplar las garantías necesarias para el cumplimiento de dicho mandato y prohibición, incluyendo el régimen de sanciones que proceda.

Por consiguiente, si el artículo 134 de la ley suprema no establece una competencia exclusiva a una autoridad u órgano autónomo para la aplicación de las disposiciones que mandata, cabe concluir que no existe una competencia absoluta para la aplicación de dichas normas, de ahí que sea incorrecto lo afirmado por el partido actor en el sentido de que se invade una esfera competencial exclusiva de la federación.

El inconforme aduce en otro concepto de invalidez que los artículos 25 y 105 fracción XXI del Código Electoral para el Estado de Coahuila son inconstitucionales, porque se pretende regular aspecto de partidos políticos nacionales, lo cual sólo corresponde al Instituto Federal Electoral y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0789

145

SUP-OP-7/2009.

A consideración de esta Sala Superior, el concepto de invalidez mencionado es fundado, atento a las siguientes consideraciones:

Los partidos políticos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encuentran su fundamento en el derecho de asociación, principio ineludible y soporte de todo Estado democrático.

Así mismo, el diverso 41 de nuestra Carta Magna, dispone que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fines esenciales promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

EDIFICIO
DE LA
ACUERDO
TROCER
CADA
2009

En ese contexto, los partidos políticos como entes directamente vinculados con la consolidación del Estado democrático, han sido dotados por el legislador de una serie de derechos encaminados a la procuración de sus objetivos, esto es, relacionados estrechamente con la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.

Acorde con lo anterior, resulta inconcuso que los partidos políticos como entidades de naturaleza pública, se encuentran dotados con personalidad jurídica para estar en

posibilidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, a fin de alcanzar los fines constitucionales para los cuales fueron previstos.

Así también, la Constitución realiza la distinción entre partidos políticos nacionales y locales, según se advierte de lo dispuesto por los artículos 41, párrafo primero, base I, primer párrafo y base V, primer párrafo, 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:

***"Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.*

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

...

V.- La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

...

***Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no*





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0790

147

SUP-OP-7/2009.

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

...

e).- Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

..."

De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos destacados, se puede advertir que acorde la distinción de partidos políticos nacionales y estatales, corresponde a la Federación a través del Instituto Federal Electoral regular todos los aspectos atinentes a los partidos políticos nacionales, entre los cuales se encuentran las condiciones y requisitos para designar a sus dirigentes, así como para registrarlos ante los órganos electorales, en tanto, las legislaturas locales sólo están facultadas para reglamentar aspectos inherentes a los partidos políticos locales, y en relación a los nacionales, únicamente puede normar lo concerniente a su participación en los procesos electorales.

Tal criterio lo sostiene esta Sala Superior, en la tesis relevante S3EL 032/2001, publicada a fojas 751-752 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, que es del tenor siguiente:

"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SE RIGEN PREPONDERANTEMENTE POR LA CONSTITUCIÓN Y LEYES FEDERALES.

El régimen jurídico creado para regular de modo prioritario y preponderante, los actos y hechos jurídicos relacionados con la formación, registro, actuación y extinción de los partidos políticos nacionales, se encuentra previsto directamente en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación federal contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en otros ordenamientos, y no en las legislaciones estatales o del Distrito Federal. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta que, en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se fijan las bases relativas a la existencia y regulación de la vida de los partidos políticos nacionales, se determinan sus fines y prerrogativas, y se reserva a la ley secundaria la determinación de las formas específicas de su intervención en los procesos electorales; estas bases constitucionales revelan que, en principio, todo lo relacionado con la constitución, registro, prerrogativas y obligaciones en lo general de los partidos políticos nacionales, se encuentra encomendado a las autoridades federales, tanto en el ámbito legislativo, como en los demás ramos. En ejercicio de esas atribuciones constitucionales, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reglamenta las bases generales del sistema electoral federal, incluidas las relativas a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas. De lo antes expuesto se puede concluir que, en principio, es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establece la normatividad rectora de los partidos políticos nacionales, toda vez que en aquella se prevé su existencia y se fijan ciertas bases sobre los mismos, mientras que en el segundo se desarrollan las normas constitucionales, estableciendo un sistema integral regulatorio de los partidos políticos nacionales. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la existencia de los partidos políticos trasciende al ámbito territorial de cualquier entidad federativa, por lo que es innecesario que en la normatividad electoral de cada una de las entidades federativas o del Distrito Federal, se establezcan disposiciones referidas a la existencia de los partidos políticos nacionales, debiéndose limitar a incluir las reglas que estimen necesarias para dar cauce y orden a las



PODER JUDICIAL DE LA F
PRIMA COMPLE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL D
REGION DEPTAMITE DE CON
CONSTITUCIONALES Y DE AL
DIRECCION NACIONAL



relaciones que necesariamente se entablan entre las autoridades locales y los partidos políticos nacionales, con la intervención de éstos en las actividades y órganos electorales de tales entidades y en los procesos electorales que organizan, llevan a cabo, vigilan y controlan dichas autoridades, todo esto sin interferir con la normatividad federal que contiene el estatuto jurídico integral de las citadas asociaciones de ciudadanos; de manera que en las leyes del Distrito Federal y en las de los Estados no tiene por qué existir una regulación completa de todo lo concerniente a los partidos políticos nacionales, porque este objetivo corresponde a las leyes nacionales."

La postura referida, es coincidente con la tesis P./J. 53/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 563, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, cuyos rubro y texto dicen:

"DISTRITO FEDERAL. SU ASAMBLEA LEGISLATIVA NO ESTÁ FACULTADA PARA LEGISLAR, EN RELACIÓN CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, ASPECTOS DIVERSOS A SU PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES. Los artículos 41, segundo párrafo, 49, 60, inciso h), y 276, inciso e), del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan, respectivamente, la posibilidad de que se fusionen dos o más asociaciones políticas, entre las que se encuentran los partidos políticos nacionales, así como la correspondiente atribución, conferida al Instituto Electoral del Distrito Federal, para resolver sobre la cancelación del registro de los partidos políticos fusionados, y la suspensión o cancelación del registro del partido político por la comisión de las faltas previstas en el dispositivo 275 del propio código, resultan contrarios a lo previsto en el artículo 41, fracción III, de la Carta Magna, en virtud de que corresponde al Instituto Federal Electoral conocer esos aspectos, y su regulación es de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión."

En ese orden de ideas, si los preceptos controvertidos hacen mención de manera expresa que ningún líder sindical o gremial, ni tampoco ningún directivo de una asociación

sindical, corporativa o gremial, podrán ocupar un órgano de dirección o de mando en un partido político nacional o estatal; que la violación a esa disposición dará origen a la ilegalidad del partido político nacional, y que es competencia del Consejo General del Instituto Electoral local registrar los nombramientos de los dirigentes federales de los partidos políticos, es inconcuso que está regulando cuestiones ajenas a la participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones locales.

De ahí que, esta Sala Superior estima que los dispositivos impugnados contravienen el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por legislar en torno a cuestiones sustanciales de los partidos políticos, como son las ya apuntadas.

En la última parte del sexto concepto de invalidez el inconforme sostiene que el artículo 12 del Código Electoral para el Estado de Coahuila es inconstitucional al establecer lo siguiente:

"ARTÍCULO 12. *A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro del Estado o de sus Municipios. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección local ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del último registro que se tuviere.*

Aduce el accionante que el trasunto precepto viola los artículos 1, 14, 16, 41, 116 fracción IV, y 133 de la





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0792

151

SUP-OP-7/2009.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al determinar tajantemente que cuando un partido político por cualquier circunstancia registra un candidato a distintos cargos de elección popular en un mismo proceso comicial, se cancelará el último registro que tuviere, circunstancia que atenta en contra los principios democráticos.

En opinión de los integrantes de la Sala Superior, la disposición controvertida debe considerarse inconstitucional, en atención a que transgrede el principio de legalidad electoral previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse por el legislador local que en el evento de llegarse a registrar a un candidato a distintos cargos de elección popular en un mismo proceso electoral, se cancelará el último registro que tuviere, esto es, sin conceder al partido político que haya realizado su postulación, la oportunidad de manifestar cuál de esas candidaturas es la que debe prevalecer.

EDERACIÓN
DE LA NACIÓN
ACUERDO
ITROVERSA
CIONEN
DAS

Lo anterior se estima así, en virtud de que en el artículo 41, Base I, de la Ley Suprema invocada, se reconoce que los partidos políticos tienen el derecho de postular a los ciudadanos para acceder a los cargos de elección popular, al determinarse que como entidades de interés público podrán participar en las elecciones que se celebren para renovar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, teniendo entre sus fines los de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación

nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen.

En ese sentido, es dable sostener que si por mandato constitucional los partidos políticos son la vía para que los ciudadanos accedan al poder público, y para tales efectos les concede la posibilidad para postularlos a los distintos cargos de elección popular, de acuerdo con sus ideas y principios, tal situación conlleva la necesidad de que en las leyes secundarias se garantice ese derecho que la norma fundamental les confiere, para determinar la candidatura con la que contendrán en los procesos comiciales.

Al respecto, conviene destacar que reconociendo los derechos referidos con antelación, y en respeto además de la garantía de audiencia, en el artículo 195 del código electoral de Coahuila, se establece que queda prohibido, que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político; pero que el comité distrital o municipal electoral o el Instituto, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe dentro del término de 48 horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Ese principio que se desprende del artículo citado en el párrafo anterior, igualmente se debió considerar por el





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0793

153

SUP-OP-7/2009.

legislador en el dispositivo cuestionado, determinado que en el supuesto de que un partido, en el mismo proceso electoral registre a un candidato a diferentes cargos de elección popular, debe concederse a dicho instituto político la oportunidad de decidir la candidatura que habrá de prevalecer, y sólo ante su silencio establecer la consecuencia que debe resentir.

Por tanto, cuando en la disposición cuestionada se determina que procederá a la cancelación automática del último registro que se tuviere, sin permitir que sea el partido quien manifieste el que debe permanecer, violenta la garantía de audiencia, así como el derecho que tienen los partidos para postular a los ciudadanos a determinados cargos de elección popular, consagrado a su favor en el artículo 41 de la Ley Fundamental; de ahí que en opinión de este órgano jurisdiccional deba ser declarada inconstitucional.

DERACIÓN
E LA NACIÓN
ACUERDO
PROVINCIALES
CIONES DE

Este criterio fue sostenido en la opinión expresada por esta Sala Superior en el expediente SUP-OP-02/2009.

SÉPTIMO. TOPE MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO PRIVADO.

En el séptimo concepto de invalidez, el partido actor impugna el artículo 50, fracción IV, del código electoral local.

Dicho precepto establece lo siguiente:

"Artículo 50.- El financiamiento que no tenga el carácter de público, se sujetará a lo siguiente:

I...

VIII. Cada partido político podrá obtener como financiamiento, por los conceptos a que se refiere este artículo, con excepción de lo previsto en la fracción anterior, hasta el noventa y nueve por ciento anual del monto que le corresponda por concepto de financiamiento público ordinario, así como para actividades de capacitación y fortalecimiento estructural, el cual queda prohibido utilizarse para actividades de precampañas o campañas electorales; asimismo, podrá obtener por los anteriores conceptos, con excepción de lo previsto en la fracción anterior, **hasta el noventa y nueve por ciento del financiamiento tendiente a la obtención del sufragio**, cantidad que podrá ser utilizada siempre y cuando no se rebasen los topes de precampaña y campaña fijados para la elección de que se trate.

En caso de incumplimiento a lo previsto en esta fracción, el partido político se hará acreedor a las sanciones establecidas en este Código, independientemente de las sanciones que sean aplicables o pudieran resultar por la comisión de posibles delitos previstos en el Código Penal del Estado."



Como se ve de la lectura del mencionado precepto, en la parte impugnada se fija como tope del financiamiento privado, en la mayoría de los rubros que integra dicho financiamiento, hasta el noventa y nueve por ciento del monto que corresponda por concepto de financiamiento público ordinario, así como para actividades de capacitación y fortalecimiento cultural.

El actor aduce que la norma es inconstitucional porque permite superar el límite de aportación privada por arriba del diez por ciento, lo que constituye violación al artículo 116,



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0794

155

SUP-OP-7/2009.

fracción IV, de la Constitución Federal, que establece el límite en materia de aportaciones.

Opinión. En concepto de la Sala Superior el precepto **sí es inconstitucional** porque es contraventor de lo establecido en el artículo 116 fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como obligatorio para las legislaturas de los estados, el tope máximo que, como financiamiento privado, pueden recibir los partidos políticos, el cual consiste en el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador.

Por tanto, sí el precepto legal establece como límite del financiamiento privado, en la mayoría de los rubros que contempla dicho financiamiento, el noventa y nueve por ciento del monto del financiamiento público, es evidente la inconstitucionalidad del precepto, pues atenta contra el sistema constitucional democrático mexicano, que tiene como base, entre otros principios, los relativos a que el financiamiento público, o sea, el financiamiento que otorga el Estado, es el rector fundamental de la actividad financiera de los estados políticos y que el financiamiento proveniente de fuentes no públicas se encuentra debidamente acotado.

De ahí que no exista fundamento legal, racional y lógico alguno, para que el precepto tildado de inconstitucional establezca, de manera exorbitada, el límite del noventa y

nueve por ciento, en relación con el financiamiento público, pues prácticamente está equiparando ambos tipos de financiamiento, cuando lo correcto, como ya se asentó, es que prevalezca el financiamiento público sobre el privado.

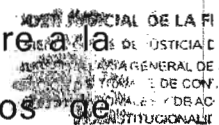
En consecuencia, el artículo 50, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Coahuila, a juicio de esta sala, es inconstitucional.

OCTAVO. ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.

En el octavo conceptos de invalidez, el Partido de la Revolución Democrática tilda de inconstitucionales los artículos: 57, 59, 72, 73, 105, 161, 162, 314, 323 y 334 del Código Electoral Local.



El contenido general de los referidos preceptos se refiere a la definición de gastos de Radio y Televisión; gastos de campaña relacionados con candidatura común; la distribución de tiempos en Radio y Televisión en precampañas y campañas; las facultades de vigilancia del instituto local de los mensajes que se transmiten en Radio y Televisión, en el territorio estatal y con el monitoreo de los programas respectivos así como la suspensión inmediata de propaganda oficial; facultades de la comisión de acceso a los medios de comunicación; y el señalamiento de infracciones al código en materia de propaganda electoral de Radio y Televisión.





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0795

157

SUP-OP-7/2009.

El partido actor aduce que en el precepto de referencia, el Código Electoral pretende regular tiempos, vigilancia, infracciones y suspensión de propaganda en materia de Radio y Televisión, en contravención a lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto establece que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al estado en Radio y Televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales.

OPINIÓN. Al respecto, la Sala Superior estima no debe emitir opinión en relación con el planteamiento sobre el que versan los conceptos de invalidez antes sintetizados, en primer lugar, porque al cuestionarse aspectos de competencia entre la federación y los Estados, resulta palmario que se trata de una cuestión que carece de la naturaleza técnico especializada en materia electoral, al estimar el accionante que es el Congreso de la Unión quien tiene la atribución de legislar en materia de Radio, Televisión, Franquicias Postales y Telegráficas.

En segundo lugar, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el tema de que se trata, a saber: a qué autoridad compete regular los tiempos oficiales en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos, tanto en el orden federal como estatal,

tal como se advierte del contenido de la jurisprudencia, cuyo texto es el siguiente:

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISIÓN A QUE TENDRÁN ACCESO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSO TRATÁNDOSE DE ELECCIONES ESTATALES.

La administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es una atribución privativa a nivel nacional del Instituto Federal Electoral, incluso tratándose de elecciones en los Estados, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna que habilite a los permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades electorales locales, sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral. Por tanto, las autoridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones que en la materia disponga legalmente el Instituto Federal Electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una función que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación."



SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE AVANCE TECNOLÓGICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES
SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE AVANCE TECNOLÓGICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE TRABAJO

NOVENO. En el agravio noveno, el promovente alega que es inconstitucional el artículo 105, fracción V, del Código Electoral del Estado de Coahuila, que es del tenor siguiente:



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0796

159

SUP-OP-7/2009.

"Artículo V. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

V. Autorizar con las dos terceras partes de sus integrantes, las bases del convenio con el Instituto Federal Electoral para que éste pueda coadyuvar en la organización de las elecciones locales. En todo caso, serán indelegables e irrenunciables las facultades del Consejo General para expedir la convocatoria, realizar el cómputo y la declaración de validez de las elecciones estatales y municipales. La coadyuvancia del Instituto Federal Electoral sólo procederá en cuestiones de logística y operación electoral, cuyo mando será determinado por el Consejo General."

Las alegaciones realizadas para combatir el contenido de esta disposición se pueden agrupar en tres temas: a) la realización del convenio sólo exige que la autoridad electoral local lo solicite a la federal, sin mayores condiciones; b) en la realización del convenio las autoridades electorales cuentan con plena libertad, sin estar sujetos a las decisiones de otros poderes del Estado; c) no pueden ser sólo de coadyuvancia las facultades del Instituto Federal Electoral con motivo del convenio que celebre con el Instituto Local de Coahuila.

Para emitir opinión sobre los argumentos relativos a estos temas, es necesario analizar la forma en que está implementado el sistema para la realización de convenios entre la Autoridad Electoral Local y el Instituto Federal Electoral, a fin de que éste último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

El numeral 40 de nuestro Máximo Ordenamiento determina, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de nuestra Constitución.

La naturaleza de Estado Federal es explicitada en el siguiente artículo (41) en donde se preceptúa, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, según los términos que establecen, respectivamente, nuestra Carta Magna y las constituciones particulares de los Estados, que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.



Este último dispositivo crea la división de competencias entre las órdenes federal y local. Dicha división es desarrollada en el apartado denominado "de los Estados de la Federación y del Distrito Federal", que corresponde al Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN DE MÉXICO
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CO
CONSTITUCIONALES Y DE A
CONSTITUCIONALES

En ese título, el numeral 115 en concordancia con los artículos 40 y 41 citados, permite observar: 1. Las entidades federativas son instancias decisorias supremas dentro de su competencia. 2. Las entidades federativas se dan libremente su propia constitución en la que organizan su estructura de



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0797

161

SUP-OP-7/2009.

gobierno, pero sin contravenir el Pacto Federal. 3. Existe una clara división de competencias entre la Federación y las entidades federativas.

Por lo que hace al punto tres debe tenerse en cuenta la disposición del artículo 124 Constitucional, al preceptuar contundentemente que las facultades que no están **expresamente** concedidas por nuestra Carta Magna a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Al respecto debe mencionarse, que ésta es una regla rígida para la distribución de competencias, en donde se exige que las facultades asignadas a la federación deben estar previstas expresamente.

EDERACIÓN
IE LA NACIÓN
ACUERDOS
PROVERSA
CIONES DE
AD

Al aplicar la regla anterior a lo dispuesto en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución, obtenemos lo siguiente.

Los Poderes de los Estados se organizaron conforme a la Constitución de cada uno de ellos, y estas constituciones y las leyes que de ellas deriven, en materia electoral, garantizarán que:

A) Las autoridades locales que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

B) Las autoridades administrativas electorales competentes (locales) pueden convenir con el Instituto Federal Electoral, que éste último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

En este contexto es evidente, que la organización de las elecciones locales se otorga, originariamente, a la autoridad creada en cada entidad federativa para tal fin, y se le otorgan facultades para realizar convenios con el Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establecen lineamientos a los que deben sujetarse esos convenios, como por ejemplo en lo atinente a:

- La existencia de una votación determinada por parte del máximo órgano de la Autoridad Administrativa Electoral Local, que apruebe el convenio y los términos que habrán de regirlo, a efecto de hacer la solicitud correspondiente al Instituto Federal Electoral.
- Los alcances del convenio; ya que no se determina si la organización del proceso electoral local, es total o parcial, verbigracia, si el Instituto Federal Electoral asumirá todas las funciones del órgano local o sólo una parte de ellas, y por



INSTITUTO FEDERAL DE LA
REMA CORTE DE JUSTICIA
ESTADO GENERAL DE
BOLETO TRIANTE DE CON
SECCIONES Y DE AC
NACIONAL



tanto, si en este último caso, realizará actividades sólo de coadyuvante en la medida del propio convenio.

De esta manera, si no existen lineamientos como los mencionados en la Constitución; en atención a la facultad originaria de la autoridad administrativa electoral para organizar las elecciones locales, y ante el principio de que lo no previsto expresamente a la federación se reserva a los Estados; es posible deducir, que son las Constituciones Locales y las leyes que de ella deriven (particularmente las electorales) las que determinarán los aspectos en comento.

Estas premisas son la base para emitir **opinión** respecto a los argumentos producidos en el agravio noveno.

Se estima infundado la afirmación atinente a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, únicamente, la solicitud de la Autoridad Administrativa Electoral Local al Instituto Federal Electoral, para la realización del convenio, sin pedir mayores requisitos.

Como se ha visto, nuestro Máximo Ordenamiento no establece lineamientos específicos a los que deben sujetarse la aprobación y términos del convenio, lo único que prevé es, precisamente, que la autoridad local lo solicite a la federal.

En tales condiciones es evidente, que ante la falta de los lineamientos de mérito, las facultades para regular lo

DERECHO
LA NACIÓN
GUERRAS
ROVERSLA
IONES DE
D.

correspondiente a la aprobación y a los alcances del convenio en comento, se entienden reservadas, en el caso, al Estado de Coahuila y habrán de preverse en su Constitución y en la normatividad electoral respectivas.

De ahí que se considere apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el contenido del artículo 105 del Código Electoral del Estado de Coahuila, en donde se conceden atribuciones al Consejo General, para autorizar con las dos terceras partes de sus integrantes, las bases del convenio con el Instituto Federal Electoral, para que éste pueda coadyuvar en la organización de las elecciones locales.

Se llega a esta conclusión en virtud de la regla consistente en que lo que no está expresamente otorgado a la federación debe entenderse reservada a los Estados.

En el mismo contexto, se considera infundada la alegación concerniente a que la Autoridad Administrativa Electoral Local y el Instituto Federal Electoral tienen plena libertad en la función electoral y, particularmente, para llevar a cabo el convenio mencionado, sin más sujeción que la observancia de la legalidad, y sin que para ello las decisiones deban pasar por el tamiz de otros poderes del Estado (en la especie el Congreso Estatal) para su aprobación o sugerencia.

Las alegaciones se califican de infundadas, dado que como se ha visto, la facultad para determinar las condiciones en



SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN
OFICINA DE LA FISCALÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
Y MEDIOS DE CONTROL
Y MEDIOS DE ACCIÓN
INDEPENDENCIA



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0799

165

SUP-OP-7/2009.

que han de elaborarse convenios como los analizados, corresponden a cada una de las entidades federativas de la República Mexicana, ello ante la inexistencia de lineamientos específicos en nuestra Carta Magna.

De ahí que, si en la especie, el Código Electoral del Estado de Coahuila en su artículo 105, fracción V, determina requisitos y características, respectivamente, para la aprobación del convenio y la precisión de sus alcances; entonces, por estar sujeta al principio de legalidad, es claro que la autoridad administrativa electoral debe sujetarse a esas disposiciones.

No es óbice, que para la aprobación correspondiente se exija una mayoría calificada consistente en las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Local.

Esto, porque la exigencia de contar con una mayoría calificada (dos terceras partes de los integrantes del Consejo General) para que puedan celebrar el convenio con el Instituto Federal Electoral, se sustenta en la facultad del legislador local, para determinar el tipo de mayoría requerida, a efecto de celebrar ese tipo de convenios.

En efecto, dado que en el artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se exige o establece en forma expresa una mayoría determinada de Consejeros Electorales, para que los

institutos electorales locales puedan celebrar ese tipo de convenios, ello debe entenderse reservado al legislador estatal, en el caso, del Estado de Coahuila

Así, en ejercicio de tal atribución, el congreso local determinó establecer una mayoría calificada de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (dos terceras partes) para la celebración de convenios como los estudiados; además, no se afecta la potestad que tiene dicho Instituto para celebrarlos, sino que se está salvaguardando que sea una decisión colegiada con el mayor consenso posible, por tratarse de una determinación de singular trascendencia e importancia para el Estado de Coahuila.

No pasa inadvertido que originariamente corresponde al Instituto Electoral de Coahuila el encargarse de la organización de los procesos electorales estatales; por lo que lo ordinario es que dicho Instituto cumpla con dicha facultad, en tanto que lo extraordinario sería que ante una determinada situación acontecida en la entidad federativa, la autoridad administrativa electoral estatal determine celebrar un convenio con el Instituto Federal Electoral, a fin de que este último se encargue de organizar los respectivos procesos electorales en Coahuila.



SECRETARÍA GENERAL DE LA
FEDERACIÓN DE JUDICIALES
SECRETARÍA GENERAL DE
LA FISCALÍA FEDERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0800

167

SUP-OP-7/2009.

Por lo tanto, de presentarse dicha situación, el legislador estatal ha establecido una mayoría calificada para celebrar ese tipo de convenios.

Así mismo se considera que no se afecta la autonomía e independencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, con motivo de la exigencia de una mayoría calificada de los integrantes de su Consejo General, para celebrar el convenio, porque en todo momento los únicos que están facultados para tomar una decisión de tal naturaleza son precisamente los Consejeros Electorales del referido instituto electoral local. En efecto, en ningún momento se establece la posibilidad de que participe algún otro poder o autoridad para adoptar una decisión así, ya que no se prevé la participación de ningún otro ente jurídico (*verbigracia*, el congreso local o el poder ejecutivo) sino que, por lo contrario, la decisión se debe tomar al interior del propio Instituto Electoral Local.

DERACIA
LA NACION
ACUERDO
ROVERSA
IONES DE
AD

Por último se considera que es infundado también el argumento en donde se alega que es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte conducente del artículo 105, fracción V, del Código Electoral del Estado de Coahuila, que establece la coadyuvancia del Instituto Federal Electoral, únicamente, en cuestiones de logística y de operación electoral.

Se expresa que tal disposición contraviene los artículos 41, párrafo segundo, Base V y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d) de la Carta Magna, porque, según el demandante, el contenido de estos preceptos da lugar a determinar que, por virtud del convenio, el Instituto Federal Electoral se encargará de la organización de los procesos electorales, y ello no puede limitarse a cuestiones de carácter logístico y operacional.

Tales argumentos deben calificarse de infundados, dado que como se ha explicado, las disposiciones precitadas no prevén expresamente que el Instituto Federal Electoral, con motivo del convenio que celebre con el Instituto Electoral Local, deba hacerse cargo de toda la organización del proceso electoral en la entidad federativa de que se trate.

Se ha evidenciado que ante la inexistencia del otorgamiento expreso de estas facultades al Instituto Federal Electoral, son las entidades federativas, las que a partir de sus constituciones y de las leyes que de ella deriven, específicamente las electorales, habrán de regular el alcance de la participación de dicho Instituto Federal Electoral.

Es así que la normatividad local, en materia electoral, será la que ha de disponer, el alcance del convenio entre el Instituto Electoral Local y el Instituto Federal Electoral, es decir, si habrá de hacerse cargo de toda la organización del proceso electoral, o bien, sólo de determinadas actividades.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0801

169

SUP-OP-7/2009.

De esta manera, la parte conducente del contenido del artículo 105, fracción V, del Código Electoral del Estado de Coahuila, se entiende apegado a las reglas y principios antes apuntados, dado que en esta disposición, el legislador ordinario local, en uso de sus facultades, determina que por virtud del convenio de mérito, el Instituto Federal Electoral sólo realizará actividades de coadyuvancia en cuestiones de logística y de operación electoral.

DÉCIMO. FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL.

En el décimo concepto de invalidez el Partido de la Revolución Democrática impugna el artículo 170 del Código Electoral Local, cuyo texto es el siguiente:

SECRETARÍA
DE LA ADMINISTRACIÓN
ACUERDO
PROCESO
CONVENCIONAL
VOT

"Artículo 170.- Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el tercer domingo de octubre del año que corresponda, para elegir:

I. Integrantes del Poder Legislativo, cada cuatro años.

II. Miembros de los Ayuntamientos del Estado, cada cuatro años.

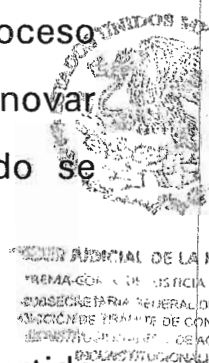
Cuando la elección de Gobernador coincida con las elecciones de Diputados y Ayuntamiento, se celebrarán el día que corresponda a la de Gobernador, señalada en el artículo anterior."

Como se ve de la transcripción realizada el referido precepto prevé que las elecciones ordinarias, excepto la de gobernador en el Estado de Coahuila, deberán celebrarse el tercer domingo de octubre.

El promovente aduce que es inconstitucional el referido precepto en virtud de que existe un desfase en la fecha en que se establece para la organización de la elección en el estado, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la elección necesariamente deberá ser en julio.

Opinión. En principio y sólo por cuanto hace al proceso electoral de este año en el Estado de Coahuila, para renovar integrantes de ayuntamientos, el precepto cuestionado se estima constitucional, por las siguientes razones.

La Sala Superior considera que no asiste la razón al partido actor en cuanto al argumento relativo a que el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a que las entidades federativas celebren su jornada electoral el primer domingo de julio del año que corresponda y, sin embargo, en la reforma que se impugna, dicho mandamiento no se lleva a cabo.





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0802

171

SUP-OP-7/2009.

Lo anterior, en virtud de que en consideración de este órgano jurisdiccional, los actores parten de una premisa incorrecta, a partir de la cual pretenden sostener su afirmación.

Esto, en atención a que el precepto constitucional que invocan, es del tenor siguiente:

"Artículo 116...

IV. Las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta disposición.

..."

A juicio de esta Sala, el análisis del contenido del precepto recién trasunto, permite advertir lo siguiente:

En principio, que el dispositivo jurídico de mérito contiene dos premisas, de las cuales, la primera constituye la regla general, y la segunda, su excepción.

En efecto, el artículo en comento contiene una primera previsión que, a su vez, está compuesta por dos

obligaciones que se confieren a las entidades federativas, a saber:

A). Que las elecciones de gobernadores, miembros de las legislaturas locales, e integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y

B). Que la jornada comicial tenga verificativo el primer domingo de julio del año que corresponda.

Por otro lado, el artículo de mérito contiene, en su parte final, la excepción a la regla a la que se ha hecho referencia, puesto que exime de cumplir dicha disposición a aquellos Estados en los que, aun cuando haya elecciones en el año de los comicios federales, éstas no sean coincidentes con la fecha en la que tendrá verificativo la jornada electoral federal.



Así las cosas, en principio, es posible concluir que el precepto jurídico de referencia no plantea únicamente una obligación para los Estados, como pretende argumentar el accionante, sino que prevé una excepción a la misma.

Ahora bien, precisado lo anterior, en concepto de la Sala Superior, conviene reparar en el hecho de que el análisis de la primera parte del artículo aludido, esto es, la que



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0803

173

SUP-OP-7/2009.

contiene la obligación referida, permite sostener que el constituyente vinculó a los Estados a observar lo siguiente:

- i) Que los procesos comiciales estatales, con independencia de los cargos que serán elegidos, deben llevarse a cabo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;
- ii) Que el Gobernador y los integrantes de la legislación estatal y los ayuntamientos serán electos en la misma jornada comicial, y
- iii) Que la jornada de mérito deberá efectuarse el primer domingo de julio del año de la elección.



EDER
DE LA MAJ
ACUERDO
TROMBIA
CIONES
DAV

En este contexto, es evidente que la Constitución prevé, como supuesto ordinario, que las entidades cumplan con los aspectos anteriormente señalados y, por tanto, es válido concluir que cualquier previsión o actuación contraria a la norma, implicaría un vicio de inconstitucionalidad.

No obstante, se considera, el texto del precepto en cita no debe entenderse de manera independiente o aislada de la parte final del mismo que, como se mencionó con anterioridad, contiene una excepción al dispositivo jurídico de referencia.

Esto, porque en opinión de esta instancia jurisdiccional, la previsión de la excepción a que se ha aludido, no hace más que reconocer la libertad con la que cuentan las entidades federativas para establecer las reglas específicas que estimen convenientes para llevar a cabo sus procesos electorales, siempre y cuando observen y respeten la norma constitucional federal y los principios que consagra.

Ahora bien, sobre el particular, conviene tener presente que con base en la libertad referida, la Constitución contempla lo siguiente:

Que las entidades federativas realicen la jornada comicial en fecha distinta a la que se establezca para llevar a cabo la elección federal, y

Que, incluso, los comicios locales no tendrían que celebrarse en una sola fecha distinta a la de la jornada electoral federal (esto es, que las elecciones en la entidad se celebren el mismo día, pero que éste fuera distinto del de la jornada federal), sino que cada proceso de renovación de los cargos estatales elegidos mediante sufragio ciudadano podría tener verificativo en días distintos, y que todas las fechas fueran discordantes con la jornada federal, sin que tal situación representara algún obstáculo para ser consideradas válidas, desde un punto de vista constitucional.





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0804

175

SUP-OP-7/2009.

Así las cosas, en opinión de los integrantes de este órgano jurisdiccional, lo incorrecto del planteamiento del actor, radica en el hecho de que no reparan en la excepción constitucionalmente establecida, a la que se ha hecho referencia, y por tanto, parten de la premisa incorrecta de que el artículo constitucional de mérito dispone, únicamente, la obligación de que las jornadas electivas estatales, se celebren el mismo día que la federal.

En ese sentido, debe señalarse que el decreto impugnado actualiza precisamente la hipótesis de excepción que se ha mencionado, por lo que en este orden de ideas, se considera que la disposición controvertida se ajusta debidamente a lo dispuesto por la norma constitucional federal.

En este orden de cosas, se estima que al haber proceso electoral en el Estado de Coahuila para elegir integrantes de ayuntamientos, opera la excepción a que se ha hecho referencia; sin embargo, no pasa inadvertido para esta Sala Superior en los años subsecuentes sí podría presentarse una problemática en la realización de futuros procesos electorales.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el propio precepto impugnado prevé que las elecciones ordinarias de integrantes del poder legislativo, así como de miembros de los

ayuntamientos, se llevarán a cabo cada cuatro años, en tanto que la de gobernador se realizará el primer domingo del mes de julio del año que corresponda, cada seis años de acuerdo con el artículo 169 del Código Electoral Local.

Por otro lado, cabe hacer referencia al artículo segundo transitorio del decreto 341, relacionado con la Ley de Medios de Impugnación, publicado el dos de agosto de dos mil siete en el periódico oficial del Estado de Coahuila, que dice lo siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO.- El periodo de cuatro años para los integrantes del Congreso del Estado será aplicable a partir de la renovación a realizarse en el año 2013. En consecuencia y por única ocasión, los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 2008, correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura, durarán en su encargo el período comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 2011, correspondiente a la Quincuagésima Novena Legislatura, entrarán en su encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el día 31 de diciembre de 2013.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMERA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL

Como se ve de la anterior transcripción, el periodo de cuatro años para los integrantes del Congreso del Estado, será aplicable a partir del año dos mil trece; por lo que los diputados electos en dos mil ocho terminarán su encargo el treinta y uno de diciembre de dos mil once. Además, se prevé que los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año de dos mil once culminarán su encargo en dos mil trece.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0805

177

SUP-OP-7/2009.

Por otro lado, debe tomarse en cuenta el contenido del artículo sexto transitorio del decreto de seis de noviembre de dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece siguiente por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el siguiente:

"Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso comicial respectivo."

Lo anterior evidencia que por cuanto hace al proceso electoral local que se lleva a cabo este año en el Estado de Coahuila, el señalamiento sobre la fecha de la jornada electoral (tercer domingo de octubre) no es contraventora de la constitución; sin embargo, para posteriores procesos electorales sí podría resultar contraventora la norma impugnada, porque para tales procesos ya no se estaría en el caso de excepción antes referido.

DÉCIMO PRIMERO. FINANCIAMIENTO POR RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS.

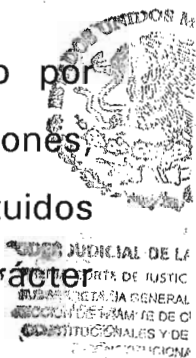
En el décimo primer concepto de invalidez, el partido hace valer la inconstitucionalidad del artículo 50, fracción VI, del Código Electoral Local, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 50.- El financiamiento que no tenga el carácter de público, se sujetará a lo siguiente:

...

VI. El financiamiento por rendimientos financieros se compondrá de las inversiones, fondos o fideicomisos de los partidos políticos, constituidos con recursos propios o con las aportaciones antes referidas."

Como se ve del precepto el financiamiento privado por rendimientos financieros se compondrá de las inversiones, fondos o fideicomisos de los partidos políticos, constituidos con recursos propios o con las aportaciones de carácter privado, previstas en el propio precepto.



Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática aduce la inconstitucionalidad de la fracción en comento sobre la base de que la obtención de rendimientos de inversiones especulativas es inconstitucional pues el dinero público es de cuenta corriente que se otorga para un gasto específico y no para ser sujeto de inversiones.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0806

179

SUP-OP-7/2009.

Así mismo afirma que el referido precepto es violatorio de los numerales 1; 6, 7, 9, 14, 16, 41, fracciones III, apartado B, 76, 99, 116 fracción IV, incisos b) y g), y 123, 124 y 133 de la Constitución General de la República.

Opinión. Esta Sala Superior considera que dicho motivo de inconformidad es infundado, y por tanto el precepto impugnado es constitucional, en virtud de las siguientes consideraciones.

El sistema de financiamiento de los partidos políticos en el Estado mexicano, distingue dos tipos de financiamiento, el público y el privado, cuya naturaleza, en cada caso es distinta. El financiamiento público tiene como propósito garantizar un nivel de recursos suficiente entre los distintos partidos políticos con el objeto de que la competencia electoral sea equitativa. La Constitución General, prevé que este debe prevalecer sobre los recursos de origen privado.

En este sentido, como lo apunta el partido actor, el manejo de los recursos públicos por parte de los partidos políticos debe estar limitado al uso previsto en las normas aplicables, esto es, el sostenimiento de sus actividades ordinarias, especiales, y en proceso electoral, a actividades tendientes a la obtención del voto.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que los rendimientos obtenidos por los partidos políticos a

EDICIÓN
DE LA NÚMERO
EACUACIÓN
INTERVENIEN
CIONES
IDAD

través de la modalidad de instrumentos financieros, son parte del financiamiento privado, cuya naturaleza es distinta al financiamiento público, en tanto que permite que los partidos políticos se alleguen de recursos por medios distintos a los que provee el Estado.

La Constitución Política, en sus artículos 41, párrafo segundo, base II, y 116, segundo párrafo, base cuarta, inciso h), dispone que en las leyes secundarias se deban establecer los límites y modalidades de financiamiento privado. En este sentido, la legislación electoral del Estado de Coahuila prevé, al igual que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la modalidad de financiamiento por rendimientos derivados de inversiones en fondos, cuentas y fideicomisos.

En este sentido, no es dable considerar que los ingresos cuestionados participen de la naturaleza del financiamiento público porque los fondos no los aportó el Estado, en ninguna de sus modalidades.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPLENTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL DE
SECCION DE TRAMITE DE CONTI
CONSTITUCIONALES Y DE ACC
INCONSTITUCIONALIDAD

No obstante lo anterior, tanto la legislación federal como la local, establecen límites a dicha modalidad de financiamiento privado, en tanto que los partidos políticos no son entidades lucrativas, además de que existe la posibilidad de que los recursos que se utilicen en dichas inversiones tengan un origen público.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0807

181

SUP-OP-7/2009.

Por ello se establece, que el financiamiento de origen privado no debe prevalecer sobre el público; que dichas inversiones deben ser notificadas al órgano electoral; que deben ser manejadas a través de operaciones bancarias y financieras en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año; que no están protegidas por el secreto bancario o fiduciario por lo que el instituto local electoral está en aptitud de requerir y verificar el correcto manejo de dichos fondos y, por último, que los rendimientos obtenidos deben destinarse a los objetivos del partido político en cuestión.

Por lo tanto, de esta forma se reduce el riesgo de especulación y posible pérdida de los recursos de los partidos políticos, aun cuando el origen de los recursos que se utilicen para tales fines provenga de financiamiento público.

RECEBIDO
V. NÚM.
ERODE
VERSA
IES TAF

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila tiene la facultad de reglamentar medidas para evitar que los partidos políticos se excedan y pongan en riesgo el patrimonio que les es atribuido por el Estado como entidades de interés público, lo cual otorgaría certeza a los partidos respecto de los instrumentos financieros que pueden adquirir por tratarse de valores que por su naturaleza implican que los partidos lucren y sometan a la especulación financiera los recursos obtenidos por el financiamiento público o privado,

que deben destinarse invariablemente para los fines que la Constitución Federal y la Ley Electoral local determinan.

Por tanto, el artículo 50, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Coahuila está apegado a las normas constitucionales; en consecuencia, esta Sala Superior estima que dicho motivo de inconformidad es infundado.

DÉCIMO SEGUNDO. IMPEDIMENTO PARA SER ELECTOR.

En el décimo segundo concepto de invalidez, el partido actor impugna de inconstitucional el artículo 7, fracción I, del Código Electoral Local, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 7.- Son impedimentos para ser elector:

I. Estar sujeto a proceso penal por delito doloso sancionado con pena privativa de la libertad. El impedimento surtirá efecto a partir de que se dicte el auto de formal prisión.

II. Estar cumpliendo sentencia condenatoria que imponga pena privativa de la libertad.

III. Estar sujeto a interdicción judicial o encontrarse interno en establecimientos, públicos o privados, para enfermos mentales o toxicómanos.

IV. No tener un modo honesto de vivir, declarado por la autoridad judicial competente.

V. Haber sido condenado, por sentencia ejecutoria, a la suspensión o pérdida de sus derechos políticos, por todo el tiempo que dure su sanción.

VI. Los demás que señale este Código.

Los derechos políticos del ciudadano se pierden cuando los supuestos enunciados en las fracciones de este



PODER JUDICIAL DEL
PRIMERA COPIA DE JUSTI
SECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y O
BREVETADO



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

0808

183

SUP-OP-7/2009.

artículo y el Título Séptimo de este Código, pudieran concretarse de manera definitiva, según resolución de la autoridad competente. Así como, en el caso de que el sujeto cayera en los supuestos de alguno de los delitos electorales enunciados en el Código Penal Federal y el vigente en el Estado."

Como se ve de la transcripción, el precepto impugnado establece como impedimento para ser elector, que se esté sujeto a un proceso penal por delito doloso sancionado con pena privativa de la libertad, impedimento que surtirá efectos a partir de que se dicte el auto de formal prisión.

Por su parte el actor aduce, que tal previsión viola los artículos 14, 16, 17, 20, 21, 22, 34, 35, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la correcta interpretación del artículo 38 de la propia constitución, en virtud de que se violenta el principio nacional e internacional de que no se puede privar de sus derechos político-electorales a los ciudadanos, sin que exista sentencia ejecutoriada al respecto.

Por tanto, el actor afirma que el simple auto de formal prisión no puede ser conculcatorio de esos derechos políticos-electorales del ciudadano y al considerarlo así el precepto cuestionado infringe los tratados internacionales, pues es contrario a una interpretación armónica y racional de la constitución con los tratados y a la presunción de inocencia.

OPINIÓN. Al respecto, la Sala Superior estima no debe emitir opinión en relación con el planteamiento sobre el que versan los conceptos de invalidez antes sintetizados, porque al cuestionarse aspectos sobre los cuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado, a saber: respecto de que los derechos políticos deben declararse suspendidos desde el dictado del auto de formal prisión, tal como se advierte del contenido de la jurisprudencia 1ª./J.171/2007, derivada de la contradicción de tesis 29/2007-PS, publicada en la página 215 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien el citado precepto constitucional dispone expresa y categóricamente que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden a causa de un proceso criminal por delito que merezca pena corporal y que el plazo relativo se contará desde la fecha de la emisión del auto de formal prisión; y, por su parte, el artículo 46 del Código Penal Federal señala que la referida suspensión se impondrá como pena en la sentencia que culmine el proceso respectivo, que comenzará a computarse desde que cause ejecutoria y durará todo el tiempo de la condena -lo cual es acorde con la fracción III del propio artículo 38 constitucional-, ello no significa que la suspensión de los derechos políticos establecida en la Carta Magna haya sido objeto de una ampliación de garantías por parte del legislador ordinario en el código sustantivo de la materia, ni que exista contradicción o conflicto de normas, ya que se trata de dos etapas procesales diferentes. Consecuentemente, deben declararse suspendidos los derechos políticos del



SEMANARIO JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN DE TRÁFICO DE COPIAS
CONSTITUCIONALES Y DE AFILIACIÓN
INCONSTITUCIONAL

ciudadano desde el dictado del auto de formal prisión por un delito que merezca pena corporal, en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal; máxime que al no contener éste prerrogativas sino una restricción de ellas, no es válido afirmar que el mencionado artículo 46 amplíe derechos del inculcado. Lo anterior es así, porque no debe confundirse la suspensión que se concretiza con la emisión de dicho auto con las diversas suspensiones que como pena prevé el numeral 46 aludido como consecuencia de la sentencia condenatoria que al efecto se dicte, entre las que se encuentra la de derechos políticos, pues mientras la primera tiene efectos temporales, es decir, sólo durante el proceso penal, los de la segunda son definitivos y se verifican durante el tiempo de extinción de la pena corporal impuesta.

Contradicción de tesis 29/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo y Sexto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 31 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espinosa Rangel.

Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete.

DEPARTAMENTO
DE LA FISCALÍA
DE LOS RECURSOS
FEDERALES
DE LOS RECURSOS
FEDERALES

En virtud de lo expuesto, se concluye:

PRIMERO. En opinión de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son inconstitucionales los artículos 27, fracción III, párrafo 9, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción V, 12, 25, 28, fracción III, 49, fracción II, inciso b), párrafo segundo, 50 fracción IV, 63, 71, fracciones III y IV, 78, 81, fracciones III y IV, 82, 85, fracción V, 99, 105, fracciones IV y XXI, 115, fracción XVI, 135 y 190, párrafo

segundo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO. Esta Sala Superior estima que los artículos 2º transitorio y 33 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 5º., fracción IV, 10, fracciones V, VI y XII, 11, fracción I, 13, 16, 50, fracciones VI y VII, 60, 80, párrafo segundo, 87, 97, 98, 103, 104, 105, fracciones V y XXIII, 107, 111, 114, 115, fracción XVI, 135, 160, fracción XXII, 170, 173, 188, 197, fracción III, 213 y 324 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, no adolecen de la inconstitucionalidad alegada.

TERCERO. En virtud de que, en algunos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre el tema o en otros, no se relacionan con la materia electoral o no cabe la opinión respectiva, esta Sala Superior no emite opinión respecto de los numerales 7, fracción I, 10, fracción XII, 11, fracción IV, incisos a) y b), 57, 59, 72, 73, 105, fracción XLIII, 161, 162, 217, 314, 323 y 334 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La presente opinión la emiten por unanimidad los magistrados integrantes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del magistrado Manuel González Oropeza, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

187

SUP-OP-7/2009.

México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil nueve.

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

MAGISTRADO

SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR

MAGISTRADO

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CERTIFICACIÓN

El suscrito, Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 201, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de las instrucciones de la Magistrada Marfa del Carmen Alanis Figueroa, Presidenta de este órgano jurisdiccional, **CERTIFICA:** Que el folio precedente con número ciento ochenta y siete, forma parte de la opinión emitida en esta fecha por esta Sala Superior, en el expediente **SUP-OP-7/2009**, en respuesta a la consulta formulada por el Ministro José Fernando Franco González Salas.-DOY FE.-----

México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil nueve. -----

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CO
NSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

P R E S I D E N C I A

OF.

TEPJF-P-179/09

ASUNTO:

Opinión relativa a la acción
de inconstitucionalidad
52/2009.

México, D. F., a 28 de julio de 2009.

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

En respuesta a la petición formulada en proveído de veinte del mes y año en curso, dictado en la Acción de Inconstitucionalidad 52/2009, promovida por el Procurador General de la República, notificado mediante oficio 4377, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veintiuno siguiente, anexo le envío la opinión emitida por este órgano jurisdiccional, en el expediente **SUP-OP-11/2009.**



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIA
S Y DE ACCIONES
INCONSTITUCIONALES

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E
MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA

Recibí en mi domicilio particular, a las veintitrés horas con cuarenta minutos, del veintinueve de julio de dos mil nueve el Oficio 7EPSE-P-179/09 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2009 con un anexo original en diez folios recibí promociones de término conforme al artículo 7 de la Ley Reglamentaria. Conste. - *M. J. Muñoz*

031880

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2009 JUL 29 AM 10 04

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibí de un enviado de la Secretaría General de acuerdos de esta H. corte

con:

un anexo en original en (10) folios

VICTOR JUAN RUIZ BARRERA



DER. JUD
SUPREMA COI
SECRET
SECCION DE
INSTITUC

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SUBSRIA. GRAL. ACOS.

2009 JUL 29 AM 10 12

SECCION DE TRAMITE DE
CONTROVERSIA CONS. Y
DE ACCIONES DE INCONS.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

EXPEDIENTE: SUP-OP-11/2009.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
52/2009.

PROMOVENTE: PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LOS MINISTROS SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECESO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 68, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS
JURISDICCIONALES DE LOS TRIBUNALES
JURISDICCIONALES DE LOS TRIBUNALES
JURISDICCIONALES DE LOS TRIBUNALES

El Procurador General de la República promovió Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto número 257, aprobado por la LX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante el cual fue reformado el artículo 17, apartado B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el cuál fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el diecinueve de junio de dos mil nueve, cuya aprobación y expedición se atribuye, respectivamente, al Congreso del Estado de Aguascalientes y al Gobernador del Estado de Aguascalientes.

En atención a la solicitud formulada por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso, mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil nueve, dictado en el expediente de la acción de inconstitucionalidad de mérito, a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le fue solicitada la emisión de la opinión respectiva.

En consecuencia, en los términos del artículo 68, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de la fracciones I y II, del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Superior emite opinión en relación a los conceptos de invalidez planteados por El C. Procurador General de la República, relativos a la inconstitucionalidad del artículo 17, apartado B, párrafo duodécimo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en virtud de que: **1.** El mencionado precepto constitucional resulta violatorio del artículo 116, fracción III, párrafo segundo y fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **2.** Que el precepto constitucional de mérito resulta violatorio del artículo 16 constitucional, pues dada la naturaleza del acto legislativo se realiza una motivación y fundamentación *sui géneris*, pues se prevé que el tribunal electoral local será un órgano jurisdiccional temporal, y que en tiempo no electoral el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado será competente para conocer y resolver los recursos de la materia. **3.** Por último, la mencionada representación social federal considera que el precepto constitucional de mérito transgrede el artículo 133 de la norma fundamental, que establece la supremacía constitucional que impone un orden jurídico creado y organizado por la norma fundamental, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus funciones.



En síntesis, los conceptos de invalidez formulados por el Procurador General de la República los hace consistir en lo siguiente:



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

1. La representación de la Procuraduría General de la República señala como concepto de invalidez que el artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes contraviene lo establecido en el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, y en la fracción IV, incisos b) y c) del pacto federal, al establecer que el Tribunal Estatal Electoral es el órgano jurisdiccional temporal, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y en tiempos no electorales será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien conozca y resuelva los recursos de la materia, lo cual resulta conculcatorio de los principios de autonomía e independencia de la autoridad electoral, pues al existir la posibilidad de la realización de actos electorales fuera de los procesos ordinarios, debe existir un órgano jurisdiccional electoral con pleno funcionamiento, pues la autonomía e independencia se obtienen por la permanencia en su ejercicio; además de violentar los principios rectores que deben regir en materia electoral, en especial el de certeza, ya que provocará en los actores electorales incertidumbre pues no tendrán la seguridad de qué autoridad es la encargada de resolver los conflictos electorales que se susciten en la entidad; además de que el trabajo debe realizarse de manera profesional, continua y permanente, a fin de adquirir un cierto grado de especialización y al ser un tribunal temporal trae consigo la inestabilidad en el desempeño de los magistrados y redundando en el ejercicio de la actividad jurisdiccional; y respecto a los principios de objetividad e imparcialidad, éstos se ven trastocados en la medida en que las determinaciones se originen favoritismos o preferencias que impidan que los asuntos se resuelvan de manera objetiva y

conforme a derecho. Concluye señalando que los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, e independencia, deben observarse en todo momento por las autoridades jurisdiccionales en materia electoral. De igual manera, el legislador debe velar por el respeto a la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional electoral lo que no se logra con la interrupción del ejercicio de la autoridad electoral en los períodos no electorales, por lo que considera violentados los principios de profesionalización y permanencia, así como los principios de certeza objetividad e imparcialidad.

2. Señala la representación de la Procuraduría General de la República que el artículo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes resulta violatorio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley Fundamental, en virtud de que dada la naturaleza del acto legislativo, su motivación y fundamentación se realiza de una manera *sui géneris*, respecto de la generalidad de los actos de la autoridad, pues como lo ha señalado prevé que el Tribunal Electoral será órgano jurisdiccional temporal y que en tiempo no electoral el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado será competente para conocer y resolver de los recursos en esa materia.

3. La Representación del Ministerio Público Federal considera que el precepto de la Constitución local del Estado de Aguascalientes a estudio, resulta violatorio de lo establecido en el artículo 133 de la Ley Fundamental que establece el principio de supremacía constitucional, por el que se impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la propia norma suprema, al que deben sujetarse todos los



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

órganos del estado y todas la autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

A efecto de emitir la opinión correspondiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en el ejercicio de la función estatal electoral del ámbito federal, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.



EL DE LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
NITE DE CONTROVERSIA
LES Y DE ACCIONES DE
INSTITUCIONALES

En ese mismo sentido el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, prevé que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán, que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, y las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de la autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Al respecto el artículo 17, apartado B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala lo siguiente:

[...]
Artículo 17.- ...

A. ...

B. El Sistema Estatal Electoral se regirá por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad y objetividad.

La organización de las elecciones en el Estado, así como del fomento del modelo de vida democrático, de participación y representación es una función pública que se ejerce a través de un organismo público autónomo denominado, Instituto Estatal Electoral.

El Instituto Estatal Electoral, como ente de interés público, será autoridad en la materia, actuará con independencia en sus decisiones, funcionamiento y profesionalismo en su desempeño; estará dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrá como autoridad máxima de gobierno un Consejo General.

El Consejo General será electo por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado y estará integrado por cinco Consejeros Electorales, de los cuales uno será presidente y cuatro vocales, durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por un nuevo período.

Por cada Consejero se elegirá un suplente.

El cargo de Consejero Electoral, no será compatible con cargo de servidor público alguno, así como con cualquier cargo por el que se reciba pago o retribución alguna con recursos públicos.

La Ley de la materia determinará la organización del Instituto, sus facultades y estructura orgánica, debiendo contar el Instituto con un órgano auxiliar para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y asociaciones políticas estatales; una Contraloría especializada en la fiscalización de los recursos y programas del Instituto, ambos dotados con autonomía técnica y de gestión, así como la estructura del servicio profesional electoral necesaria para el cumplimiento de sus labores. El titular de la Contraloría, será electo mediante el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado.

Las elecciones ordinarias deberán celebrarse, el primer domingo de julio del año de la elección.

Los partidos políticos nacionales acreditados en el Estado, serán entidades de interés público, podrán y serán los únicos facultados para participar en las elecciones estatales, distritales y municipales; estando asimismo facultados para participar en la vida política del Estado, para lo cual tendrán acceso a financiamiento público y apoyos gubernamentales en términos de lo estipulado en la Ley de la materia.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

Los partidos políticos nacionales acreditados en el Estado tendrán como fin el promover la participación del pueblo en la vida democrática, en la representación estatal y el acceso al poder público.

La ley de la materia regulará los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos nacionales acreditados en el Estado, al igual que los respectivos de los ciudadanos y la población en general para la participación en la vida política del Estado y el acceso al poder. Se establecerán en dicha norma los procedimientos, requisitos y normas para el desarrollo de las elecciones ordinarias y extraordinarias estatales y municipales, así como la participación y procedimientos jurisdiccionales y medios de impugnación que darán certeza al Sistema Estatal Electoral y sus procesos.



El Tribunal Estatal Electoral, será un órgano jurisdiccional, temporal, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. Estará integrado por tres Magistrados, adscritos al Poder Judicial del Estado. En tiempo no electoral será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien conozca y resuelva de los recursos. El Tribunal Estatal Electoral, tendrá entre sus facultades, resolver los medios de impugnación y nulidades que la ley electoral establezca, así como declarar la validez de las elecciones.

La norma penal del Estado, determinará los delitos en materia electoral, así como las sanciones aplicables.

Los partidos políticos, en ningún momento podrán contratar o adquirir por si o por terceras personas, tiempos o espacios en cualquier modalidad de radio, televisión o prensa escrita o electrónica.

El Sistema Estatal Electoral, estará regulado por la Ley de la materia, y deberá garantizar en todo momento los siguientes derechos y obligaciones:

a) Los partidos políticos se constituirán sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, afiliación corporativa, quienes tendrán el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular;

b) Las autoridades electorales sólo intervendrán en la vida interna de los partidos en términos de lo establecido en el Código Electoral;

c) Establecer las fórmulas y criterios para la asignación de financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos, así

como los topes y límites del financiamiento que estos pueden recibir de sus simpatizantes;

d) Fijar criterios y límites para establecer las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas;

e) Establecer las bases y procedimientos para la liquidación y destino de los bienes y recursos de los partidos políticos que pierdan su registro;

f) Establecer las bases para los procedimientos relativos al control, vigilancia y sanción, respecto del origen y destino de los recursos de los partidos políticos; y

g) Establecer las bases y normas para las precampañas y campañas de los partidos políticos, así como las conductas prohibidas y las sanciones por incumplimiento y el respectivo sistema de medios de impugnación.

C. ...
[...]



PODER JUDICIAL
PLENO CORTE C
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONSTITUCIONAL
MEXICO

El citado artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, prevé que el Tribunal Estatal Electoral será un órgano jurisdiccional temporal, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. Estará integrado por tres magistrados adscritos al Poder Judicial del Estado. En tiempo no electoral, será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien conozca y resuelva los recursos. El Tribunal Estatal Electoral tendrá entre sus facultades, resolver los medios de impugnación y nulidades que la ley electoral establezca; así como declarar la validez de las elecciones.

Del contenido de dicho precepto constitucional local, se advierte que se adiciona la mención que en los recesos entre los procesos electorales ordinarios, será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien conozca y resuelva los



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

recursos que se interpongan que se interpongan en materia político electoral.

En opinión de esta Sala Superior, el citado párrafo décimo segundo, apartado B, del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en análisis, es conforme con el artículo 41, base V, en su último párrafo y 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien adiciona un supuesto no contemplado en los preceptos federales mencionados no es ajeno, ni mucho menos viola los principios que rigen la normativa electoral jurisdiccional, de conformidad con lo siguiente:



Para el análisis de las leyes electorales es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos previstos en los artículos 41 y 116 constitucionales, teniendo como punto de partida los criterios de validez que orientan el examen de este tipo de normas, pues para verificar el apego de las leyes secundarias a la norma fundamental, además de atender a lo que ésta textualmente establece, también deben observarse los postulados esenciales que contienen, los cuales sirven de guía para cimentar ulteriores razonamientos que integran un orden jurídico armónico, el cual guardará uniformidad y consistencia en relación con los fines que persigue el sistema electoral mexicano.

En esas condiciones, se considera que el precepto de la Constitución de Aguascalientes motivo de análisis, no violenta

los principios de autonomía funcional e independencia del órgano jurisdiccional.

Al respecto, es necesario señalar, que un tribunal goza de autonomía orgánica y funcional toda vez que se trata de una entidad separada y diversa que actúa sin subordinación institucional alguna y que se diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo, en especial de la autoridad electoral administrativa y de los partidos, organizaciones políticas y demás partes que acuden a su potestad para recibir justicia.

Los tribunales electorales gozan de autonomía normativa en razón de que el derecho les otorga la atribución de dictar por sí mismos las normas generales que reglamentan su funcionamiento interno; asimismo, gozan de autonomía administrativa en razón de que cuentan con la atribución exclusiva de manejar su patrimonio libremente, determinando programas y prioridades en los que deberán aplicar los recursos humanos, materiales y financieros que forman parte de su presupuesto.

De igual manera, en el desempeño de la función los tribunales electorales, cuentan con independencia, en virtud de que no existe ligadura alguna con ningún superior que permite el desempeño de la función con imparcialidad para desempeñar las atribuciones encomendadas dentro de los límites establecidos en la ley. Como garantía a favor de los gobernados se establecen el régimen de responsabilidades aplicables a los miembros de los tribunales electorales.





TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

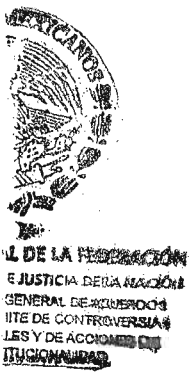
SUP-OP-11/2009

En el caso que nos ocupa, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el Título Primero Bis, Capítulo VIII, denominado del Tribunal Electoral, que comprende de los artículos, 33 A, al 33 G; se encuentran señaladas entre otras cuestiones, la competencia del tribunal y las obligaciones de los Magistrados que lo integran.

De igual manera, del artículo 1º, del citado ordenamiento legal se desprende que el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; por lo que el hecho de que durante el tiempo en que no existe proceso electoral ordinario, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es el órgano competente para resolver los recursos que se llegaren a interponer, por lo que de modo alguno se menoscaba la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional electoral, tal y como se apreciará más adelante.

En relación a que el texto del precepto constitucional motivo de análisis es violatorio de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, en opinión de esta Sala Superior dicho precepto no resulta contrario a los postulados o principios que rigen las actividades jurisdiccionales electorales.

De esta forma se considera que no se contraviene el principio de certeza, en virtud de que en los términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el Estado de Aguascalientes en todo tiempo existirá un tribunal, previamente establecido y con competencia para resolver los recursos que interpongan los interesados; por lo que desde otro punto de



vista, el acceso a la justicia electoral está en todo tiempo plenamente garantizada.

De igual manera, con dicho precepto no se violenta el principio de legalidad toda vez que las decisiones del órgano jurisdiccional electoral, tanto en el año de proceso electoral como durante el receso, deben cumplir con la garantía de la debida motivación y fundamentación, principio rector del ejercicio de la función jurisdiccional electoral a cargo de los tribunales electorales. Paralelamente a esta atribución, siempre existirá en beneficio de los actores electorales la posibilidad de contar con un principio general de impugnación para combatir resoluciones ilegales, no apegadas a derecho o inconstitucionales.



Por otra parte, el precepto en comento tampoco se considera contrario al principio de objetividad, en virtud de que los actos de la jurisdicción electoral se materializan a través de actas o constancias judiciales que permiten que los procedimientos electorales se basen en el conocimiento seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y con independencia del sentir, o de cualquier interés de los integrantes de dicho órgano, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, para considerar las actuaciones procesales como auténticas atendiendo las peculiaridades, requisitos o circunstancias que concurren en los mismos.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

De esta forma no se considera que el párrafo décimo segundo del inciso B, del artículo motivo de impugnación transgreda el principio referido, en tanto que el mismo determina cuáles serán los órganos competentes para conocer y resolver los medios de impugnación en materia electoral, en atención a si se está o no en tiempo electoral, lo cual en modo alguno afecta el ejercicio de la labor jurisdiccional.



1. DE LA FEDERACIÓN
E JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
ITE DE CONTRAVENSIÓN
LES Y DE ACCIONES DE
INDEFINIDAS

Igualmente, no se afecta la imparcialidad, en virtud de que el precepto en comento en modo alguno afecta la igualdad de oportunidades procesales para las partes, ya sea en la realización de actos procesales, en la presentación y aportación de medios probatorios y en la posibilidad de recurrir las determinaciones que al efecto se emitan.

Por lo anterior, esta Sala Superior considera que dicho precepto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, no contraviene lo establecido a los artículos 41 y 116 de la Constitución General de la República.

En consecuencia, tampoco resulta contrario a la Constitución el hecho de que supuestamente los magistrados electorales al funcionar únicamente en el año de proceso electoral, no lleguen a contar con el principio de temporalidad necesario para dar permanencia a los juzgadores electorales.

Al respecto, debe decirse que de acuerdo con el texto del mencionado artículo 17, apartado B en su décimo segundo

párrafo se desprende que los tres magistrados electorales están adscritos al poder judicial del estado.

Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 33 D de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se tiene que los magistrados electorales serán nombrados en la misma forma establecida para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

De esta forma, es factible concluir que tanto en el año del proceso electoral, como durante los recesos, los magistrados que en su momento desempeñaron funciones exclusivamente contencioso electorales seguirán conociendo de los recursos en esa materia que formulen los interesados, a través de la competencia del pleno del Supremo Tribunal con que cuenta para resolver los asuntos en cuestión.

Al respecto, debe señalarse que la permanencia de los magistrados del Tribunal no es una exigencia contemplada en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal; por lo que queda a las legislaturas regular la forma y tiempo en que debe funcionar el Tribunal Electoral, siempre y cuando garantice plenamente que la legalidad y regularidad de los actos de las autoridades electorales administrativas locales, pueden ser revisados por la autoridad jurisdiccional local, con competencia expresa para ello, tal y como acontece en la especie, al facultarse al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes para que conozca y resuelva los medios impugnativos que se encuentran previstos en la ley y que se interpongan fuera del proceso electoral local. Ello es así, en





TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

base al artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial del estado.

Por lo que respecta al principio de profesionalismo el que aduce el accionante se violenta con el precepto constitucional a estudio, esta Sala Superior no emite opinión alguna, el virtud de existir ya, un pronunciamiento al respecto de parte de ese alto Tribunal identificado en la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, T. XXIX, Tesis P.III/2009, Pág. 1128, bajo el rubro: "PROFESIONALIZACIÓN. NO CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR EN MATERIA ELECTORAL LOCAL, AL NO ESTAR PREVISTO COMO TAL POR EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".



Es conveniente señalar que, como sucede en gran parte de las entidades federativas, la permanencia en el cargo de magistrados electorales hace deseable la profesionalización del órgano jurisdiccional; sin embargo dicho principio tal y como se señala no constituye un principio rector de la función jurisdiccional electoral.

Por otro lado, no resulta violatorio de precepto constitucional alguno el hecho de que en las constituciones de las entidades federativas existan disposiciones que regulan aspectos no reservados a la Federación, en virtud del principio de federalismo el cual está consagrado en el artículo 124 constitucional.

El citado precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las entidades federativas se encuentran en libertad legislativa para incrementar aquellos principios fundamentales que la Constitución General de la República considera imperativos, siempre que con ello no se vulneren o se restrinjan en mayor medida que lo establecido en la ley fundamental.

Así, es posible que el legislador local dentro del ámbito de libertad que tiene para establecer los requisitos y características de operación jurisdiccional de los tribunales y juzgados en la entidad, establezcan las características de competencia que en su concepto garantizan de la mejor manera los principios de autonomía, imparcialidad e independencia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales electorales.

Cabe señalar, que el federalismo es consustancial a la estructura del estado mexicano, lo cual significa fundamentalmente que los estados que integran la unión son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero sobre la base de que esta unión en una federación se sustenta en los principios establecidos en la Constitución General de la República, tales como el principio de supremacía constitucional y los derechos fundamentales incluidos los previstos en los tratados internacionales de los que México es parte.

Por tanto, no existe obligación expresa para las legislaturas locales de seguir las reglas específicas para la reglamentación



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

de tales principios generales, sino lo que se exige es que dichos principios estén debidamente garantizados.

En consecuencia, la obligación prevista en los artículos 41 y 116 constitucionales, se reduce a prever que en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral a cargo de las autoridades jurisdiccionales electorales serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, pero no existe disposición constitucional que imponga a las legislaturas locales la obligación de establecer determinadas reglas de permanencia o duración de los juzgadores en determinada materia, de tal manera que para las legislaturas locales basta que cumplan y se ajusten a los principios del artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea suficiente su adopción dentro del sistema electoral local.

Al respecto, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro:

"AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO b) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

El artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar que la función electoral a cargo de las autoridades electorales se rija por los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Ahora bien, de la interpretación gramatical y teleológica de ese precepto, se advierte que el alcance de la citada norma constitucional, no sólo consiste en que el legislador local deba establecer en sus normas todas las disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales se rijan por dichos principios, sino que también comprende la conformación orgánica de esos entes, dado que los principios antes mencionados fueron establecidos atendiendo a la

naturaleza y características que deben de poseer las autoridades electorales en cuanto que son responsables del desarrollo de procesos electorales confiables y transparentes. Así, debe estimarse que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia a que alude la Constitución Federal, tienen como finalidad tanto la salvaguarda del actuar de las autoridades electorales estatales, como la conformación de las mismas.

Semanario Judicial de la Federación, Pleno; Novena Época, página 617, Tomo XVII, febrero de 2003: P/J 1/2003.

Debe señalarse que los alcances de la justicia federal en su vertiente de poder revisor, debe limitarse a la noción misma del federalismo. Dentro de un sistema federal cada entidad federativa dicta sus propios actos de gobierno y los habitantes resuelven sus controversias dentro de su espacio geográfico. El federalismo es un sistema de gobierno que se basa en el respeto a las diferencias específicas de cada entidad federativa, ya que su facultad de legislar en su ámbito territorial es el fundamento de su soberanía.

Partiendo de ese principio que define al federalismo, esta Sala Superior considera que en el ejercicio de sus facultades soberanas del Estado de Aguascalientes, a través del Congreso de la entidad, determinó la temporalidad del Tribunal Estatal Electoral para resolver los recursos derivados de su proceso electoral ordinario y precisó que durante los recesos, será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia quien resuelva las impugnaciones electorales respectivas.

De esta forma al considerarse que el artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, al no contrariar los diversos artículo 41y 116 de la Constitución General de la República.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR

SUP-OP-11/2009

Por lo que respecta a la contravención al artículo 133 constitucional, esta Sala Superior considera que su análisis excede a la materia electoral, por tratarse de un tema de derecho en general o del derecho constitución al en particular.

Por lo expuesto, se emite la siguiente opinión:

ÚNICO. Es constitucional el artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

La presente opinión se emite por **mayoría** de votos de los magistrados que integran esta Sala Superior, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera y con la ausencia de los magistrados José Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veintiocho de julio de dos mil nueve.

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

**CONSTANCIO CARRASCO
DAZA**

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

SUP-OP-11/2009

MAGISTRADO



MANUEL GONZÁLEZ
OROPEZA

MAGISTRADO



SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL
SALA SUPERIOR
SECRETARÍA
GENERAL DE ACUERDOS



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION

P R E S I D E N C I A

OF.

TEPJF-P-180/09

ASUNTO:

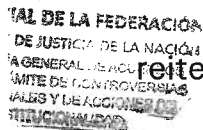
Opinión relativa a la acción
de inconstitucionalidad
53/2009.

México, D. F., a 28 de julio de 2009.

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E



En respuesta a la petición formulada en proveído de veintiuno del mes y año en curso, dictado en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2009, promovida por el Partido del Trabajo, notificado mediante oficio 4382, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, anexo le envío la opinión emitida por este órgano jurisdiccional, en el expediente **SUP-OP-12/2009.**



Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E
MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

c.c.p. Expediente.
Pp.

Recibir en mi domicilio particular siendo las veintitrés horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil nueve el Oficio TEPJF-P-180/09 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la acción de inconstitucionalidad 53/2009 con un anexo en diez folios útiles en original. La licenciada María Osmeña Kuri Murad, autorizada por escrito para promover de término conforme al artículo 7 de la ley reglamentaria. - Conste. - *M. Osmeña Kuri Murad*

031879

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2009 JUL 29 AM 10 01

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibí de un enviado de la Secretaría general
de acuerdos de esta H. corte

con

un anexo en original en (10) folios



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SECRETARIA
SECCION DE TI
COMUNICACION
EXTERNA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SUBSRIA. GRAL. ACOS.

2009 JUL 29 AM 10 11

SECCION DE TRAMITE DE
CONTROVERSIA CONS. Y
DE ACCIONES DE INCONS.

VICTOR JUAN SUZ BARCELOS

EXPEDIENTE: SUP-OP-12/2009

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
53/2009

PROMOVENTE: PARTIDO DEL
TRABAJO



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA GENERAL DE ACUERDOS
Y DE CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL

OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RESPUESTA
A LA CONSULTA FORMULADA POR LOS MINISTROS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SERGIO
SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO Y SERGIO A. VALLS
HERNÁNDEZ, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 68, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY
REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO
105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

El objeto de la opinión prevista en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad de órgano especializado en la materia, proporcione a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los mayores elementos posibles para el examen y solución de las cuestiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad de que se trate.

De la lectura del escrito de demanda que dio origen a la acción de inconstitucionalidad al rubro citada, se advierte que

el partido accionante impugna los decretos 257 y 259, por los que se reforman diversas disposiciones de la legislación del Estado de Aguascalientes, publicados el diecinueve de junio del presente año en el *Periódico Oficial del Estado*.

A continuación, procede analizar los conceptos de invalidez formulados por el accionante.

I. PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ

PLANTEAMIENTO. El demandante sostiene que el párrafo cuarto del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es contrario a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El texto de la norma controvertida, es del tenor siguiente:

Artículo 17.- En el estado la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos se verificarán por medio de elecciones democráticas directas, a través del ejercicio del sufragio universal y secreto.

A. ...

B. El Sistema Estatal Electoral se regirá por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad y objetividad.

...

El Consejo General será electo por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado y estará integrado por cinco Consejeros Electorales, de los cuales uno será presidente y cuatro vocales, durarán en su

SUP-OP-12/2009

encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por un nuevo período.

...

(La parte subrayada se realizó por esta Sala Superior, para destacar la norma cuestionada por el demandante).

La inconstitucionalidad alegada por el incoante, descansa en los siguientes argumentos:

- Que el tres de marzo de dos mil seis, fueron nombrados los **siete** consejeros que integran actualmente el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 del código electoral estatal.
- Que en la fracción I, del artículo 68, del código comicial local, se disponía que los **siete** consejeros durarían en su encargo cuatro años, y **podían ser reelectos** por una sola ocasión.
- Que en el artículo 17, apartado B, párrafo cuarto, de la Constitución de Aguascalientes, se establece que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de dicha entidad federativa se integrará por **cinco** consejeros electorales.
- Que el precepto impugnado es violatorio del principio de irretroactividad de la ley, así como de la autonomía e independencia del órgano electoral, ya que dicho precepto entró en vigor el veinte de junio de dos mil nueve y tiene efectos sobre la designación y derechos adquiridos por los actuales consejeros desde dos mil seis. En



concreto, indica el actor, porque al reducirse de siete a cinco el número de integrantes del citado Consejo General, ello provoca que se prive a dos consejeros de la posibilidad de reelegirse, generando con ello, alega, incertidumbre e inseguridad jurídica en su patrimonio de derechos.

- Para respaldar su aseveración, el accionante expone argumentos doctrinales, así como criterios jurisprudenciales que, a su parecer, son aplicables al caso, relacionados principalmente con la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los componentes de la norma.

Como se aprecia, el actor sostiene que el artículo 17, apartado B, párrafo cuarto, de la Constitución de Aguascalientes, es inconstitucional, bajo el argumento central de que el derecho de los **siete** consejeros que actualmente integran el órgano electoral de aspirar a ser reelectos en sus funciones, constituye un derecho adquirido y, por tanto, la entrada en vigor del precepto constitucional local impugnado, que reduce de siete a cinco el número de integrantes de ese órgano, hace nugatorio el derecho de reelección de dos consejeros, en contravención al principio de irretroactividad de las leyes, previsto en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución General.

OPINIÓN. Esta Sala Superior, opuestamente a lo alegado por el demandante, considera que la disposición impugnada **no es inconstitucional**, atento a las siguientes consideraciones y fundamentos de derecho.



SUP-OP-12/2009

En primer término, es menester traer a colación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Esta Sala Superior ha sostenido que esta disposición constitucional contempla la garantía de irretroactividad de la ley o principio *tempus regit actum*, que regula la validez temporal de las normas, su vigencia, entendida como la condición que les permite producir consecuencias jurídicas; contiene por tanto, una de las reglas esenciales para el funcionamiento del orden jurídico.



Esa validez temporal se encuentra estrechamente vinculada con los principios de legalidad y seguridad jurídicas, porque determina la operatividad del sistema legal, así como los efectos jurídicos que producen las normas, esto es, la certeza de que las normas futuras no modificarán situaciones legales surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado; en otras palabras, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. A su vez, la capacidad de operar de la norma se fundamenta en el principio de certeza jurídica.

La retroactividad se encuentra vinculada con la operación en el tiempo de una norma, implica la eficacia de las disposiciones sobre consecuencias jurídicas derivadas de hechos acaecidos previamente a su expedición, es decir, el precepto se aplica a hechos consumados durante la vigencia de una disposición anterior o a situaciones jurídicas que se encuentran aún en proceso de verificación, en relación con los efectos producidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

En ese orden de ideas, el precepto constitucional contempla la regla general de que las normas jurídicas son expedidas con el objeto de regular situaciones presentes y futuras, lo que conlleva la prohibición de aplicarse a situaciones previas al inicio de su vigencia, **cuando ello depare una afectación al gobernado.**



En nuestro orden jurídico, ha cobrado especial relevancia la teoría de los derechos adquiridos, según la cual una ley es retroactiva cuando desconoce derechos adquiridos conforme a una ley anterior, **no lo es si implica el desconocimiento de meras expectativas de derecho.** Los derechos adquiridos se definen como aquellos que han entrado al dominio del gobernado, forman parte de él y no pueden ser privados de ellos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 80/2008 y 88/2008 con sus acumuladas 90/2008 y 91/2008, sostuvo que el derecho adquirido es aquel que implica la

SUP-OP-12/2009

introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico, **en tanto la expectativa de derecho** la concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; en otras palabras, **el derecho adquirido constituye una realidad y la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha materializado.**

En este mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que lleva por rubro y texto¹:



DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.

El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

De conformidad con tal distinción, se determina que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que se regirán siempre por la ley al amparo de la cual nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando haya cesado su

¹ Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear.

vigencia al haber sido substituida por otra norma; **en contraparte, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.**

Por tanto, la ley no debe perturbar situaciones jurídicas consumadas o constituidas con anterioridad (de las que derivan derechos y obligaciones), ni las consecuencias que de estas últimas se sigan produciendo en los casos en que el desconocimiento o afectación de esas consecuencias impliquen necesariamente la alteración de la propia situación jurídica o del hecho adquisitivo del derecho, puesto que **únicamente podría influir en las consecuencias aún no producidas (*facta pendentia*)** cuando con ello no se destruya o afecte en perjuicio del interesado la situación jurídica consumada generadora de su derecho.

En el presente caso, se alega la contravención al principio de irretroactividad, por la supuesta vulneración al derecho de dos consejeros de reelegirse en sus cargos. Sin embargo, la reelección no se trata de un derecho adquirido susceptible de ser tutelado bajo el principio indicado, sino de una expectativa de derecho.

En efecto, el primero de octubre de dos mil tres, se publicó en el *Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes*, el Decreto 111, por el que se aprobó el Código Electoral de esa entidad federativa. En el artículo 68, fracción I, se dispuso lo siguiente:

SUP-OP-12/2009

Artículo 68.- El Consejo es el órgano superior de dirección electoral en el Estado residirá en la ciudad de Aguascalientes y funcionará de manera permanente.

El Consejo se integrará por:

I. **Siete Consejeros Ciudadanos** que durarán en su encargo cuatro años, y **podrán ser reelectos** por una sola ocasión.

Por su parte, en el párrafo cuarto del apartado B del artículo 17 de la Constitución de Aguascalientes (norma impugnada), se dispone lo siguiente:



El Consejo General será electo por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado y estará integrado por **cinco Consejeros Electorales**, de los cuales uno será presidente y cuatro vocales, durarán en su encargo tres años y **podrán ser reelectos** hasta por un nuevo período.

Como se aprecia, en ambos preceptos se establece la posibilidad de que los miembros del Consejo se reelijan en una ocasión en su cargo, pero el hecho de que se reduzca el número de consejeros de siete a cinco, no significa que a dos de ellos se les aplique retroactivamente en su perjuicio la última de las disposiciones citadas.

Lo anterior es así, porque de acuerdo con la narrativa de ambos preceptos, se advierte que la reelección no es un derecho adquirido inherente al cargo de consejero, sino únicamente una **posibilidad** de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado, lo que se corrobora con el empleo de la frase "podrán ser

reelectos”.

Esto es, la reelección se prevé como una situación **contingente** (que puede o no suceder) y, por tanto, que no constituye un derecho que ha entrado al dominio de los consejeros, ni mucho menos que ha sido materializado.

En este sentido, la reelección supone un nuevo procedimiento de elección, en el que se deben observar las reglas y mecanismos conducentes y en el que confluyen diversos factores que inciden con la elección o rechazo del consejero que pretende ocupar el cargo por un período igual.


Tan es así, que el accionante en su escrito de demanda señala: *“... la cual establecía en su artículo 68, el derecho de los mismos a **aspirar** a ser reelectos por una ocasión...” “...hace inminente que dos integrantes del actual Consejo General no tengan la **posibilidad** de reelegirse...”²*

En este orden de ideas, es claro que la norma impugnada no tiene efectos retroactivos en perjuicio de los actuales integrantes del Consejo General del instituto local electoral, en tanto que se trata de una **expectativa de derecho**, que **no afecta hechos consumados ni derechos adquiridos o constituidos** durante la vigencia de una disposición anterior, ni situaciones jurídicas concretas en proceso de verificación o actualización, en relación con los efectos producidos antes de la entrada en vigor de la nueva disposición.

² Página 19, párrafo primero, del escrito inicial de demanda.

SUP-OP-12/2009

II. SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ



Planteamiento: El Partido del Trabajo aduce que la disposición del artículo 95, párrafo sexto, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, que establece como límite máximo a la retribución diaria de los consejeros electorales, la cantidad equivalente a veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado, vulnera el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución, porque restringe la autonomía financiera del órgano electoral, pues esa decisión corresponde al propio órgano.

Opinión: La disposición que establece un límite máximo a la retribución diaria de los consejeros electorales no es violatoria del principio de autonomía de las autoridades electorales locales, pues se trata de un mecanismo jurídico de control del gasto público, establecido en forma previa en una norma general, que no se traduce en el condicionamiento o disminución del monto de los ingresos del órgano, ni restringe en forma sustancial la capacidad de decisión de la autoridad, respecto de la administración de los recursos que le son asignados.

Esta opinión se sustenta en los razonamientos siguientes.

La doctrina define a los órganos constitucionales autónomos como aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la

Constitución, que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado³.

En la misma dirección, ese H. Tribunal ha considerado que la actuación de los órganos constitucionales autónomos no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (poderes legislativo, ejecutivo y judicial), y que a dichos órganos se han encargado funciones estatales específicas, con el fin de lograr una mayor especialización, agilización, control y transparencia en la atención de necesidades torales del Estado y la sociedad en general⁴.

Tal como sostiene el accionante, de acuerdo con el criterio de ese H. Suprema Corte los órganos constitucionales autónomos deben observar las siguientes características: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) **contar con autonomía e independencia funcional y financiera, y** d) atender funciones conyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la incorporación de los órganos autónomos no es privativa

³ García Roca, Javier F, *El conflicto entre órganos constitucionales*. Madrid, Tecnos, 1987, pp. 22 y 23; Cárdenas Jaime, Carlos Pérez Vázquez y Miguel Carbonell, "Presente y futuro de la autonomía del Instituto Federal Electoral", en *Administración y Financiamiento de las Elecciones en el Umbral del Siglo XXI*, Tomo II, UNAM, México, 1999, páginas 467 y siguientes.

⁴ Tesis P./J. 12/2008, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVII, febrero de 2008, página 1870 bajo el rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS".



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

SUP-OP-12/2009

del órgano reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece la norma fundamental, los Estados de la República pueden, según sus necesidades, crear órganos autónomos estatales, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal⁵.

En este contexto, el artículo 17, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes dispone que el Instituto Estatal Electoral es un ente de interés público, autoridad en la materia, que actúa con independencia en sus decisiones, funcionamiento y profesionalismo en su desempeño; está dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene como autoridad máxima de gobierno y consejo general.



AL DE LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LA GENERALIDAD DE ACUERDOS
AM. CONTROVERSIA
MALES

El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes es entonces, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, un órgano constitucional autónomo que, conforme con las características precisadas anteriormente, debe contar con autonomía financiera.

El concepto de autonomía se refiere, por un lado, a una realidad relacional, pues un ente es autónomo respecto de otro ente u órgano y, por otro lado, a un **poder limitado**, ya que autonomía no equivale a soberanía.

⁵ Tesis P./J. 13/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1870, con el rubro: "ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS REGÍMENES LOCALES".

La concepción de autonomía admite diferentes grados, tanto en la integración, estructura, organización y autarquía financiera.

En ese sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución, que exige que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones locales gocen de autonomía en su funcionamiento, confiere al legislador ordinario un margen de actuación para precisar tal autonomía. Por supuesto, siempre que se respete un núcleo esencial, que permita que el órgano electoral local pueda considerarse realmente autónomo.

La delimitación de la autonomía de la autoridad administrativa electoral no impide el establecimiento de ciertos controles de la actividad del órgano, de carácter jurídico, por ejemplo, la previsión de medios de impugnación cuya resolución puede producir la modificación o revocación de los actos de la autoridad electoral, tal como dispone el artículo 41, base VI, de la Constitución.

En lo referente a la fijación y administración de los recursos que le son asignados, la actuación de la autoridad electoral es susceptible de control, dado que tales recursos forman parte del gasto público, que se rige, entre otros, por los principios constitucionales de máxima publicidad (artículo 6º, fracción I, *in fine*) y fiscalización (artículo 79).

El examen del sistema normativo vigente en el Estado de Aguascalientes evidencia que la autonomía financiera del



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

SUP-OP-12/2009

Instituto Estatal Electoral no es absoluta, sino que está sujeta a límites.

Así, conforme con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presupuesto del Instituto Estatal Electoral es examinado, discutido y aprobado anualmente por el Congreso del Estado.

Asimismo, en términos semejantes a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27, fracción V, de la Constitución del Estado, dispone que el Instituto Estatal Electoral debe presentar su cuenta pública al Congreso del Estado, a más tardar el veintiocho de febrero de cada año.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS
Y DE CONTROVERSIAS
JURISDICCIÓN ELECTORAL
JURISDICCIÓN DE ACCIONES DE
NULIDAD

Según el precepto citado, la cuenta pública es revisada por el Congreso, a través de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, denominada Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, que fiscaliza los Estados de la gestión financiera, comprueba que los ingresos estén de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado, que las partidas gastadas estén justificadas y que sean conforme con las normas de ejecución de los presupuestos de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Incluso, la entidad fiscalizadora puede emitir recomendaciones al Instituto Estatal Electoral para la mejora en el cumplimiento de los objetivos de los programas.

De igual forma, atento a lo dispuesto en el artículo 27 A de la

SUP-OP-12/2009

Constitución local, el Instituto Estatal Electoral está obligado a proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual fiscaliza los ingresos y Egresos, la recaudación, la administración, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos que ejerce dicho Instituto.

Lo anterior pone de manifiesto que la autonomía financiera del Instituto Estatal Electoral no es absoluta, pues está sujeta a controles de carácter jurídico, establecidos normativamente, con el fin de verificar la regularidad del ejercicio del gasto público.

Pues bien, la disposición prevista en el artículo 95, párrafo sexto, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes establece también un mecanismo de control, enderezado a observar lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución General de la República, que prescribe que la remuneración recibida por los servidores públicos por el desempeño de su función debe ser **adecuada**.

Al respecto, la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución, aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, y pendiente de publicación, agrega a la disposición actualmente vigente, entre otras cosas, que la remuneración de los servidores públicos de los organismos autónomos debe ser proporcional a sus responsabilidades, y que las legislaturas de los Estados han de expedir las leyes para hacer efectivo el contenido de ese

SUP-OP-12/2009

artículo.

De ahí que se estime que el establecimiento de un tope máximo a la retribución económica de los consejeros electorales persigue la observancia del precepto constitucional citado, y no vulnera la autonomía financiera del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, pues sólo establece un límite a la capacidad de decisión del órgano electoral, en apenas un aspecto de la administración de los recursos que le son asignados.



EL DE LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
ART. DE CONFLICTOS
NACIONALES DE ACCIONES
DE INICIATIVA

Esta conclusión se robustece si se tiene en cuenta que la cantidad de veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado es un límite máximo que permite que la autoridad electoral, en ejercicio de su autonomía, determine el salario de los consejeros, siempre que no rebase ese margen.

Los razonamientos anteriores conducen a esta Sala Superior a opinar que el artículo 95, párrafo sexto, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, no vulnera la autonomía financiera del Instituto Estatal Electoral y, en ese aspecto, es constitucional.

Por otra parte, cabe señalar que la norma cuestionada tampoco es violatoria de la independencia de los integrantes del órgano, en tanto que el establecimiento de un tope a la retribución económica en los términos indicados, en modo alguno implica subordinación de aquéllos respecto de algún otro órgano, dependencia o nivel de gobierno, que pudiera vulnerar, trastocar o atar su desempeño, en detrimento de su

imparcialidad para desempeñar las funciones previstas en la ley.

Aunado a lo anterior, esta Sala Superior opina que no se advierte elemento alguno para considerar que el tope previsto por el legislador de Aguascalientes a la retribución económica, no sea una remuneración suficiente y razonable para garantizar la independencia de los integrantes del órgano y asegurar la autonomía de éste último, por lo cual puede considerarse como digna y proporcional con las necesidades y responsabilidades inherentes al cargo de Consejero del Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa.

Lo anterior, toda vez que el tope a la retribución económica precisada, es de veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado, lo que equivale a treinta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos mensuales (\$34,287), calculado sobre la base de cincuenta y un pesos con noventa y cinco centavos, que es el salario mínimo del área geográfica "C", a la que pertenece el Estado de Aguascalientes, según la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2009", publicada el veintitrés de diciembre de dos mil ocho, en el *Diario Oficial de la Federación*.

La presente opinión se emite por unanimidad de votos de los magistrados que integran esta Sala Superior por lo que hace al PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ, con la ausencia de los



SUP-OP-12/2009

Magistrados José Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López, y por mayoría de cuatro votos, con el voto disidente del Magistrado Flavio Galván Rivera, por lo que hace al SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ.

México, Distrito Federal, a veintiocho de julio de dos mil nueve.

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO


MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

MAGISTRADO

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SIN TEXTO





TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

P R E S I D E N C I A

OF.

TEPJF-P-189/09

TR

ASUNTO:

Opinión relativa a la acción
de inconstitucionalidad
55/2009.

México, D. F., a 17 de agosto de 2009.

JUAN N. SILVA MEZA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

En respuesta a la petición formulada en proveído de cinco del mes y año en curso, dictado en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2009, promovida por Convergencia, notificado mediante oficio 4471, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el diez siguiente, anexo le envío la opinión emitida por este órgano jurisdiccional, en el expediente **SUP-OP-13/2009.**

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E
MAGISTRADA PRESIDENTA


MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

c.c.p. Expediente.
Mecs

2009 AGO 17 PM 5 51
SECCION DE TRAMITE DE
CONTRIVERSIAS CONS.Y
DE ACCIONES DE INCONS.

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y COMERCIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

033688





TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

EXPEDIENTE: SUP-OP-13/2009

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
55/2009

PROMOVENTE: CONVERGENCIA,
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

**OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, JUAN N. SILVA MEZA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 68, PÁRRAFO SEGUNDO, DE
LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL
ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

El objeto de la opinión prevista en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad de órgano especializado en la materia, proporcione a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los elementos que le sean posibles para el examen y solución de las cuestiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad de que se trate.

De la lectura del escrito de demanda que origina la acción

de inconstitucionalidad citada, se advierte que el partido actor impugna los decretos 208 y 209, por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la misma entidad, publicados el tres de julio del dos mil nueve en el *Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán*.

A continuación, se analizan los conceptos de invalidez formulados por el actor.

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ.

PLANTEAMIENTO. En el concepto de invalidez primero, el partido Convergencia sostiene que el artículo 16, apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y el artículo 131 último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales son inconstitucionales, porque exigen requisitos mayores a los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116, fracción IV, inciso d), para la celebración de un convenio entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Yucatán, a efecto de que el primero se encargue, eventualmente, de la organización de las elecciones en dicha entidad federativa, pues lo condiciona a la aprobación de las dos terceras partes del órgano local.



Además, en concepto del accionante, ello trastocaría la autonomía del órgano encargado de organizar los comicios en la entidad, protegida por el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución, así como el inciso d) mencionado, porque obliga a dicho órgano local a seguir organizando las elecciones, sin ponderar un caso extremo.

OPINIÓN: En relación con el tema en controversia esta Sala Superior ya se ha pronunciado, en la opinión 04/2009, relacionada con la acción de inconstitucionalidad 10/2009, cuando se analizó una disposición similar a la cuestionada, de la legislación del Estado de Tamaulipas.

X En esencia, esta Sala ha considerado que la exigencia de contar con una mayoría calificada (tres cuartas partes) de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral [de una entidad], para que puedan celebrar el convenio con el Instituto Federal Electoral a efecto de que el segundo se encargue de la organización de los procesos electorales locales, encuentra sustento en que corresponde al legislador de las entidades federativas determinar el tipo de mayorías requeridas para ese tipo de convenios, así como para algunos otros temas que por su importancia y trascendencia requieran de un mayor consenso y respaldo institucional.

Lo anterior, porque el artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece en forma expresa una mayoría determinada de

Consejeros Electorales, para que los institutos electorales de las entidades federativas puedan celebrar ese tipo de convenios, ante lo cual, ello corresponde al ámbito de atribuciones del legislador estatal establecer la normatividad que el órgano competente de la organización de los comicios deberá observar en el ejercicio de sus funciones.

Además, al exigirse una mayoría calificada de los Consejeros del Instituto Electoral no se está afectando la potestad que tiene la autoridad administrativa electoral local de celebrar posibles convenios con el Instituto Federal Electoral, sino que se está salvaguardando que sea una decisión colegiada con el mayor consenso posible, por tratarse de una determinación de singular trascendencia e importancia para la entidad federativa correspondiente.

En atención a ello, si en el caso, lo cuestionado son las normas de la legislación de Yucatán, en las que el congreso local determinó, en ejercicio de sus atribuciones, establecer una mayoría calificada (tres cuartas partes) de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Yucatán, para la celebración de ese tipo de convenios, esta Sala Superior considera que tampoco sería contrario a la Constitución General de la República.

Asimismo, esta Sala Superior consideró en el precedente citado, que no se afecta la autonomía de los organismos encargados de la organización de las elecciones locales, con



motivo de la exigencia de una mayoría calificada de los integrantes del Consejo General para celebrar el convenio relativo a que el Instituto Federal Electoral sea el encargado de organizar las elecciones locales, porque en todo momento los únicos que están facultados para tomar una decisión de tal naturaleza son precisamente los Consejeros Electorales del referido instituto electoral local.

En efecto, en ningún momento se establece la posibilidad de que participe algún otro poder o autoridad para adoptar una decisión así, ya que no se prevé la participación de ningún otro ente jurídico (*vgr.*, el congreso local o el poder ejecutivo) sino que, por lo contrario, la decisión se debe tomar sólo al interior del propio instituto electoral local, de ahí que no exista afectación alguna a la autonomía de que debe gozar la autoridad administrativa electoral.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ.

PLANTEAMIENTO. El actor se queja de que el artículo Tercero Transitorio del Decreto impugnado de la legislación del Estado de Yucatán contraviene el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete.

Lo anterior, afirma el actor, porque la Constitución General

establece que los congresos locales tienen el deber de adecuar su legislación aplicable, a lo dispuesto en las nuevas previsiones constitucionales, que establece en particular que la jornada electoral deberá llevarse a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda, sin que ello fuera cumplido por el legislador de Yucatán, porque emitió un decreto de reforma, que en el artículo Tercero Transitorio del Decreto señala que los comicios locales que se llevarán a cabo en el dos mil diez, se desarrollarán conforme con lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, contenido en el Decreto 58 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que establece que la jornada electoral es el tercer domingo de mayo.

Esto es, en esencia, el actor se queja de que en el proceso electoral de renovación de diputados y ayuntamientos que tendrá lugar en dos mil diez, la jornada electoral se llevará a cabo el tercer domingo de mayo, en lugar de ajustarse a la reforma constitucional que exige que ello tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.

OPINIÓN. Esta Sala Superior considera que no le asiste razón al actor, porque la legislatura del Estado de Yucatán se apegó a la Constitución General de la República, en la medida de lo jurídica y materialmente posible, al emitir un decreto de reforma, en el que determinó que la jornada



electoral para elegir a los representantes populares, será el primer domingo de julio del año de la elección, salvo en el caso del proceso comicial de elección de diputados locales y ayuntamientos de dos mil diez, en el que, conforme con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto impugnado, la jornada electoral tendrá lugar el tercer domingo de mayo, pues en este último supuesto excepcional no existe la posibilidad jurídica de que la elección tenga lugar el primer domingo de julio, porque los diputados y miembros de ayuntamientos deben asumir su encargo el primero del mes, es decir, previamente, a la fecha en la que la Constitución dispone la elección, lo cual, conduce válidamente a establecer que el ajuste correspondiente surta efectos hasta el próximo proceso comicial de dos mil doce.

En efecto, el artículo 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las Constituciones y leyes de los estados garantizarán que la jornada comicial para elegir a los gobernadores, miembros de las legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos, tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda, y que aquellos Estados cuyos comicios se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la fecha de la jornada electoral, no estarán obligados.

En relación con ello, el artículo Sexto Transitorio de la

propia Constitución señala:

"Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en ese Decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso comicial respectivo."

Esto es, la norma que regula el tema en cuestión, establece:

- El deber de las cámaras de diputados de las entidades federativas de adecuar su legislación aplicable a la regulación Constitucional mencionada, a más tardar el catorce de noviembre de dos mil ocho.
- Una excepción jurídica a dicha exigencia para las legislaturas locales es que a la entrada en vigor del Decreto Constitucional (el catorce de noviembre de dos mil siete) hayan iniciado sus procesos electorales o estén por iniciarlos, en cuyo caso, los comicios se realizarán conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, y una vez terminado el proceso



electoral deberán realizar las adecuaciones correspondientes en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso comicial respectivo.

Lo anterior, en el entendido de que la observancia de dicha norma constitucional, debe ser entendida como una directriz cuyo cumplimiento se exige en la medida de lo jurídicamente posible, por formar parte de un sistema complejo, integrado con otras disposiciones que deben leerse en forma integral para definir su alcance último caso a caso.

Esto es, el mandato para celebrar los comicios en el primer domingo de julio del año que corresponda, más que una regla absoluta, es una directriz jurídica que exige su cumplimiento en la mayor medida y brevedad posibles, de manera que la obligación de las legislaturas estatales de adecuar la legislación electoral para que celebren sus elecciones, conforme con la nueva normatividad constitucional, debía realizarse lo antes posible, para cumplir con este ideal.

De este modo, el cumplimiento de tal disposición Constitucional, a su vez, está implícitamente sujeta a la posibilidad jurídica y material de su cumplimiento.

Ahora bien, para terminar de definir la norma del caso, se

tiene presente que la cámara de diputados de Yucatán debió adecuar su legislación aplicable a la regulación Constitucional mencionada, a más tardar el catorce de noviembre de dos mil ocho, porque al catorce de noviembre de dos mil siete, cuando se emitió la reforma Constitucional no se encontraba en curso un proceso electoral en esa entidad, ni estaba por iniciarse.

Independientemente de que la reforma local no se hizo en tiempo, lo cual no resulta ser materia de opinión, porque se trata de un tema que tiene que ver con el procedimiento y la oportunidad de la reforma, como se anticipó, esta Sala Superior considera que el partido actor carece de razón, respecto de que no existe justificación alguna para prorrogar la coincidencia de la jornada electoral local con la federal hasta julio del año dos mil doce.

El actor reconoce que el Decreto de Reforma emitido por la Cámara de Diputados del Estado de Yucatán establece en el artículo 16, apartado A, fracción I, que la jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, la elección de diputados y miembros de ayuntamientos que se llevará a cabo en dos mil diez, tendrá lugar el tercer domingo de mayo, conforme con el artículo Tercero Transitorio del Decreto de la Legislatura



Estatal¹, que, a su vez, remite al código electoral abrogado².

Esto es, en principio, la norma general producida para el nuevo código electoral local se apegá plenamente a la Constitución cuando fija que la fecha de la jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda.

En tanto, que la situación excepcional, dispuesta *únicamente* para el proceso de dos mil diez, que dispone que la elección se lleve a cabo en la tercera semana de mayo, también se apegó en la medida de lo posible al cumplimiento de la disposición constitucional, porque a la fecha de la entrada en vigor de la reforma Constitucional General (el catorce de noviembre de dos mil siete), los diputados y miembros de los ayuntamientos de la entidad, ya habían sido electos para un período que comprende del primero de julio de dos mil siete al treinta de junio del dos mil diez y, por tanto, en esa ocasión jurídicamente no podría celebrarse elecciones el primer domingo del mes de julio de ese último año, porque para el primero de julio previo ya tendrían que tomar posesión los nuevos

¹ "Subsisten todos los plazos y términos relativos al proceso electoral que contempla el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, contenido en el decreto 58 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 16 de diciembre de 1994; únicamente para organizar los comicios locales que se llevarán a cabo en el 2010."

² El artículo 146 del Código Electoral de Yucatán abrogado, establece que la elección será el tercer domingo de mayo.

representantes populares.

Esto es, si previamente a la reforma Constitucional, en el Estado de Yucatán se eligieron por tres años a los diputados y miembros de los ayuntamientos, para ocupar el cargo del primero de julio de dos mil siete al treinta de junio de dos mil diez, es evidente que, en esta ocasión, para el primero de julio de dos mil diez, los nuevos representantes populares (diputados locales y miembros de ayuntamiento), ya tendrían que haber sido electos, con las declaraciones de mayoría y validez firmes y en condiciones de tomar posesión.

Lo anterior, a diferencia de lo que ocurrirá con los representantes que serán electos para períodos subsiguientes, porque en este supuesto, el período correspondiente y las fechas de inicio o toma de posesión y finalización se modificaron, con lo cual existe margen y posibilidad jurídica para que la elección se lleve a cabo previamente, el primer domingo de julio de la elección.

Esto es, en dos mil diez, los ayuntamientos tenían que elegirse previamente al primer domingo de julio, que es la fecha exigida constitucionalmente, porque al primero del mismo mes, ya tenía que tomar posesión los nuevos representantes, y en lo sucesivo se podrá cumplir plenamente con la directriz constitucional, porque sus funciones concluirán el treinta y uno de agosto de dos mil



doce, es decir, serán electos para fungir durante un periodo de dos años y dos meses, esto de conformidad con el Decreto 677 aprobado por el Congreso del Estado de Yucatán, y con ello, en el primer domingo de julio de dos mil doce previo, se podrán elegir a los sucesivos representantes.

En atención a ello, es válido aceptar que será hasta dos mil doce, cuando las elecciones locales se llevarán a cabo el primer domingo de julio, por ser la primera fecha en la que es jurídicamente posible empatar la fecha de las elecciones locales con las federales, como lo exige la Constitución.

1
Todo en el entendido de que ello no implica sujetar la Constitución a los plazos previstos en la legislación local, sino que, a la fecha en la que se emite esta opinión, la legislatura ajustó los plazos de su elección en la medida de lo posible.

No pasa inadvertido que la legislatura local pudo ajustar oportunamente su legislación, para cumplir a cabalidad con la reforma constitucional, de haber realizado durante el dos mil ocho, en una reforma en la que se hubiese ordenado la celebración de los comicios locales en dos mil nueve, empero, ello debía ponderarse en cada caso concreto, dada la interacción de los fines perseguidos con la reforma frente al periodo para el cual fueron electas las autoridades

locales antes de esa reforma constitucional.

Por tanto, esta Sala Superior opina que el artículo Tercero Transitorio del Decreto de la Legislatura del Estado de Yucatán, por el que subsisten todos los plazos y términos relativos al proceso electoral que contempla el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, únicamente, para organizar los comicios locales que se llevarán a cabo en el dos mil diez, se apegará, en la medida de lo jurídicamente posible, al artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ.

PLANTEAMIENTO. El promovente impugna el artículo 71, numeral 5, fracción IV, incisos c) y d) números 2 y 4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que establecen:

Artículo 71.- Las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos serán:

...

5. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.

...

IV. El financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario público, tendrá las siguientes modalidades:

...



c) El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, así como de cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para efectos de esta Ley, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos, y

d) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas siguientes:

...

2. Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y en un plazo no mayor de un año;

...

4. Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.

El promovente aduce que estos preceptos vulneran los artículos 1, 14, 16, 41, fracción II, 116, fracción IV incisos b) y g) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aduce que en dichos preceptos no se contempla el manejo financiero de cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de los recursos líquidos de los partidos políticos.

Considera que por la naturaleza de los partidos y su manejo preponderante de recursos públicos podría traducirse en un

desfalco a la Nación, en tanto que el dinero público no puede ser sujeto de inversión en capital especulativo en virtud de que se ejerce anualmente y se encuentra etiquetado para uso específico.

Asimismo, el partido actor considera que dicha previsión permite la enajenación de recursos destinados a un fin distinto, que es el sostenimiento de las actividades ordinarias y tendientes a la obtención del voto de los partidos políticos.

OPINIÓN. Esta Sala Superior ya opinado respecto de un tema similar, en el expediente SUP-OP-6/2009, relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 Y 31/2009.

Al respecto, se sostuvo que el sistema de financiamiento de los partidos políticos en el Estado mexicano distingue dos fuentes, el público y el privado, cuya naturaleza, en cada caso es distinta. El financiamiento público tiene como propósito garantizar un nivel suficiente de recursos entre los distintos partidos políticos con el objeto de que la competencia electoral sea equitativa. La Constitución General prevé que éste debe prevalecer sobre los recursos de origen privado.

Como señala el actor, el manejo de los recursos públicos por parte de los partidos políticos debe estar limitado al uso previsto en las normas aplicables, esto es, el sostenimiento



de sus actividades ordinarias, especiales, y en proceso electoral, a actividades tendientes a la obtención del voto.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que los rendimientos obtenidos por los partidos políticos a través de la modalidad de instrumentos financieros, son parte del financiamiento privado, cuya naturaleza es distinta al financiamiento público, en tanto que permite que los partidos políticos se alleguen de recursos por medios distintos a los que provee el Estado.

La Constitución Política, en sus artículos 41, párrafo segundo, base II, y 116, segundo párrafo, base cuarta, inciso h), dispone que en las leyes secundarias se deban establecer los límites y modalidades de financiamiento privado. En este sentido, la legislación electoral del Estado de Yucatán prevé, al igual que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la modalidad de financiamiento por rendimientos derivados de inversiones en fondos, cuentas y fideicomisos.

En este sentido, como se dijo en la opinión vertida por esta Sala Superior, no es dable considerar que los ingresos cuestionados participen de la naturaleza del financiamiento público porque los fondos no los aportó el Estado, en ninguna de sus modalidades.

No obstante lo anterior, tanto la legislación federal como la local, establecen límites a dicha modalidad de financiamiento privado, en tanto que los partidos políticos no son entidades lucrativas, además de que existe la posibilidad de que los recursos que se utilicen en dichas inversiones tengan un origen público.

Por ello se establece que el financiamiento de origen privado no debe prevalecer sobre el público; que dichas inversiones deben ser notificadas al órgano electoral; que deben ser manejadas a través de operaciones bancarias y financieras en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año; que no están protegidas por el secreto bancario o fiduciario por lo que el instituto local electoral está en aptitud de requerir y verificar el correcto manejo de dichos fondos y, por último, que los rendimientos obtenidos deben destinarse a los objetivos del partido político en cuestión.

Por lo tanto, de esta forma se reduce el riesgo de especulación y posible pérdida de los recursos de los partidos políticos, aun cuando el origen de los recursos que se utilicen para tales fines provenga de financiamiento público.

Cabe referir que el Instituto Electoral del Estado de Yucatán, por conducto por ejemplo de su Consejo General y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene la facultad de



implementar medidas para evitar que los partidos políticos se excedan y pongan en riesgo el patrimonio público que les corresponde, lo cual coadyuva en la actuación apegada a la certeza y transparencia de los partidos respecto de los instrumentos financieros que pueden adquirir por tratarse de valores que por su naturaleza implican que los partidos lucren y sometan a la especulación financiera los recursos obtenidos por el financiamiento público o privado, que deben destinarse invariablemente para los fines que la Constitución Federal y la Ley Electoral local determinan.

En conclusión, la norma impugnada no contraviene la Constitución y por ello esta Sala Superior estima que dicho motivo de inconformidad es desacertado.

PLANTEAMIENTO. El actor controvierte lo dispuesto en el artículo 72, fracción I, inciso f), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que establece:

"Artículo 72.- Los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones ordinarias inmediatas anteriores y obtenido el 1.5% o más de la votación emitida para la elección de Diputados de mayoría relativa, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

I. Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias:

...

f) Los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento público que en la última elección de diputados de mayoría relativa no hayan obtenido el 2% de

la votación emitida, no podrán destinar los recursos recibidos a sufragar sueldos, bonos o compensaciones de directivos y/o empleados. El cumplimiento de esta disposición será vigilado y sancionado en cualquier momento por la Unidad Técnica de Fiscalización.

En concepto del actor, esta disposición viola lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, en cuanto establece que los partidos políticos tienen derecho a recibir el financiamiento público que les corresponda con el objeto de participar en el desarrollo democrático del país.

Considera que esta disposición es contraria a la naturaleza de la existencia de los partidos políticos, pues se condiciona el pago de los sueldos, bonos o compensaciones de directivos y/o empleados, a la obtención de un determinado porcentaje de votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, siendo que la Constitución no condiciona los emolumentos destinados a las actividades políticas.

OPINIÓN. Se estima que es sustancialmente acertado el concepto de invalidez.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracciones I y II y 116, fracción IV, inciso g), constitucionales, se advierte el derecho constitucional de los partidos políticos a recibir financiamiento público, el cual debe prevalecer sobre el privado, así como el derecho de autodeterminación en sus asuntos internos, en razón de lo cual no se limita o restringe el destino de los recursos



públicos asignados en forma equitativa en los partidos políticos para la consecución de sus fines y, por ende, dejó en libertad de éstos determinar el destino y fin lícito del patrimonio público que les otorga el Estado.

En efecto, el artículo 41, fracción II constitucional, establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y que señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, además de precisar que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la constitución y la ley.

En el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, establece que las constituciones y leyes de los estados, garantizarán en materia electoral que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

La interpretación conjunta de dichas disposiciones permite concluir que el constituyente impuso al legislador el deber de garantizar en la ley secundaria la entrega de recursos públicos a los partidos políticos para fines lícitos, sin más limitaciones que las de la equidad y la prevalencia de los

recursos públicos sobre los privados.

Estas reglas genéricas relativas al financiamiento no establecen mayores restricciones o modalidades, como pudiera ser la de imponer a los partidos el deber de destinar en forma específica parte de sus recursos a un rubro en particular.

Las únicas previsiones constitucionales se establecen en el inciso c) de la fracción II, del artículo 41 constitucional, en cuanto señala que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.

Como se ve, una vez que los partidos políticos tienen derecho al financiamiento, la Constitución no establece la prohibición de que destinen cierto porcentaje de aquél al pago de los sueldos, bonos o compensaciones de directivos y/o empleados.

Esta ausencia de prohibición debe interpretarse armónicamente con lo dispuesto en el propio artículo 41 constitucional, fracción I, último párrafo, que establece el principio de autodeterminación de los asuntos internos de los partidos políticos, a quienes dotó de independencia y



autonomía en lo relativo a las decisiones que son de su incumbencia, entre las cuales se encuentra, desde luego, la relativa al destino lícito que otorguen al financiamiento público que el Estado les entrega.

La principal intención de dotar de financiamiento público prevalente sobre el privado, consiste en establecer las condiciones mínimas que requiere el adecuado funcionamiento de los partidos políticos, para lo cual se dotó de un conjunto de recursos a dichos entes, a fin de hacer posible sus principales finalidades que son las de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con sus programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

El cumplimiento de estas finalidades requiere la realización de múltiples actividades que implican la inversión de recursos materiales y humanos que las hagan posibles, pues la consecución de la participación del pueblo en la vida democrática está altamente condicionada al cúmulo de elementos económicos con que cuente cada partido.

Incluso, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, entre las obligaciones principales de los partidos se

encuentran las siguientes:

- Contar con un domicilio legal,
- Publicar y difundir sus plataformas político electorales,
- Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y ministros de culto de cualquier religión o secta;
- Mantener el número mínimo de afiliados exigidos por esta Ley;
- Destinar los bienes de que dispongan al cumplimiento de sus fines y utilizar las prerrogativas y el financiamiento exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sus gastos de campaña;
- Informar al Instituto sobre el origen monto y aplicación de sus recursos financieros, permitir la práctica de auditorías y otras acciones de fiscalización que ordene el Consejo General, así como entregar la documentación que le solicite respecto a sus ingresos y egresos la Comisión Permanente de Fiscalización;

Este tipo de actividades y otras connaturales a ellas, según las máximas de la experiencia, requiere de múltiples



elementos humanos y materiales para realizarlas y por ello es necesario solventar gastos relacionados con la papelería, el transporte, el mantenimiento de muebles e inmuebles, el servicio de secretarías y demás servicios profesionales, entre otros necesarios para que los partidos puedan cumplir con los referidos deberes.

Uno de los gastos corrientes implicado en el desarrollo de cualquier actividad colectiva, por regla general, consiste en el pago de los sueldos de los empleados de la organización correspondiente, entre otros, como los que construyen o dan mantenimiento a las instalaciones y los sujetos que ejecutan materialmente los programas partidistas y cuyos gastos se podrían ubicar dentro del rubro de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, en tanto se trata de las personas que hacen posible el funcionamiento constante y permanente de la estructura básica de un partido político.

Lo anterior permite concluir que el financiamiento público otorgado a los partidos tiene como principal función la de dotar a éstos de los elementos necesarios para mantener en funcionamiento efectivo su estructura, a fin de lograr los fines que constitucionalmente se le reconocen.

En el caso, de conformidad con el artículo 72, párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, tienen derecho al financiamiento público de sus actividades, los partidos

políticos que participaron en las elecciones ordinarias inmediatas anteriores y hayan obtenido el 1.5% o más de la votación emitida para la elección de diputados de mayoría relativa.

Como ya se dijo el artículo 72, fracción I, inciso f) de la ley citada, establece que los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento público, que en la última elección de diputados de mayoría relativa no hayan obtenido el 2% de la votación emitida, no podrán destinar los recursos recibidos al pago de sueldos, bonos o compensaciones de directivos y/o empleados.

En concepto de esta Sala Superior, dicho precepto es inconstitucional, en principio, porque impone una finalidad específica para los recursos públicos asignados a los partidos políticos que no está prevista en la constitución, con lo cual se vulnera el principio de autodeterminación de los partidos políticos, que les permite destinar a fines lícitos sus recursos con el objeto de lograr los fines de este tipo de instituciones políticas.

Por otro lado, el precepto es inconstitucional porque contraviene los principios del financiamiento público previstos en los artículos 41, fracción II y 116, fracción IV, inciso g) constitucionales, consistentes en el acceso equitativo al financiamiento público para sus actividades ordinarias, pues la restricción basada en el porcentaje de



votación, que impide destinar los recursos recibidos a sufragar sueldos, bonos o compensaciones de directivos y/o empleados, pone en riesgo el cumplimiento de las finalidades perseguidas por los partidos políticos en tanto que, al menos, el pago de sueldos a los empleados constituye uno de los aspectos de los gastos ordinarios de ese tipo de organizaciones.

Además de que no se trata de una medida idónea y razonable para conseguir el fortalecimiento del sistema de partidos previsto a nivel constitucional, ni tampoco se trata de una restricción que claramente coadyuve a la consecución de sus fines y, por el contrario podría poner en riesgo la subsistencia de ciertos partidos, ante la imposibilidad legal de sufragar las prestaciones de sus empleados y directivas que hacen posible su funcionamiento efectivo.

Es verdad que la parte en la que la norma restringe la posibilidad de pagar sueldos, bonos o compensaciones de directivos, no es claramente contrario a la constitución, ni tampoco existe una evidente contravención a los principios ya mencionados, tomando en cuenta que admite la posibilidad de ser constitucional si se interpreta conforme a la Constitución.

En efecto, por regla general, los estatutos partidistas establecen que sus directivas están integradas por militantes y que su función no es obligatoria sino preponderantemente

voluntaria al derivar de sus derechos de afiliación, de tal manera que las directivas partidistas no siempre se ejercen a cambio de una contraprestación laboral o equiparable a ésta, sino como una distinción política o una forma de escalar socialmente al interior de la institución, de ahí que, entendida de esa manera, la norma podría resultar constitucional.

Ahora bien, la interpretación conforme no impide señalar que el precepto impugnado contempla a los empleados y a los directivos en la restricción de pagarle sus prestaciones, en caso de no obtener un porcentaje mayor al 2% de la votación emitida la última elección de diputados de mayoría relativa, lo cual, en sentido literal, así sea parcialmente, se contrapone a los fines perseguidos por los partidos de conformidad con lo previsto en la Constitución.

En efecto, por mandato legal, las directivas de un partido político deben permanecer funcionando en forma permanente, tal como se establece en el artículo 46, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que es similar al artículo 38, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen el deber de los partidos políticos de mantener el funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, para lo cual podría resultar necesario invertir parte del financiamiento correspondiente en ese rubro.

También se presenta el riesgo de que, con la restricción



analizada, solamente pueda destinarse el financiamiento privado al pago de las prestaciones de los empleados y la directiva, lo cual sería contrario al principio de que en las actividades ordinarias y extraordinarias de los partidos políticos debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado, precisamente para evitar que los intereses particulares, incluyendo los de origen ilícito, se apoderen de las estructuras partidistas, tan solo por proporcionar los elementos económicos necesarios para su funcionamiento.

1 Sin que esté de más señalar que la restricción al destino de los recursos públicos de los partidos políticos, dependiendo de un mínimo de votación recibida en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de representación proporcional, podría afectar, además, los derechos laborales adquiridos por los empleados de los partidos, por ejemplo, en caso de ser insuficiente el financiamiento privado.

En razón de lo anterior esta Sala Superior considera que el precepto aquí analizado contraviene lo dispuesto en los artículos 41, fracción I y II, así como 116, fracción IV, inciso g) constitucional.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.

PLANTEAMIENTO. El actor controvierte lo dispuesto en los artículos 188 B, fracción II y 198, fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán que a

la letra señalan:

Artículo 188 B. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por:

...

II. Actos de precampaña: Las acciones consistentes en reuniones públicas y privadas, asambleas, debates, entrevistas en los medios de comunicación y demás actividades; cuyo objeto sea promover la imagen, ideas y propuestas de los aspirantes a candidatos, entre los militantes y simpatizantes de un partido políticos, así como del electorado en general, con el fin de obtener la nominación como candidato a la postulación de un cargo de elección popular;

Artículo 198. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

...

III. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos y electrónicos que comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio de comunicación deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y...

En concepto del actor, estos preceptos son contrarios al artículo 41 constitucional, en el cual se establece que el Instituto Federal Electoral es autoridad única en la administración de tiempos en radio y televisión, de tal manera que la autoridad federal no tiene pares, ni está en un plano horizontal de coordinación con autoridades electorales en materia de administración de tiempos en radio y



televisión.

OPINIÓN. En la perspectiva de esta Sala Superior el concepto de invalidez no demuestra la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.

El artículo 41, fracción III, apartado A constitucional, establece, en esencia, que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que esta facultad consiste en que la administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es una atribución exclusiva a nivel nacional del Instituto Federal Electoral, incluso tratándose de elecciones en los Estados, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna que habilite a los permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades electorales locales, sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las autoridades electorales locales no pueden investirse de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones que en la materia disponga legalmente el Instituto Federal Electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una función que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación.³

Como se adelantó, lo expuesto pone en evidencia el desacierto del concepto de invalidez en estudio, porque el actor parte del supuesto equivocado de que en las disposiciones impugnadas se establecen facultades a favor

³ Jurisprudencia P./J. 100/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 593, del rubro: **"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISIÓN A QUE TENDRÁN ACCESO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSO TRATÁNDOSE DE ELECCIONES ESTATALES."**



de las autoridades locales para distribuir tiempos en radio y televisión a los partidos políticos, lo cual es desacertado, pues solamente prevé los supuestos en los que se considera que ciertas actividades de los precandidatos constituyen actos de precampaña, los topes de gastos y la forma en que deben reportarse.

Los preceptos en cuestión no otorgan facultades a la autoridad administrativa electoral local para que emita actos mediante los cuales se oriente el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos para controlar el acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación, sino que se limitan a señalar qué tipo de actos se consideran como de precampaña y lo relativo a los topes de gastos y la manera de rendir los informes respectivos.

En otras palabras, se trata de normas que tienden a enunciar los tipos de actos que se califican como de precampaña, señalando, en términos generales, las entrevistas y demás actividades en cualquier medio de comunicación, lo cual tiene por objeto, exclusivamente, precisar en qué casos las actividades de los precandidatos encuadran en ese supuesto, a fin de determinar, entre otras cuestiones, cuándo deben reportarse las erogaciones derivadas de esos actos en los informes de gastos de precampaña e, incluso, en qué casos ciertos actos pueden configurar actos anticipados de ese periodo, a fin de ejercer las facultades administrativas

sancionadoras correspondientes.

Es evidente que en los preceptos cuestionados no se desarrolla una facultad a favor de las autoridades locales para asignar o distribuir tiempos en radio y televisión, pues aparte de que ni siquiera se mencionan expresamente esos específicos medios de comunicación, lo cierto es que no se prevé la posibilidad de que el instituto electoral local invada las facultades que en la constitución federal se reserva al Instituto Federal Electoral.

En razón de lo anterior, esta Sala Superior opina que los artículos 188 B, fracción II y 198, fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán, no son inconstitucionales.

QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ

PLANTEAMIENTO. El partido solicita la declaración de invalidez del artículo **188 K**, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán que dispone:

"Artículo 188 K. Los precandidatos que ostenten un cargo de elección popular o desempeñen un puesto en la Administración Pública estatal o municipal, y manejen recursos económicos, no deberán emplear personal y recursos materiales o económicos a su alcance, para promover notoriamente su imagen".



El promovente aduce que el referido precepto contraviene lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, atenta contra los principios electorales de certeza, legalidad, objetividad, equidad e imparcialidad, contenidos en el diverso 116, fracción IV, inciso b), de la propia Carta Magna.

Lo anterior, porque el texto del artículo del código local, permite que los servidores públicos que sean precandidatos, puedan hacer uso del personal y recursos para promover su imagen, siempre que no sea notorio.

OPINIÓN. El planteamiento del actor se estima **desacertado**.

En el artículo 134, párrafos primero, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone literalmente:

"**Artículo 134.-** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
(...)"

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."

Como se observa, dicho precepto constitucional regula los principios básicos que deben observarse en la administración de los recursos públicos de que dispongan los servidores públicos de los órganos de gobierno federal, estatal y municipal, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, de tal suerte que establece el deber de todos los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, tanto de la administración pública centralizada o paraestatal, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, para aquellos rubros que hayan sido destinados, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Asimismo, impone el imperativo de que la propaganda institucional, se abstenga de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

De ahí que, la disposición constitucional en comento se dirige a evitar que los servidores públicos, den un destino incorrecto al patrimonio de las entidades u órganos de



gobierno que representan, provocando inequidad entre los contendientes del proceso comicial; ello, porque dicha hipótesis normativa en ningún momento hace distinción alguna, sino que refiere de manera general, a todos los servidores públicos.

El mandato para conducirse de modo imparcial en el manejo de los recursos y las prohibiciones para incidir en la equidad en la contienda o incluir la imagen del servidor público en la propaganda, como promoción personalizada, aparecen consignados de forma absoluta en la norma, pues alcanza a todos los casos comprendidos en el supuesto, sin utilizar adjetivo alguno que pudiera servir para entender excluido algún caso o tipo de casos.

En consecuencia, es claro que de acuerdo con dicho precepto constitucional, los sujetos a que se refiere el artículo 188 K, del Código Electoral de Yucatán, que son **personas con cargo de elección popular o que desempeñen un puesto en la Administración Pública Estatal o Municipal**, de acuerdo con el artículo 134 constitucional, quedan comprendidos en el mandato y restricciones constitucionales mencionadas.

Por tanto, tienen la obligación ineludible de conducirse con imparcialidad en sus actividades institucionales, aunado a que tienen **prohibición absoluta** de usar recursos públicos para promover su imagen.

Por su parte, en el artículo 188 K, de la ley electoral de Yucatán, se dispone que la prohibición de usar personal o recursos públicos será para promover "notoriamente" la imagen del precandidato, que tenga el carácter de servidor público.

De este modo, el dispositivo mencionado contiene una distinción basada en un aspecto probatorio y de apreciación jurídica no prevista en el multicitado artículo 134 constitucional, al calificar de "notoria" la promoción de la imagen, pues hace admisible la interpretación de que sólo se encuentran prohibidos los actos de esos sujetos cuando sea "notoria" la promoción de su imagen.

Consecuentemente, la utilización de tal adjetivo da pauta para entender que tal tipo de precandidatos pueden promover su imagen con personal y recursos públicos, siempre que ello no sea notorio o evidente, tal como lo aduce el promovente, lo cual se opone abiertamente a la restricción constitucional prevista en el artículo 134 constitucional, que comprende todos los casos, con independencia de la facilidad probatoria con que puede advertirse esa irregularidad, esto es, que sea notoria o no la promoción de la imagen del servidor público de que se trate.



Lo anterior, en concepto de esta Sala Superior, es suficiente para considerar inconstitucional la porción normativa "notoriamente".

SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.

1 **PLANTEAMIENTO.** El actor sostiene que el artículo 233 C de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Yucatán es contrario a la Constitución General de la República porque prevé el uso de urnas electrónicas para recibir votación en los procesos que se celebren en la entidad, pero sin incluir una explicación de las razones y fundamentos de su utilización, por lo que no existe certeza, legalidad y confianza en el electorado de que el voto que se emitirá en esos procesos tendrá las características de libre, secreto, universal y directo.

Asimismo, el actor agrega que la intención del legislativo es benévola, pero al mismo tiempo tendenciosa e imprecisa, porque la propuesta de alcanzar los avances tecnológicos sería aceptable siempre que existiera certeza en los votos que se emitan en la urna electrónica y la prevalencia de la naturaleza del sufragio, pero al no existir certeza, legalidad y objetividad, debe declararse la inconstitucionalidad de dicho precepto.

OPINIÓN. En opinión de esta Sala Superior, el planteamiento debe desestimarse porque el precepto cuestionado no resulta

contrario a la Constitución General de la República.

De acuerdo con el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los Estados garantizarán en materia electoral que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo y que en la función electoral sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

A mayor precisión, el contenido del precepto constitucional mencionado es el siguiente:

"Artículo 116.

[...]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

[...]"

Como se advierte, ciertamente la Constitución dispone que la emisión del voto debe revestir determinadas características, pero no incluye algún mandato específico de la forma en que



debe llevarse a cabo la emisión del sufragio, por ejemplo con la utilización de boletas como actualmente se hace a nivel federal, y tampoco prohíbe la utilización de otras alternativas para recibir la votación, entre ellas la implementación de sistemas electrónicos, como sería el caso de la urna electrónica.

Por tanto, el simple hecho de prever la utilización de urnas electrónicas, por sí, no resulta contrario al texto constitucional.

Ahora bien, el actor afirma que del referido artículo 233 C se desprende la falta de razones que sostengan la propuesta de utilizar urnas electrónicas y de ello deriva que no estarán garantizados los principios rectores de la materia electoral (menciona certeza, legalidad y objetividad) y que el sufragio cumpla con las características de ser universal, libre, secreto y directo. El referido precepto dispone:

"Artículo 233 C.- La utilización de los sistemas electrónicos no subsana la obligación de guardar los resultados impresos en los dispositivos de la urna, a fin de que el ciudadano se cerciore de su voto y exista la posibilidad de comparar y auditar los resultados electrónicos con los impresos, en caso de cualquier controversia.

Al momento del escrutinio los partidos políticos podrán solicitar el cotejo de los resultados arrojados por el sistema electrónico con las boletas emitidas, a fin de establecer la validez final en el acta correspondiente."

De acuerdo con lo anterior, no se advierte elemento alguno

dentro de dicho precepto que pudiera contrariar o poner en peligro las características exigidas para el sufragio activo, y tampoco los principios rectores de la materia electoral, y en cuanto a la posibilidad de que sea precisamente la omisión de incluir en su texto expresamente el respeto a esas características del voto y principios de la materia, tampoco asiste la razón al actor, porque dicho precepto forma parte de un capítulo en el que, entre otros, figuran los artículos 233 A y 233 D, que disponen:

"Artículo 233 A.- El sistema electrónico garantizará el respeto de los principios rectores de la función electoral; su funcionamiento se apegará en lo conducente, a las formalidades aplicables a las votaciones convencionales, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo y a los lineamientos que para tal efecto, emita el Consejo General.

Artículo 233 D.- El Instituto dispondrá previa y durante la jornada electoral los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el funcionamiento del sistema electrónico y la secrecía del voto."

De este modo, dentro del mismo ordenamiento se prevé que el sistema electrónico garantizará el respeto de los principios rectores de la materia y se apegará en lo conducente a las formalidades de las votaciones convencionales, incluso se enfatiza que deberá garantizar la emisión secreta del voto.

De lo anterior se obtiene que se prevé en la implementación del uso de urnas electrónicas deberá garantizarse el respeto a los principios rectores de la materia y a las características del sufragio, por lo que, en abstracto, no se advierte elemento



alguno dentro de dichas disposiciones que pudiera resultar contrario a la Constitución General de la República.

Además, debe tenerse presente que los preceptos mencionados sólo contienen directrices o lineamientos generales para la implementación del sistema electrónico para recibir votación, pero cuyos lineamientos serán acordados por el Consejo General y se aplicará, en lo conducente, las formalidades para las votaciones convencionales (se entiende en referencia a como se llevan a cabo actualmente), por lo que la "falta de exposición de razones y fundamentos en que se sostenga la propuesta de reforma" resulta connatural a la circunstancia de que se trata de un marco normativo general que, necesariamente, requerirá de ser reglamentado con posterioridad para poderlo implementar.

En virtud de lo expuesto, se concluye:

PRIMERO. Esta Sala Superior estima que no contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 116, apartado A, fracción I, y 3º transitorio de la Constitución Política del Estado de Yucatán; así como 71, numeral 5, fracción IV, incisos c) y d), este último en los apartados 2 y 4; 131, último párrafo; 188 B, fracción II; 198, fracción III, y 233 C de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Por lo que hace a los artículos 72, fracción I, inciso f), y 188 K, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se considera que son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las consideraciones expuestas.

La presente opinión la emiten por unanimidad de votos los magistrados integrantes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil nueve.


MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA


MAGISTRADO

CONSTANCIO CARRASCO DAZA


MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA


MAGISTRADO

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA


MAGISTRADO

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR

45

SUP-OP-13/2009

MAGISTRADO

SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR

MAGISTRADO

PEDRO ESTEBAN PENAGOS
LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

CERTIFICACIÓN

El suscrito, Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 201, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de las instrucciones de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, Presidenta de este órgano jurisdiccional, **CERTIFICA:** Que el folio precedente con número cuarenta y cinco, forma parte de la opinión emitida en esta fecha por esta Sala Superior, en el expediente **SUP-OP-13/2009**, en respuesta a la consulta formulada por el Ministro Juan N. Silva Meza.-DOY FE.

México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil nueve.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO,

